



Miki y Duarte

mientrastanto.e

Número 241 de enero de 2025

Notas del mes

La mejor economía del mundo

Albert Recio Andreu

¿Realmente ha revocado el Gobierno la adjudicación de contratos de adquisición de armamento a favor de empresas israelíes?

Eduardo Melero Alonso

El año de la inmigración

Antonio Izquierdo Escribano

Unas conclusiones para pensar y repensar la educación con memoria

Isabel Alonso Dávila

Universidad, S. A.

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Notas sobre la desmovilización democrática

Albert Recio Andreu

Pensamiento crítico, seducción y sentido

Sergio Tamayo Leiva

Ensayo

El continuismo socialista

Antonio Antón

De otras fuentes

Dialéctica sin dogma

Miguel Candel

Un genocidio entre dos crisis

Rafael Poch de Felíu

La quiebra de Siria aumenta la tragedia palestina

Rafael Poch de Felíu

Gaza: la vida en una trampa mortal

Médicos Sin Fronteras

«La mayor cantidad y lo más rápido posible»: colonos israelíes buscan tierras en Siria y Líbano

Illy Pe'ery

El peligroso y conveniente optimismo de las élites

Juan Bordera, Antonio Turiel, Fernando Valladares y Alejandro Pedregal

Las grandes petroleras dijeron hace setenta años que las emisiones de combustibles fósiles podrían afectar a la «civilización»

Rebecca John

Registrar la jornada laboral en el empleo de hogar

Isabel Otxoa

La Biblioteca de Babel

Tierra de Babel

Wellness

Campañas

Ecologistas en Acción rechaza la firma del tratado entre la UE y Mercosur

Documentos

II Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación: Conclusiones

...Y la lírica

Eugenio Montale

Albert Recio Andreu

La mejor economía del mundo

Cuaderno de locuras: 16

Por fin una buena noticia. La revista económica *The Economist*, la que consideran lectura de referencia las élites económicas, ha calificado a España como la mejor economía de la OCDE en 2024. Como para los occidentales el resto del mundo no importa, equivale a decir la mejor del mundo. La noticia ha sido celebrada por el Gobierno y los partidos que lo forman como un reconocimiento a su buena gestión, como una demostración de que es posible llevar adelante un moderado programa reformista y mantener una economía próspera. En cierto modo una impugnación al mantra neoliberal de que la única vía de avance económico es la de la bajada de impuestos, la desregulación. Como argumento defensivo de la acción de Gobierno, en tiempos de poderes económicos subidos de tono, constituye un alivio. Aunque con el modelo de debate político impuesto por la derecha ultramontana (en sus dos versiones) no parece que el «dato» vaya a servir de mucho. Y se corre el peligro de que la gente de Sumar, especialmente, se aferre de forma acrítica a esta valoración positiva como forma de defensa de las reformas laborales, que son su mejor aportación al Gobierno de coalición. Porque la cuestión real es que la evaluación de la revista británica es sesgada, parcial y deja fuera de miras cuestiones cruciales acerca de lo que debería hacer falta para que nuestra economía fuera considerada una buena economía.

Cualquier evaluación es casi siempre parcial, y más en una cuestión tan compleja como una economía nacional. Según los ítems que se consideren se llegará a una conclusión u otra. En la que nos ocupa, hay dos tipos de problemas. El primero, que ya han destacado muchos comentaristas, es que se ignoran aspectos cruciales del buen funcionamiento de una sociedad, como son todos los que afectan a las desigualdades, la cobertura de necesidades básicas y el impacto ambiental. El segundo es que al tratarse de una evaluación basada fundamentalmente en datos agregados de un solo año, se ignora el proceso que ha llevado hasta allí y se dice poco sobre la salud a medio y largo plazo de esta economía. Vale la pena echar la mirada atrás y ver que hace veinte años la economía española también presentaba datos «espectaculares» de crecimiento económico, empleo y cuentas públicas, hasta que el estallido de la burbuja financiera mostró las debilidades del modelo. No es que ahora las cosas sean idénticas, pero se ha de admitir que la salud de una sociedad no puede determinarse con cuatro observaciones puntuales.

La evaluación de *The Economist* se basa en el comportamiento de cinco parámetros: la evolución del PIB (donde España presenta un crecimiento muy superior a la mayoría de países), la caída del desempleo (habitualmente asociada a la evolución del PIB), la inflación subyacente (que ha experimentado una clara disminución hasta situarse en el 2,4%, ligeramente por encima del 2% que demanda la Unión Europea), la fiscalidad pública (mejorada por el crecimiento económico) y el índice de la bolsa (que constituye sobre todo una buena noticia para las clases pudientes, una muestra del buen momento de la economía rentista). Si aceptamos la lógica del modelo dominante no cabe duda de que, en este momento, la economía mercantil española marcha mejor que muchas otras de su entorno.

La cuestión es si estos datos constituyen una buena información de la bondad de una economía. Si son suficientes para realizar un buen diagnóstico. Y en particular si la izquierda lo puede

presentar con satisfacción. Sobre todo cuando se constata que en el discurso público abundan las manifestaciones de la gente corriente sobre problemas de vivienda, de bajos salarios, de precariedad laboral.

Cuando se toma en consideración alguna de estas variables se observa que se ha producido una cierta mejoría en los últimos años, aunque el nivel de los problemas candentes es relevante y no da para pensar que estemos en un mundo deseable. Los índices de desigualdad de la Encuesta de Condiciones de Vida muestran mejoras en sus principales indicadores (el índice de Gini y el de la ratio entre el 20% más rico y el 20% más pobre) y una reducción en los niveles de riesgo de pobreza y de exclusión social. Aunque las encuestas que se usan para calcular estos índices habitualmente excluyen a una parte de la gente más pobre (indigentes, migrantes sin papeles) y a la más rica (ésta tiene su intimidad muy protegida, entre otros de encuestadores fisgones)[1].

Admitiendo esta limitación, es obvio que medidas como el alza del salario mínimo, los ertes para situaciones problemáticas, la renta de ciudadanía, la reforma laboral (con reducción del empleo temporal y un nuevo impulso a la negociación colectiva), la mejora de las pensiones más bajas y el mantenimiento del poder adquisitivo del resto han contribuido a moderar unos niveles insoportables de pobreza. Pero el nivel en el que se mantienen las tasas de riesgo de pobreza (21,5% de la población) y de exclusión (25,2%) son una muestra de una situación intolerable que esconde muchos dramas personales. Especialmente duros en el caso de los migrantes sin papeles. Y tampoco se mide bien la importancia del problema de la vivienda, especialmente duro para jóvenes, familias monomarentales e inmigrantes en general. Los niveles de rentas que esta parte de la población tiene que dedicar a la vivienda pueden estarse comiendo parte de las mejoras. De igual forma, está poco estudiado el impacto de la inflación por niveles de renta y edad, por cuanto las variaciones de los precios afectan de forma asimétrica a personas y familias con distintos tipos de consumo (los cuales están directamente asociados a la renta familiar).

Tampoco hay ninguna consideración sobre los impactos ambientales de la actividad económica. Impactos que tienen efectos sobre las condiciones de vida cotidianas y futuras del devenir humano. Que una revista financiera, dedicada a un público rico, no se preocupe por medir estos impactos es entendible. Que estos sigan sin considerarse en la evaluación de lo que es una economía sana es un error que ya se está pagando caro.

Las medidas macroeconómicas no están pensadas para evaluar el buen hacer de una economía, si por tal entendemos la satisfacción universal de necesidades básicas, las posibilidades de una vida razonable para todo el mundo dentro de los límites impuestos por el entorno natural. Están pensadas para medir el crecimiento económico en los términos definidos por las estadísticas y el enriquecimiento privado. Y la medida del crecimiento económico considera tan buena una renta inmobiliaria depredadora como un consumo insaciable de medicamentos provocado por formas de vida y de producción generadoras de enfermedades, la producción de armamentos o la producción de bienes que realmente sirven para garantizar una vida digna. Todo lo que genera un flujo monetario es bienvenido. Se preocupa poco de cómo se distribuye y nada de su impacto sobre el mundo natural.

Hay además una cuestión adicional, que el optimismo actual tiende a olvidar. El crecimiento reciente de la economía española ha estado liderado claramente por la expansión turística. Aunque también han intervenido otros factores, como un sector industrial más reducido pero

mejor orientado hacia los mercados internacionales, la expansión de las actividades ligadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y la inversión en energías renovables. El turismo constituye el elemento diferencial que explica parte del éxito del momento. Las últimas evaluaciones sitúan que la actividad turística representa el 12% del PIB, un nivel muy elevado de especialización que puede resultar nefasto si el sector sufre una recesión por causas diversas (caída de visitantes por problemas de renta en sus países de origen, por impacto de catástrofes naturales o por la competencia internacional). Ya lo experimentamos con el *boom* de la construcción y, aunque las cosas nunca se presentan de la misma forma, el peligro sigue ahí. Sin contar los costes que genera la propia actividad en muchos aspectos: depredación ambiental, presión sobre la vivienda, ocupación del espacio urbano... Y existen otros campos de especialización igualmente problemáticos, como es el del automóvil o el de la industria cárnica, con futuros inciertos.

El impacto de la crisis ecológica, que ya hemos empezado a experimentar en forma de sequías y de fenómenos extremos, va a ser creciente en los próximos años y puede afectar a sectores cruciales de la economía española actual. Y la resistencia de los intereses económicos afectados, lejos de reorientar el problema, agravan su solución. La sociedad española sigue teniendo graves problemas de desigualdad —agravados por los discursos y las prácticas racistas contra la inmigración—, de envejecimiento y de orden ecológico. Por ello, los discursos triunfalistas suenan tan huecos y peligrosos. Y de ahí que la izquierda, en lugar de centrarse en dar bombo a evaluaciones favorables tan sesgadas, debería hacerlo en propiciar una evaluación distinta de lo económico. En términos sociales y ecológicos, en términos de bienestar efectivo. Sin una dura batalla cultural, con visión de largo plazo, los meritorios esfuerzos por introducir reformas pueden quedar una vez más ahogados por la coalición de fuerzas regresivas que controlan los aspectos clave de la economía real.

1. En las estadísticas de renta que elabora el INE a partir de datos fiscales y que se ofrecen al nivel de mesa electoral, el nivel de renta está topado para evitar que se pueda identificar un colegio electoral donde residan los megaricos. [?](#)

Eduardo Melero Alonso

¿Realmente ha revocado el Gobierno la adjudicación de contratos de adquisición de armamento a favor de empresas israelíes?

Como ya señalé en una nota anterior ([mientrastanto.e 238, octubre de 2024](#)), la adquisición de armamento a empresas israelíes es uno de los ámbitos en los que se desarrollan las relaciones militares entre España e Israel. La industria militar israelí está fuertemente orientada hacia la exportación. De esta forma, el Estado israelí se aprovecha de las economías de escala y se beneficia de la reducción de costes en el armamento producido en su país. Indirectamente, la adquisición de armamento israelí por otros estados contribuye a la ocupación militar de Palestina. Estas compras de armamento israelí se pueden realizar a empresas israelíes con sede en Israel, a empresas constituidas en España según el derecho español que son filiales de empresas israelíes o a empresas españolas que fabrican armamento con patente israelí a través de un acuerdo entre empresas.

A finales de octubre y principios de noviembre de 2024, el Gobierno español hizo pública su intención de anular la adjudicación de dos contratos de adquisición de armamento a empresas israelíes. El primero de ellos, para el suministro de munición de 9 milímetros a la Guardia Civil, fue otorgado a la empresa Guardian Homeland Security S. A. por valor de 6.642.900 €. El segundo contrato se refería a la adquisición del programador M339 SETTER, que mejora la capacidad destructiva de la munición de 120 milímetros que utilizan los carros de combate Leopard, adjudicado a la empresa israelí IMI Systems LTD por valor de 2.226.407,5 €.

El Ministerio del Interior redactó una [noticia](#) en relación con la adjudicación del primer contrato, con fecha de 29 de octubre de 2024, en la que se afirmaba que «El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el proceso para rescindir la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de adquisición de cartuchería 9 x 19 mm PB NATO para la Guardia Civil». La noticia del Ministerio no afirmaba que se hubiera invalidado la adjudicación, sino que se había iniciado el procedimiento para su rescisión. A pesar de ello, la mayoría de los titulares de la prensa dieron por hecho que la anulación ya se había producido, aunque, en algunos casos, sí indicaban en el cuerpo de la noticia que se habían iniciado los trámites para dicha anulación. Ejemplos de estos titulares son: «[Interior cancela la compra de 15 millones de balas a una firma israelí por 6,6 millones](#)» (*El País*, 29 de octubre de 2024), «[Interior cancela el contrato de compra de balas a una empresa israelí para la Guardia Civil por 6,5 millones de euros](#)» (*El Mundo*, 29 de octubre de 2024), «[Interior anula la compra de 15 millones de balas israelíes para la Guardia Civil tras la información de la SER](#)» (Cadena SER, 29 de octubre de 2024), «[Interior anula el contrato de compra de munición con la filial israelí Guardian Defense & Homeland Security](#)» (*El Salto*, 29 de octubre de 2024).

En cuanto al segundo contrato, parece ser que no hubo información oficial por parte del Ministerio de Defensa. Aunque esta noticia tuvo menos presencia en los medios de comunicación, de nuevo se dio por hecho en los titulares de la prensa que la cancelación de la adjudicación del contrato ya se había producido. La primera información la dio *Vozpópuli* (26 de noviembre de 2024): «[El ejército anula un contrato con una empresa israelí para mejorar la munición de sus carros de combate](#)»

». Más entusiastas se mostraron en el *Huffington Post* (27 de noviembre de 2024): «[España frena de manera inmediata un negocio para carros de combate con Israel](#)». En una línea similar *Infodefensa* (28 de noviembre de 2024) redactó el siguiente titular: «[El Ejército de Tierra cancela la compra de un programador israelí para la munición de sus carros Leopard](#)».

Todos estos titulares periodísticos demuestran el triunfo de la estrategia comunicativa del brazo socialista del Gobierno. Una semana antes del anuncio de la primera cancelación de la adjudicación de contratos, el 22 de octubre de 2024, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, había dirigido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, solicitando la suspensión de los contratos vigentes con empresas israelíes de seguridad y defensa. En su respuesta, la ministra de Defensa habría afirmado que «No se ha vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel desde el 7 de octubre», con excepción de piezas de repuesto (véase [elDiario.es, de 23 de octubre de 2024](#)). En el mismo sentido, la [mencionada noticia del Ministerio del Interior](#) de 29 de octubre de 2024 afirmaba que «El Gobierno español mantiene el compromiso de no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza».

Personalmente, tengo muchas dudas de que la revocación de la adjudicación de los dos contratos llegue a realizarse. Con total seguridad no se ha producido todavía. Según la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público, la adjudicación de los dos contratos ya se ha acordado. La adjudicación de un contrato es un acto declarativo de derechos y no se puede modificar, anular o dejarse sin efectos con total libertad. Si se considera que la adjudicación fue ilegal, deben seguirse los trámites procedimentales y las garantías jurídicas previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si se cancela por motivos de oportunidad política, se estaría llevando a cabo la privación singular de un derecho. Es decir, se estaría llevando a cabo una expropiación y habría que indemnizar a las empresas tras concluir el expediente seguido de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa. En definitiva, la cancelación de las adjudicaciones requiere meses de tramitación antes de poder convertirse en una realidad.

En noviembre de 2024, presenté una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio del Interior. Solicitaba una copia del acuerdo del Ministerio del Interior por el que se ha iniciado el procedimiento administrativo para rescindir la adjudicación del contrato de adquisición de munición de 9 mm para la Guardia Civil. En su contestación (número de expediente 001-098154), el Ministerio del Interior no me entregó el documento solicitado, sino que señalaba que «toda la información disponible, respecto al contrato referido, se encuentra en el expediente R/0003/A/24/2» que puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sin embargo, en la Plataforma sólo se ha modificado el nombre de la empresa adjudicataria con fecha 11 de diciembre. Ahora aparece «IMI SYSTEMS LTD – Adjudicatario – Guardian Homeland Security S.A. – Representante». IMI Systems es una empresa de armamento israelí (Israel Military Industries Ltd.). La Plataforma de Contratación del Sector Público no hace ninguna mención a la rescisión o revocación de la adjudicación del contrato. Más bien, se habría corregido un error en la adjudicación, ya que la documentación previa no mencionaba a la empresa Guardian Homeland Security, sino a IMI Systems. Por cierto, la Plataforma de Contratación del Sector Público tampoco hace referencia a la revocación de la adjudicación del contrato para la adquisición de programador M339 SETTER espoleta 120 mm (número de expediente 2024/ETSAE0906/00001604E).

Aparte de los dos contratos mencionados, el Gobierno no se ha pronunciado sobre lo que va a hacer con los demás contratos de adquisición de armamento que se han adjudicado a empresas israelíes con anterioridad a octubre de 2024; es decir, si tiene intención de revocar dichas adjudicaciones. Desde el 7 de octubre de 2023, el Estado español ha adjudicado contratos de adquisición de armamento a empresas israelíes o a sus filiales en España por valor de más de 1.000 millones de euros (véase el informe [*Business as usual. Análisis del comercio de armas español de 2022-23 y argumentos para un embargo de armas a Israel*](#), elaborado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau). La información básica de dichos contratos se recoge en la siguiente tabla (que cubre el período entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de mayo de 2024):

Empresa adjudicataria	Objeto del contrato	Valor estimado del contrato en euros (sin impuestos)	Fecha del acuerdo de adjudicación
Elbit Systems Land Ltd.	Mantenimiento y adquisición de artículos de clase IX del mortero embarcado Cardom	496.000	5/10/2023
Guardian Homeland Security S.A.	50 fundas pistolas hk	2.150	18/10/2023
Guardian Homeland Security S.A.	Suministro de 100 chalecos de protección personal ante amenazas de arma blanca y arma de fuego destinados a los agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Ourense	69.000	19/10/2023
Guardian Homeland Security S.A.	Contrato menor suministro de elementos de baterías	2.250	30/10/2023
Guardian Homeland Security S.A.	Adquisición de un mínimo de 920 dispositivos individuales de iluminación UV y 90 dispositivos individuales de iluminación IR con destino a la Policía Nacional	59.530	15/11/2023
PAP Tecnos Innovación SAU	Suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2	237.558.439	22/11/2023
Netline Communications Technologies (NCT) Ltd.	Adquisición de bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia vehiculares de las Fuerzas Armadas	1.447.631	22/11/2023

PAP Tecnos Innovación SAU	Servicio de apoyo al mantenimiento integral de la Torre RCWS Mini Samson de dotación del Ejército de Tierra	82.644	23/11/2023
Elbit Systems C4I&Cyber Solutions	Mantenimiento y adquisición de repuestos de los sistemas de radioenlace	3.719.008	28/11/2023
Elbit Systems Land Ltd. y C4T Ltd.	Mantenimiento y adquisición de artículos de clase Ix del mortero embarcado Cardom	82.644	13/12/2023
Guardian Homeland Security S.A.	Sistema de radiografía portátil para EOD	190.350	13/12/2023
Escribano – EXPAL (consorcio con Elbit Systems)	Suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM)	576.449.112	15/12/2023
Rafael Advanced Defense Systems Ltd.	POD Designador para sistemas de combate aéreo	207.414.102	15/03/2024

Algunos de los contratos de la tabla se refieren al suministro de repuestos; a ellos hay que sumar un nuevo contrato adjudicado a Elbit Systems por valor de 41.322,31 €, en diciembre de 2024, cuyo objeto es el «Mantenimiento y adquisición de artículos clase IX del mortero embarcado Cardom» (número de expediente 2024/ETSAE0906/00003123E). Sin embargo, muchos de estos contratos tienen por objeto la adquisición de material de defensa nuevo. Destaca la compra de los sistemas de misiles anticarro SPIKE y de los sistemas de lanzacohetes de alta movilidad SILAM. Las adquisiciones no se limitan a la compra de piezas de repuesto, como afirmó la ministra de Defensa. Por tanto, no es cierta la afirmación de que el Gobierno español mantiene el compromiso de no comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza.

En conclusión, todavía no ha podido producirse la anulación de la adjudicación de los contratos de adquisición de munición para la Guardia Civil y de adquisición de programadores para la munición utilizada por los carros de combate Leopard. Porque hay que seguir los procedimientos legalmente establecidos y eso implica unos meses de tramitación. Es poco probable que la anulación de esos dos contratos se produzca (unos contratos que apenas suponen el 1% de las adquisiciones de material de defensa a Israel desde el 7 de octubre de 2023 por parte del Estado español). Parece, más bien, que estamos ante una campaña de desinformación promovida por el brazo socialista del Gobierno. Interior y Defensa podrían estar intentando ganar tiempo, pensando que la guerra de Gaza terminará en un plazo más o menos breve de tiempo. Y que, una vez concluida, podrán cumplir con los contratos adjudicados, recibir el armamento y pagar a las empresas israelíes el armamento adquirido. Esto sería coherente con la política que ha seguido el Gobierno en este ámbito, más preocupado por tomar decisiones simbólicas y propagandísticas que por adoptar medidas orientadas a impedir que se siga cometiendo un genocidio en Gaza.

Antonio Izquierdo Escribano

El año de la inmigración

Cuaderno migratorio: 1

Érase una vez un año, este 2024, en el que hemos asistido imperturbables al maltrato de personas vulnerables. Unos cuantos presidentes han jugado a los naipes con cuarenta y cinco mil inmigrantes desembarcados y con seis mil menores que están varados en las islas Canarias. No cabe duda de que esas cifras «minúsculas» han producido un sufrimiento mayúsculo.

Este ha sido el año de la inmigración por su actividad legislativa en clave interna y exterior. Hacia dentro, está el nuevo reglamento de extranjería de la Ley 4/2000; y, hacia fuera, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Además, a principios de octubre, ha tenido lugar un «debate» en el Congreso de los Diputados sobre la Política de Inmigración en el que nuestros representantes han depreciado y despreciado a esas personas.

Pero sobre todo este ha sido el año de la inmigración porque los medios que forman la opinión pública lo han querido y producido poniendo el foco en las llegadas de barcos. Ya se sabe que donde señala el dedo mediático van los pescadores de votos. En realidad, no importa cuán gruesos sean los flujos de indocumentados, sino cómo se perciban y cual pueda ser su impacto electoral. Cuando se apunta hacia la inmigración irregular asoma el empeño político en distinguir a los buenos de los malos inmigrantes. Como si uno quisiera vivir en el oprobio por voluntad propia.

Pues bien, esta nota sigue una orientación distinta. Quiere resaltar la segmentación de derechos entre los inmigrantes y la racialización cultural. Va de la menor dimensión cuantitativa a la mayor realidad social, y de la exclusión más pequeña a la más generalizada. Empecemos por las cifras que no salen en los telediarios, ni corren por las redes. Y no sólo porque esas cifras ponderan el peso de la inmigración irregular, sino porque también alumbran los oscuros de la inmigración legalmente instalada.

La ruta canaria: esperanzados y desesperados

Antes de la pandemia las penalidades que sufrían los menores tutelados en centros públicos eran fruto de la inseguridad jurídica y de una ideología. No se les documentaba cuando, por edad, tenían que abandonar el centro. Esa irregularidad forzosa se sostenía con el argumento de que, si se les legalizaba, otros muchos acudirían y los centros colapsarían. Ideología, es decir, falsa consciencia de la realidad.

Se les documentó durante la pandemia y trabajaron en los campos recogiendo las cosechas. Los números dicen que tras el confinamiento se redujeron las entradas de menores en mayor proporción que la de los flujos de inmigrantes adultos. Y las estadísticas también cuentan que se legalizaron más de los previstos. Además, la tasa de empleo de los 17.000 extutelados pasó del 23% al 59% en dos años. De modo que el efecto de su legalización fue la inclusión en el mercado de trabajo y en la sociedad.

En la actualidad el bloqueo de los 6.000 menores en Canarias se debe a la posición política de

los presidentes autonómicos. El monto total de los menores en las islas es un dato minúsculo comparado con el de menores ucranianos (35.000) que se han escolarizado en este año. El caso es que, antes por desconocimiento de la dinámica migratoria y ahora por crueldad política, los menores magrebís se han convertido en arietes electorales.

En 2006 llegaron por mar casi 40.000 personas y cuatro de cada cinco (81%) utilizaron la ruta canaria. Se bautizó, entonces, como la crisis de los cayucos. No la del sistema de acogida. Luego cayeron las llegadas marítimas y hasta 2016 no superaron las 5.000. También cuando llegaron los solicitantes de asilo sirios y afganos no se dijo que la crisis era de la UE y de su sistema de protección internacional, sino que se habló de la crisis de los refugiados.

El techo marítimo se rompió en 2018 con más 57.000 pasajeros desesperados, pero fue en 2020, y en los años siguientes, cuando estallaron las costuras de un débil sistema de acogida en Canarias. Había 500 plazas en todo el archipiélago y más de 10.000 seres humanos almacenados. La emergencia se trampeó echando mano de las plazas vacantes en hoteles debido al impacto de la Covid 19 en el flujo de turistas.

¿Cuántos han sido los muertos? Caminando Fronteras dice que 9.753 personas han fallecido ahogadas en esta ruta letal, de las cuales 1.538 eran niñas y niños. La OIM da la cifra de 1.400, aunque señala que puede ser un mínimo de personas ahogadas. Nunca lo sabremos con exactitud. Lo que sí sabemos es que el flujo de embarcados y de fallecidos no va a cesar y la política migratoria europea y española no da con la solución.

El caso de los menores que emigran solos y la situación límite de los miles de personas que buscan ayuda humanitaria al llegar a las islas canarias evidencian que el sistema de acogida hace aguas.

Los que entran y salen

Hablemos ahora de flujos, es decir, de cuántos inmigrantes entran y cuantos salen de España. Resulta que los 55.000 inmigrantes llegados por la vía marítima apenas suponen el 6% de las 900.000 entradas legales por todas las puertas fronterizas. Eso indica que no se ha perdido el control. Más aún, 324.000 entraron con autorizaciones de larga duración. Una última aclaración: a los 900.000 ingresados hay que restarles los 309.000 que se fueron en ese año. De donde el saldo migratorio ronda los 590.000.

La composición de esos flujos ayuda bastante a limpiarnos los ojos. Resulta que el 35% de esos más de 300.000 permisos permanentes fueron a parar a ciudadanos europeos con derecho de libre circulación. Es decir, se trata de inmigrantes comunitarios. Otro 22% lo copan las entradas a título familiar. De modo que más de la mitad de los permisos de larga duración no son discrecionales y el Estado no puede impedirlos salvo que rompa con la UE y con los derechos familiares. A estas dos categorías se suma un 11% de trabajadores con contrato pero que vienen solos y un 5% de personas que entran bajo el manto de la protección humanitaria. El resto son inmigrantes que entran por otras vías legales.

Hay inmigrantes que tienen otros planes. Así los 49.000 universitarios, una parte de los cuales, combinando el estudio con trabajo, pueden quedarse una vez finalizada la formación y nutrir el flujo de médicos, investigadores y otros profesionales cualificados. También acudieron a las

faenas agrícolas más de 35.000 trabajadores de temporada, mujeres y hombres que pueden repetir durante varios años hasta optar por la migración circular o por asentarse en España.

El cometido de la política de regulación de flujos es establecer cauces legales que reduzcan la inmigración indocumentada con el fin de evitar su marginación social. No lo ha conseguido, pero tampoco es un absoluto desconcierto. Para tapar los agujeros se habilitan los arraigos como mecanismos de regularización.

Esa es la explicación de que el stock inmigratorio se haya multiplicado por diez entre 1991 y 2024, de 846.000 a 8,8 millones. Uno de cada cinco habitantes del Ruedo Ibérico no ha nacido aquí.

Los que se quedan

De aquellos que se quedan y del camino hacia la igualdad con los nativos tratan las políticas de integración. Según el Censo Anual de la Población a 1 de enero de 2024, el 13,4% de los 48.6 millones de habitantes que ya somos tiene nacionalidad extranjera, mientras que un 18,2% del total ha nacido fuera de España. En otras palabras, hay 6,5 millones de habitantes que son extranjeros y 8,8 millones de personas que son inmigrantes.

He aquí nuestra traducción: en la estructura demográfica de este país, la inmigración pesa lo suyo, en cambio en la democracia la población extranjera apenas llega a peso pluma. La exclusión política es la más flagrante. Son habitantes, pero no ciudadanos.

Entonces ¿los derechos de los extranjeros?

Las sentencias del Tribunal Constitucional los clasifica en cuatro rúbricas: los prohibidos, los condicionados, aquellos que pueden disfrutar, pero no en términos idénticos a los de los españoles y, por fin, los derechos de la persona que les son aplicados en su totalidad. Constitucionalmente sólo se reconoce el derecho al trabajo a los españoles. Y el Tribunal Constitucional sentenció en 1993 que el derecho al desplazamiento no es imprescindible para la dignidad humana y su tratamiento puede ser desigual entre españoles y extranjeros. Resumiendo: *no son iguales a los españoles en derechos, ni aun completamente documentados.*

La diferencia cuantitativa entre inmigrantes (8,8) y extranjeros (6,5) son los 2,6 millones de inmigrantes que han dejado de ser extranjeros porque se han nacionalizado. Para que las cuentas cuadren hay que considerar que medio millón de extranjeros han nacido en España, pero no tienen la nacionalidad española. Son extranjeros, pero no inmigrantes. Aquí la nacionalidad es sanguínea (*ius sanguinis*) y no va unida al territorio (*ius soli*). Es decir, se hereda o se adquiere voluntariamente cuando se cumplen ciertos requisitos que marca el Código Civil.

Añadamos que los extranjeros más numerosos son los cultural y socialmente menos aceptados, a saber: los marroquíes (más de 920.000), pero también los rumanos (620.000). El inmigrante comunitario (rumano) goza de más derechos que el extracomunitario (marroquí). Entre latinoamericanos también se dan diferencias. Los venezolanos (325.000) y argentinos son menos racializados que los colombianos (578.000) o ecuatorianos. De modo que en la vida del inmigrante influye la «racialización» y la discriminación en derechos.

La regla de oro en el análisis de la inmigración es la heterogeneidad de perfiles sociales (clase), la diversidad de modos de vida (cultura) y la segmentación política en cuanto a derechos (ciudadanía). Los inmigrantes comunitarios y sus familiares suman el 56% de los extranjeros registrados y tienen claras ventajas respecto del restante 44% que se encuadra en el señalado como régimen de extranjería.

Isabel Alonso Dávila

Unas conclusiones para pensar y repensar la educación con memoria

El II Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación

Entre el 14 y el 16 de noviembre del año que acabamos de dejar atrás, más de cuatrocientos docentes y estudiantes de diez países y quince comunidades autónomas del estado español, de todas las etapas educativas, nos reunimos en Pamplona/Iruña para participar en el II Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación. El documento de conclusiones, elaborado de forma participativa y aprobado en este congreso, contempla innumerables aspectos de interés.

En primer lugar, una constatación: «[...] contrariamente a lo que manifiesta una opinión bastante extendida, una parte relevante del mundo educativo sí se ocupa, y se preocupa, de introducir a las generaciones más jóvenes en el pensamiento crítico, la problematización del presente, aprender a pensar históricamente, la incorporación de sujetos históricos y temáticas postergadas e invisibilizadas, con la renovación metodológica y conceptual que necesariamente conllevan. Y esto se hace a partir del concepto clave de Historia con Memoria». Pero esta constatación positiva —nos recuerda el documento de conclusiones— no lleva a obviar los grandes motivos de preocupación que nos entrega, sin tregua, la realidad más actual: el genocidio en Gaza, el trato inhumano a los y las emigrantes, la amenaza de la ultraderecha y la enorme capacidad de difusión de «noticias falsas y discursos de odio, racistas, xenófobos y antifeministas, además de expandir el negacionismo y el revisionismo sobre los genocidios fascistas del pasado».

En las conclusiones se señala, como una de las claves para poder contrarrestar estos nubarrones y tormentas amenazantes, la necesidad de «recuperar el acervo cultural de la memoria y, sobre todo, la idea de una memoria de la construcción, una memoria de los sueños: qué hemos aprendido de los pasados traumáticos [...] aprovechar la función profiláctica de la memoria para recuperar una identidad colectiva en torno a los grandes proyectos que unieron las ilusiones previas a aquellos procesos traumáticos: la verdadera democracia, el antifascismo, los valores del Estado del Bienestar, la reforma agraria, hoy entendida como respuesta al cambio climático, la soberanía alimentaria y la distribución sobre el territorio». Como creo que se puede apreciar claramente en estas citas, el documento de conclusiones de este II Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación es un texto que merece una lectura completa. Lo podéis consultar en esta misma revista en el apartado «Documentos».

Por mi parte, me voy a detener en un tema que preocupa profundamente a una gran parte del profesorado en activo. Se trata de la privatización, acelerada, aceleradísima, que se está produciendo en la formación inicial del profesorado. Es decir, en el máster que habilita para ejercer la función docente en la enseñanza secundaria y que se ha de cursar de forma obligatoria para desempeñar este trabajo. Dice el documento de conclusiones del Congreso celebrado en Pamplona que «la formación del profesorado en memoria democrática es imprescindible, y debe ser garantizada en los centros públicos. En este sentido es preocupante la falta de oferta pública en el máster profesionalizante del profesorado de secundaria, que ha contribuido a la

proliferación de nuevas universidades privadas y ha convertido en negocio lo que debe ser un servicio público. Esta situación no se da en la mayoría de los países europeos, donde la formación universitaria pública es ciertamente predominante. La formación del profesorado en una historia con memoria es fundamental para hacer realidad una formación de la ciudadanía democrática y crítica. Se debe desarrollar una conciencia histórica en el futuro profesorado de cualquier etapa educativa. Y se debe formar en competencias profesionales al profesorado para capacitarlo en la enseñanza de la memoria histórica según cada etapa educativa».

Respecto a este tema, fundamental, deberíamos hablar, en la situación actual, en primer lugar, de un derecho del que se está privando a las personas recién licenciadas que quieren desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la enseñanza secundaria. La educación pública debería garantizar su derecho a cursar el máster de formación del profesorado en centros públicos universitarios. Como este derecho no se garantiza, la única opción, para los y las que pueden costearla, es realizar esta formación en universidades privadas, algunas de ellas verdaderos chiringuitos para hacer negocio, como analiza Enrique Javier Díez Gutiérrez en otro artículo de este número de la revista, que lleva por título «Universidad, S. A.».

En segundo lugar, nos debemos preguntar si estos «negocios-chiringuito» de verdad ofrecerán la imprescindible, y obligatoria legalmente, formación del profesorado en memoria. La obligación legal de esta específica formación del profesorado en memoria está recogida, desde el 2022, en la Ley de Memoria Democrática^[1], que incluye en su articulado el tema educativo, de manera muy específica, en su «Capítulo IV. Del deber de memoria democrática», que se abre con el artículo 34. Dice este:

Artículo 34. Deber de memoria. Con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse.^[2]

Y es fundamentalmente el artículo 44 el que más nos interesa para el tema que estamos tratando y nos preocupa. Dice así:

Artículo 44. Medidas en materia educativa y de formación del profesorado.

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura.

A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.

2. Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.^[3]

Conocido lo que dice la ley, la pregunta que nos podemos hacer, como ya he planteado en algunas ocasiones, es: ¿estarán garantizando las universidades privadas una formación del

profesorado que incluya el tratamiento escolar de la memoria democrática? Y, aterrizando más el tema, dado que muchas de estas universidades privadas llevan en sus nombres el adjetivo «católica», es decir «universidad católica de...», o nombres de santos (San Pablo, San Antonio, San Jorge), o el adjetivo «pontificia», etc.; y que muchas otras que no lo explicitan en sus nombres sabemos que están estrechamente relacionadas con instituciones religiosas como el Opus Dei o los jesuitas: ¿cómo tratarán, si es que lo hacen, o como tratarían, si se vieran en algún momento obligadas a hacerlo, en las universidades privadas, especialmente las relacionadas con órdenes religiosas, los temas en que la Iglesia estuvo más directamente relacionada con asuntos fundamentales de la memoria histórica democrática? Por poner algunos ejemplos concretos, ¿cómo tratarían el apoyo económico de la jerarquía eclesiástica al golpe de estado del 18 de julio de 1936?, ¿o el apoyo de los obispos a los sublevados en la «Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero»^[4] de 1 de julio de 1937? ¿Cómo tratarán el nacionalcatolicismo, una de las señas de identidad ideológica de la dictadura del general Franco?; ¿y la estrecha relación entre la Iglesia y el poder político franquista durante toda la dictadura y su colaboración en la represión política y sexual?

Si a estas dudas sumamos la posición que ha mantenido la Iglesia católica española respecto a la Ley de Memoria histórica de 2007 y a la Ley de Memoria Democrática de 2022, que en las mejores situaciones podríamos definir como equidistante, significa que las administraciones educativas tendrían que estar muy atentas a que lo que dice el artículo 44.1 de la Ley de Memoria Democrática se cumpla en las universidades privadas y, muy especialmente, en las relacionadas con la Iglesia católica. ¿Cumplirán este tipo de centros con la obligación legal de actualizar los contenidos curriculares en los temas relacionados con la memoria democrática, según obliga una ley que ha sido votada por nuestros representantes? ¿O estarán convirtiendo esta ley, en sus universidades, en papel mojado? A estas preguntas sólo podrán dar respuesta unos informes bien realizados por los gobiernos autonómicos, de los que depende el control de estas universidades privadas. Sin embargo, por lo que nos explica Enrique Javier Díez Gutiérrez en su artículo, no parece que podamos ser muy optimistas respecto a la realización de estos controles.

En todo caso, que dios nos pille informadas o, al menos, con algo de información al respecto. Y aquí van algunos datos. Según la página web del ministerio de Educación y Formación Profesional^[5], el máster de formación del profesorado lo ofrecen cuarenta y seis universidades públicas y veintidós privadas. Ya resulta sorprendente que desde una página oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes se le haga publicidad gratuita a los másteres de formación del profesorado que ofrecen las universidades privadas, cosa que no sucedía la vez anterior en que realicé la búsqueda, en 2023. Pero sí sucede hoy, en el momento de redactar este artículo. Sea como fuere, como el número de plazas que ofrecen las universidades públicas es insuficiente, numerosos alumnos terminan por cursar este máster en universidades privadas. Al parecer, uno de los argumentos que se ofrecía para no aumentar la oferta de plazas en las universidades públicas era el paro en el sector de la enseñanza, que supondría que se formara a personas que no encontrarían trabajo en el sector. Si este era un argumento real, sorprende que las administraciones educativas no lo hayan tenido en cuenta la hora de autorizar a cada vez más universidades privadas el ofrecer esta formación.

Centrémonos por ahora en saber cuáles son estas universidades privadas que ofrecen el máster de formación del profesorado. Lo ofrecen las siguientes universidades privadas: Universidad

Internacional de La Rioja (UNIR), Universidad Internacional de Valencia (VIU), Universidad Nebrija, Universidad Europea de Madrid, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Universidad de Navarra, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad CEU San Pablo, Universidad de Deusto, Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad Camilo José Cela, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Internacional de Cataluña, Mondragón Unibersitatea, Universidad de Vic, Universidad Católica San Antonio, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad Católica Teresa de Jesús, Universidad Europea del Atlántico, Universidad Internacional Isabel I de Castilla. En total, veintidós universidades privadas que ofrecen el máster de formación del profesorado aparecen en la página web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, debajo de las universidades públicas que también lo ofrecen.

Otras ocho universidades privadas, que no aparecen en la página web del Ministerio, ofrecen, según sus webs, el máster de formación del profesorado: Universidad Ramon Llull, Universidad Católica de Valencia, Universidad Europea de Canarias, Universidad San Jorge, Universidad Europea de Valencia, Universidad Católica de Ávila, Universidad Católica San Antonio de Murcia y Universidad Loyola de Sevilla.

Me he permitido escribir todas las que he encontrado no para hacerles publicidad, sino porque no deja de sorprender a una estudiante universitaria de principios de los años setenta —en el tardofranquismo, cuando la presencia de universidades privadas era poco perceptible para la inmensa mayoría del estudiantado universitario— el número de universidades privadas que hay en la actualidad en España y que, además, ofrecen el máster de formación del profesorado. Denunciando el volumen de la presencia privada en los centros educativos preuniversitarios, escuelas e institutos, quizás no hemos prestado la suficiente atención al nacimiento y crecimiento de este tipo de centros en la enseñanza universitaria.

Una investigación, desde alguna universidad pública, sobre el cumplimiento o no de la ley de memoria democrática en la formación que se ofrece en estos masters tendría un gran interés.

1. <https://www.boe.es/eli/es/l/2022/10/19/20/con. ?>
2. *Ibidem*, p. 31. [?](#)
3. *Ibidem*. [?](#)
4. [Carta colectiva de los obispos españoles con motivo de la guerra en España – Wikipedia, la enciclopedia libre. ?](#)
5. Consultada el 29/12/2024: <https://www.todofp.es/comunidad-docente/acceso-funcion-publica-docente/master-formacion-profesorado.html. ?>

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Universidad, S. A.

Los gobiernos autonómicos, sobre todo los de la derecha (pero no solo), están desplegando políticas educativas favorables a la creación y expansión de universidades privadas, autorizando «negocios-chiringuito», especialmente los online, a la vez que recortan la inversión en las universidades públicas de su región. La inversión en instituciones de educación superior españolas es un 20,7% inferior al promedio de la OCDE.

Es el esquema básico, de manual de primero de privatización, que están impulsando quienes han sido elegidos para gestionar lo público, que están claramente apoyando el negocio privado. Bien porque tengan intereses en estas nuevas «universidades, S. A.», bien porque ponen en práctica su ideología: destruir lo público e impulsar lo privado (a costa, además, del erario público). Es el mundo al revés. Y hay que reconocer que tienen una clara y persistente «voluntad política» para llevar a cabo sus planes privatizadores, velando por los intereses del «mercado» y no por el bien común de la ciudadanía..., que es quien los eligió.

Si desde 1998 no se ha vuelto a crear ningún campus público, el número de universidades privadas (en muchos casos «chiringuitos»), sin embargo, ha crecido exponencialmente, hasta llegar a 41. Históricamente, estaban las cuatro universidades privadas tradicionales (la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra). El resto eran públicas. Pero en el último cuarto de siglo se han creado 25 privadas, a razón de una por año.

Pero es que en 2025 Madrid planea la apertura de otro «negocio virtual» que será su decimocuarto centro de «educación superior» privado; Andalucía, la cuarta universidad privada; Extremadura tiene en proyecto otras cuatro; Baleares otra, igual que Asturias. De aquí a 2026 habrá 54 «Universidades, S. A.». Que se reparten entre la jerarquía católica, las empresas de negocios y los fondos de capital riesgo o fondos buitres. Sobre todo estos últimos, porque se calcula que una de cada cinco universidades privadas tendrá participación de estos fondos en 2026.

Saben que las necesidades de formación en educación superior aumentarán mucho, dado que la parte de la población joven que acceda a la misma será cada vez mayor en una sociedad donde el conocimiento y la ciencia son claves para su desarrollo. Pero la educación superior está pasando de derecho esencial, que la comunidad social debe garantizar a través de las Universidades Públicas financiadas por el Estado, a un nicho de negocio con una rentabilidad estimada por los fondos de capital riesgo superior al 10% (algo que pocos sectores ofrecen), especialmente en los másteres y, aún más, en los online. La facturación de las universidades-negocio privadas en España, de hecho, ha crecido un 44,7% en cinco años.

El Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades aprobó el Real Decreto 640/2021 para evitar las «universidades chiringuito» y endurecer los requisitos para autorizar los campus privados con ánimo de lucro. En él fijó los criterios mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, de profesorado, equipamientos y organización. Es responsabilidad de las CCAA supervisar que las universidades cumplan ese decreto antes de 2026. Pero la mayoría de las CCAA hacen caso omiso del mismo y siguen impulsando «universidades chiringuito» privadas

que no cumplen los requisitos previstos y que cuentan con informes desfavorables por parte de las agencias de calidad o de la Conferencia General de Política Universitaria, y que acaban siendo academias de expedición de títulos por pago.

El objetivo es evidente: acabar con la universidad pública tal y como la conocemos en un ataque con un frente más amplio que se completa con la guerra a la educación no universitaria, a la sanidad pública y a los servicios sociales. Es decir, al Estado Social. El enemigo de esta guerra abierta y sin prisioneros tiene un nombre: lo público ([Clara Ramas, 2024](#)). Es un programa político que está llevándose a cabo de forma sistemática y sin resistencias claras.

Por eso debemos reaccionar de forma urgente y crear un frente común que ponga un dique de contención a esta degeneración de las finalidades de la universidad, mediante el siguiente decálogo de líneas estratégicas esenciales que apuesten claramente y sin ambages por una Universidad Pública y Gratuita. Una Universidad de titularidad y gestión pública, no de «servicio público» que pueda ser prestado de forma pública o privada, concertando la educación superior con instituciones privadas o a través de «cheques universitarios» a la demanda, como se pretende introducir en Cataluña y otras regiones, al estilo de los conciertos educativos en la enseñanza no universitaria y de los cheques escolares en la educación infantil.

Este **decálogo para un Pacto Social por la Educación Superior** debería tener diez ejes como estrategias básicas y esenciales:

1. Una financiación de las Universidades Públicas blindada constitucionalmente, al margen de quien gobierne, que destine el 2% del PIB a la Universidad Pública en 2026 (el 1% PIB previsto en la nueva ley de universidades, la LOSU, para 2030, ha de aproximarse a los porcentajes europeos [2% PIB] y adelantarse en el tiempo a 2026).
2. Es necesaria la planificación de un sistema financiero plurianual, en el que todas las Universidades Públicas cuenten con una financiación en 2025 de al menos 6.678,15 € por alumno/a en todas las Comunidades Autónomas (que es la media nacional, donde comunidades como Navarra llegan a 8.749,62€ por alumno).
3. Establecer una moratoria de diez años en la creación de nuevas universidades privadas. Así como reformar el Real Decreto 640/2021 para que los informes de los organismos de evaluación de las universidades y del Ministerio que habilitan la aprobación de una universidad privada sean preceptivos y vinculantes. Lo cual implicará que ninguna Comunidad Autónoma podrá autorizar una nueva universidad privada que no cuente con la valoración positiva de estos organismos.
4. Creación de una unidad fiscalizadora en la Conferencia General de Política Universitaria para la inspección de las universidades privadas. E Inspección periódica, cada tres años, por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de todas las universidades privadas creadas hasta ahora a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos para realizar su labor y establecer las medidas sancionadoras o de supresión de aquellas que no cumplan todos los requisitos exigidos legalmente.
5. Supresión de toda financiación de las universidades privadas con fondos públicos.
6. Planificación por la Administración de la oferta de plazas universitarias públicas, acorde con las

necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario equilibrado, proporcional y universal que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. No eliminando titulaciones necesarias. Y creando nuevos campus universitarios, si es necesario, que den respuesta a las necesidades de formación e investigación en todo el Estado y que garanticen la reducción de ratios de alumnado en las aulas (para una atención más personalizada e inclusiva), tal como se estableció con la reforma del Plan Bolonia que nunca se ha querido aplicar.

7. Universidad laica: Todas las Universidades deben respetar la libertad de conciencia de toda la comunidad universitaria. Derogar los acuerdos concordatarios con la jerarquía católica de 1979 y los acuerdos con otras religiones de 1992. Sacar cualquier religión confesional de la Universidad, eliminando asimismo la simbología y actividades religiosas o rituales. Lo cual facilita una convivencia plural y diversa en las Universidades, respetuosa con todas las creencias personales, sean religiosas, agnósticas o ateas. La Universidad es un espacio para la razón, la argumentación y la ciencia, no para la creencia.

8. Sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a las notas sino a la situación socioeconómica, que posibilite la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario, sin depender de su familia, y especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil y, por lo tanto, debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios. Esta retribución sería la concreción para los estudiantes del salario social vinculado a un trabajo garantizado que se tendría que establecer a todos los efectos como derecho general de toda la población

9. Autogobierno democrático universitario: Una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos gerencialistas centrados en costes y rendimientos. Potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de decisiones colegiada, la electividad de sus cargos y una gestión interna responsable basada en el trabajo en equipo, la corresponsabilización de la comunidad universitaria, la cooperación y la transparencia. Equilibrando la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control por parte de la sociedad civil comprometida socialmente y sin intereses privados de beneficios, cuya finalidad sea la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de estas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos.

10. Evaluación de todo el sistema universitario para la mejora: Evaluación que englobe a todo el sistema universitario (Ministerio, Administraciones, Universidades, etc.), a todos los componentes universitarios (docencia, investigación, gestión, Administración y transferencia) y que facilite información para mejorar en todas estas dimensiones, y no para la clasificación de las universidades en rankings. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora mediante la autoevaluación y la coevaluación, que valore la renovación y formación pedagógica del profesorado. Evaluación de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u Open Science para el bien común y la paz, que fomente el carácter social y colaborativo de la investigación, eliminando el factor de impacto como

elemento de evaluación y priorizando las publicaciones de acceso abierto gratuito (tanto en acceso como en publicación y no considerar ciencia abierta las revistas que cobran APCs o tienen Acuerdos Transformativos), en consonancia con el mandato europeo «Horizonte 2020» y la Declaración DORA, y permitiendo que la transferencia de conocimiento tecnológico y social sea de dominio público. Evaluación de la dimensión de compromiso social de la Universidad como agente dinamizador para la transformación social y vinculación del proceso de formación universitaria con el componente del compromiso social respecto al entorno social.

En definitiva, se trata de recuperar el sentido del bien común y el compromiso social de la Universidad, para conectarla con los grandes desafíos ecosociales, formar a las futuras generaciones para enfrentarlos y construir una sociedad más justa y mejor. La Educación Superior no puede ser un negocio, ni estar a la venta del mejor postor.

[E. Javier Díez Gutiérrez es director de la Investigación Europea «Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia». Premio CODAPA 2023 de la Confederación Andaluza de AMPA por su defensa de la educación pública y la difusión de alternativas para construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: [*Pedagogía del Decrecimiento*](#) (Octaedro, 2024). [*La memoria histórica democrática de las mujeres*](#) (Plaza y Valdés, 2023). [*Pedagogía Antifascista*](#) (Octaedro, 2022). [*La historia silenciada*](#) (Plaza y Valdés, 2022). [*Educación crítica e inclusiva para una sociedad poscapitalista*](#) (Octaedro, 2021). [*La asignatura pendiente*](#) (Plaza y Valdés, 2020), [*La educación en venta*](#) (Octaedro, 2020), [*Educación para el bien común*](#) (Octaedro, 2020), [*La revuelta educativa neocon*](#) (Trea, 2019) o [*Neoliberalismo educativo*](#) (Octaedro, 2018).]

Albert Recio Andreu

Notas sobre la desmovilización democrática

Estamos atónitos y desconcertados ante los éxitos de tipos como Trump, Milei, Isabel Ayuso o Alvisé Pérez. Ante el avance de la extrema derecha y el libertarismo capitalista. Que este tipo de personajes triunfen y se impongan ideas tan locas parecería una pesadilla de la que deberíamos despertar con facilidad. Pero la evolución electoral de los últimos años en muchos países indica que se trata de algo bastante más sólido. De una dinámica acelerada en los últimos tiempos pero que ya estaba en marcha hace años. No basta con tomarlo como una mera coyuntura desfavorable, inevitable. Es necesario entender a fondo la naturaleza de este proceso, detectar los elementos que lo activan y devanarse en buscar respuestas que lo neutralicen y lo reviertan. Porque, aunque «no hay mal que cien años dure», el impacto que puede tener un período de políticas dominadas por esta extrema derecha autoritaria, privatizadora, depredadora, antifeminista, antiecológica puede ser tan brutal que su efecto persista durante un largo período.

No estamos sólo ante una oleada derechista. Esta coincide en el tiempo con una desmovilización democrática, entendida como lucha por la defensa de los derechos humanos, la igualdad, los derechos sociales. Algo que es constatable por los problemas de activismo que padecen numerosas organizaciones y movimientos sociales, por la persistencia y la capacidad de acción sin respuesta de la extrema derecha, por la débil penetración del discurso de la izquierda alternativa.

Estas notas deslavazadas tratan de situar algunas cuestiones, pero son solo premoniciones, sugerencias.

Desafección

Uno de los argumentos más utilizados en los últimos meses es el de la desafección. La gente estaría harta de un debate político polarizado —simplificado a una especie de competición deportiva bastante brusca—, de que los problemas cotidianos no tengan soluciones rápidas, del convencimiento de que los políticos forman una casta ajena a la sociedad, de la desilusión por el mal funcionamiento de las instituciones. Y en consecuencia desconectaría de la participación democrática o, lo que es peor, volvería a esperar la llegada de un dictador benevolente, eficiente, que les resolviera los problemas y redujera el coste del funcionamiento democrático.

Hay algo de cierto en este cansancio, pero conviene analizarlo con más detalle. En primer lugar, la política no forma parte de las preocupaciones cotidianas de la mayoría de la gente. La vida de las personas transcurre en un entramado de relaciones y prácticas centradas en la familia, la vida laboral mercantil y la red de actividades de ocio y relaciones personales. La actividad política convencional suele estar lejos de la vida cotidiana, resulta incomprensible para mucha gente y es vista como una actividad propia de unas determinadas élites sociales o, en el peor de los casos, un espacio donde predominan los trepas. A este alejamiento o desconocimiento de lo político contribuyen muchos factores. Hay un claro sesgo de clase: la acción política requiere de unos conocimientos y unas prácticas alejadas de la vida de mucha gente. Hay un componente de temor justificado: la polarización que a veces genera la política puede acabar teniendo consecuencias dramáticas para la gente. El miedo a una convulsión más o menos violenta, o

simplemente a las consecuencias para la vida privada que pueden tener una determinada toma de posición política, inhibe a mucha gente de politizarse. Y hay por fin una incomprensión tanto de la complejidad de muchos temas como de las líneas de intereses que operan por detrás de las opciones políticas, lo que reduce aún más la configuración de un espacio político donde unos pocos compiten entre sí por el poder. A los políticos se les ve casi todos los días enfrascados en debates y peleas; en cambio, muchos de los agentes empresariales que mueven tramas son invisibles para la mayoría. Y el calor del debate a menudo hace incomprendible el contenido de lo que se está debatiendo.

Sin duda la polarización política de los últimos años (basta escuchar cada semana el tipo de preguntas al Gobierno en las sesiones de control y cómo se formulan), fundamentalmente adoptada por la derecha como una estrategia de acoso y derribo a un gobierno sustentado por una coalición de equilibrio inestable, ha contribuido a generar esta percepción. Sin embargo, no es sólo una cuestión de políticos profesionales, sino que interviene especialmente la manera en que se configura el debate en los medios de comunicación que modulan el espacio de la política. Las páginas de política de la prensa escrita son un mero recuento de batallas e intrigas, mientras que las cuestiones importantes de debate deben buscarse en otras secciones. Y ocurre lo mismo en radio y televisión, donde muchos de los debates políticos se han convertido en algo parecido a los deportivos o a los de chismes sobre famosos. La irrupción de la comunicación digital ha añadido un elemento más, al favorecer una comunicación poco reflexiva y ayudar más a construir la tribu o el club de fans que a promover el debate sobre las cuestiones cruciales.

Por ejemplo, tras el desastre de la dana en el País Valencià la mayor parte de debates se han centrado en el tema de las responsabilidades de los políticos, especialmente de Mazón y su gobierno. Es sin duda un tema relevante, pues con otra actuación se hubieran salvado muchas vidas. Pero es un tema que acota excesivamente la cuestión a unos comportamientos individuales y tiene todas las posibilidades de encallar en la enésima versión de un enfrentamiento entre dos bandos. Se pasa por alto que, más allá de la impresentable actuación de la Generalitat, gran parte del desastre material hubiera sido inevitable dada la magnitud del fenómeno, así como las condiciones urbanísticas del espacio. Y quedan completamente fuera de foco debates cruciales como el del modelo de atención a los damnificados (gran parte de la situación que se vive en muchos pueblos está en la penumbra), el tipo de reconstrucción que hay que hacer y las enseñanzas que podemos sacar de un gran impacto de la crisis climática.

La política es rara para gran parte de la población. Y las propias fuerzas políticas enfrascadas en las batallas del día a día y el complejo informativo contribuyen a reforzar este extrañamiento.

Individualismo

La despolitización tiene también que ver con la forma en que las personas se relacionan con su entorno social. La acción política y social requiere una cierta conciencia de la necesidad de lo colectivo, de condicionar la propia individualidad al grupo. En gran parte de las sociedades precapitalistas el espacio de la acción individual era muy estrecho. La vida de la gente estaba determinada por lazos diversos, por participación en actividades que dejan poco espacio a la libre disposición. Las sociedades capitalistas han ampliado brutalmente la esfera de lo individual y están evolucionando hasta niveles de individualismo que ponen en peligro funcionamientos sociales básicos. Pero demasiado a menudo la izquierda cae en una valoración moralista de esta

tendencia al individualismo que acaba resultando molesta a mucha gente y que resulta inocua en sus efectos. Creo que hay que partir por analizar las bases materiales de estos comportamientos, porque intuyo que es la única forma de encontrar alguna respuesta útil.

La izquierda basó su organización social tanto en la reconversión de viejas experiencias (E. P. Thompson, por ejemplo, muestra la existencia de trasvases entre sectas cristianas y organizaciones obreras) como en la creación de redes en torno a experiencias colectivas que formaban parte de la vida cotidiana de la gente: mutualidades de sostenimiento, cooperativas de consumo, actividades recreativas (E. Hobsbawm considera, por ejemplo, que los pubs y el fútbol eran las actividades que sostenían la identidad obrera). De hecho, hasta la eclosión del consumismo casi todas las actividades recreativas de la población obrera eran fundamentalmente colectivas o entrañaban un elevado nivel de interacción social (en Barcelona, una actividad habitual de los barrios obreros en verano era la de bajar unas sillas a la calle y pasar un rato charlando con los vecinos, algo parecido a lo que aún puede verse en el mundo rural). El propio espacio fabril donde muchas personas trabajaban juntas constituía un ámbito de socialización e influencia mutua. Y no se puede perder de vista otra cuestión relevante: la clara fractura entre el mundo del trabajo manual y el de las clases medias cultas. En una sociedad sin educación universal, sin posibilidad de movilidad por vía educativa, las identidades de clase eran más fuertes. Los niños y las niñas sabían cuáles eran sus posibilidades reales de promoción social y esto tenía el efecto de promover una conciencia de pertenencia.

Todo esto se fue rompiendo en la década de los sesenta tanto por el aumento del consumo (y las intrusivas campañas publicitarias), como por la introducción de bienes y tecnologías que favorecían la individualización, y también por la expansión del sistema educativo que abrió (al menos como promesa) un abanico de posibilidades de carrera individual mucho más diversificada que antes. El automóvil, la televisión, el vídeo, los electrodomésticos contribuyeron a este proceso de individualización del ocio (las redes actuales no han hecho más que reforzar este proceso). Tuvieron impacto no sólo en las formas de consumir; la motorización, especialmente, afectó al uso del espacio. La crisis del modelo fabril a partir de la crisis de los setenta (cuando las empresas fueron conscientes de la peligrosidad, para sus intereses, de las grandes concentraciones obreras y empezaron a desarrollar modelos de organización de flujo) y el crecimiento de los empleos de servicios, con una importante dispersión de espacios y tiempos, han erosionado otra importante fuente de socialización colectiva. Y, tanto o más importante, la escolarización universal constituye un poderoso medio de generación de aspiraciones individualizadas, de pérdida de visión colectiva, de sueños más o menos realizables. Si a todo ello sumamos la intensa propaganda consumista, la difusión una cultura del cliente que siempre va a ser satisfecho (aunque la realidad lo niegue repetidamente, como pone de manifiesto el caso extremo de los seguros sanitarios), podemos comprender que el individualismo no es el producto de un cambio asocial de comportamientos sino el resultado de una combinación de procesos, intencionales o no buscados. Y más que concentrarnos en una crítica moral, o simplemente lamentarnos de que las cosas son así, lo que hace falta es buscar las propuestas que ayuden a desarrollar un sentido de lo colectivo que genere acción.

Activación

Dado que la política no forma parte de la vida cotidiana de la gente, especialmente de la población trabajadora, los procesos de politización intensa, de participación masiva, son

esporádicos, no sostenidos en el tiempo. En «el mientras tanto» lo que hay son grupos de activistas políticos y sociales que actúan de animadores sociales, que mantienen viva una cultura y unas prácticas de resistencia, de creación social. Para que haya una activación que trascienda a los pequeños grupos hacen falta circunstancias favorables que generen una respuesta emocional y que hagan pensar a mucha gente que su acción tendrá repercusiones.

Como breve recordatorio podemos enumerar una serie de procesos de activación de masas en nuestra historia reciente: la transición política, el referéndum de la OTAN, la movilización en torno a la Huelga General del 14 de diciembre del 1988, la de la guerra del Golfo, el 15M, la movilización electoral en las municipales de 2015 (y en Catalunya la del referéndum de 2017). Previamente a todos estos procesos había habido un trabajo militante, más bien oscuro y limitado cuantitativamente. Y en algún momento la gente pensó que podía ganar, que era el momento, y la movilización superó las previsiones de los propios promotores. Sin embargo, cuando el proceso toca techo y resulta evidente que no se podrán alcanzar las metas pensadas se produce un proceso rápido de desmovilización. Gran parte de la activación descansa en la creencia en la victoria. Es algo que puede observarse en otros campos, por ejemplo en el deporte: en muchas poblaciones un equipo local de trayectoria errática genera una enorme movilización cuando tiene una buena racha y posibilidades de un triunfo importante (lo clásico, un ascenso de categoría). Cuando posteriormente las cosas van peor el proceso es el inverso. Hay por tanto que pensar que los ciclos movilizados son difíciles de mantener en el tiempo y requieren de circunstancias favorables.

Que ahora la derecha esté mucho más activada que la izquierda puede ser indicativo de que sus bases potenciales entienden que tienen un contexto favorable. Y su activación por otra parte contribuye a generar pesimismo y a desmovilizar a la izquierda. Una izquierda que en los últimos años ha comprobado las dificultades de romper las enormes barreras institucionales que protegen a uno y mil privilegios, que no tiene claro cómo afrontar una transición ecosocial y que, además, anda embarrancada en las viejas peleas de familia. Para activar se requiere un trabajo persistente, ofrecer algún objetivo alcanzable y ayudar a propiciar una buena coyuntura.

Comentario final

Estas notas, deslavazadas, son por sí mismas un reflejo de las dificultades y la perplejidad que nos genera la situación actual. Donde la amenaza de una crisis ecológica global no genera ninguna capacidad de reacción efectiva. Donde la pretensión de fortalecer las viejas demandas de igualdad, libertad y fraternidad universales se ven derrotadas por el poder de genocidas, belicistas, colonialistas, racistas y pisoteadores de los derechos humanos.

Pero no nos queda otra que resistir. Aunque para que la resistencia sea eficiente es necesario detectar de dónde nacen los problemas. Qué está mal pensado en nuestra acción cotidiana. Y el punto de partida que sugiero es el de analizar los comportamientos sociales y la forma en que son modelados por procesos tecnológicos e institucionales complejos.

Sergio Tamayo Leiva

Pensamiento crítico, seducción y sentido

El pasado 17 de noviembre de 2024, el diario [El País](#) publicó una entrevista con el expresidente uruguayo José Mujica. En dicha entrevista, Mujica, preguntado acerca del sentido de la vida, afirmaba: «Le di un sentido a mi vida. Me voy a morir feliz, no por morirme, sino por dejar una barra[1] que me supera con ventaja. Nada más. No tuve una vida al pedo, porque no gasté mi vida solo consumiendo. Gasté soñando, peleando, luchando».

Al ser preguntado sobre qué les diría a los jóvenes, Mujica respondió: «Que la vida es hermosa, pero que hay que buscar una causa para vivir. No necesariamente la mía, pero hay que tener una causa». Cuando el entrevistador le hizo saber que, en el actual contexto de desapego, él era una de las personas más escuchadas, dijo: «Escuchado, pero no seguido».

Estas afirmaciones de Mujica pueden servir de punto de partida para realizar una reflexión acerca de las interrelaciones que se dan entre el pensamiento crítico, la seducción y el sentido, así como del propio significado de dichos conceptos; concretamente, el presente escrito pretende ofrecer unas notas acerca de la significación y las relaciones de estos tres conceptos en lo que entendemos que es uno de los ecosistemas naturales de los mismos: la universidad.

El pensamiento crítico, concebido como una actividad de análisis y evaluación de las razones que determinan una realidad dada, halla, prácticamente desde los inicios de la institución, una tierra fértil en el seno de la universidad. Al respecto de la capacidad crítica del estudiante, Manuel Sacristán afirmó que la misma supone el robustecimiento de su capacidad de entenderse en el mundo, de aclararse sus propios condicionamientos, su hacer y los objetivos que dan sentido a su conducta y, consiguientemente, a sus conocimientos positivos, científicos, artísticos o técnicos [2]. Resulta difícil, por lo tanto, no detectar los estrechos vínculos entre el pensamiento crítico y la universidad, a menos que se tenga una visión de esta como una institución meramente compilatoria y certificadora del saber[3].

No obstante lo anterior, la germinación del pensamiento crítico no puede entenderse sin una estrategia de seducción, sin el *eros* del conocimiento. La palabra *seducir* tiene su origen en el término latino *seducere*, formado por el prefijo separativo *se-* y por el verbo *ducere*, que significa *guiar*; la Real Academia Española (RAE) define *seducir*, en su acepción positiva, como *embargar o cautivar el ánimo de alguien*. De ello ya fueron conscientes las escuelas filosóficas griegas[4], tal y como, por ejemplo, queda constancia en los diálogos de *El banquete* o *Fedro* de Platón. Mas, en el contexto actual, las corporaciones tecnológicas hegemónicas también son conscientes de la necesidad de esquemas de seducción. Estas corporaciones, sobre la base del análisis masivo de datos, invierten billones de dólares en investigar e implementar mecanismos de captación de la atención, la cual constituye el requisito previo de la seducción. Aunque, ciertamente, esta forma de seducción, que tiene como fin último la configuración de marcos mentales afines a la sociedad de consumo, enlaza más con la acepción negativa que la RAE atribuye al término: *persuadir a alguien con argucias o halagos para algo, frecuentemente malo*.

Ante esta situación, cabe plantearse: ¿puede la universidad competirle la seducción a las *big tech*?, ¿puede *contraseducir*? ¿debe hacerlo?, ¿cuáles son las *estrategias de seducción* que debe

seguir la universidad? Podemos esbozar una respuesta acudiendo a las reflexiones de un gran seductor postmoderno: el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han.

En su obra *La agonía del eros*, Han realiza interesantes disquisiciones a propósito del análisis de un artículo del periodista Chris Anderson, jefe de redacción de la revista estadounidense *Wired*, titulado «El final de la teoría». En este artículo, Anderson sugiere que el análisis de datos es superior a toda teoría y a sus vanas pretensiones ontológicas o taxonómicas, puesto que los datos hablan por ellos mismos^[5]. Frente a esta posición, Han sostiene que una teoría es más que un modelo o una hipótesis que pueda verificarse o declararse falsa en virtud de experimentos, pues constituye una decisión esencial acerca de qué es pertinente y qué no lo es y qué tiene que ser y qué no. Ante la proliferante masa de información y de datos, las teorías, sostiene Han, son hoy más necesarias que nunca, puesto que de las informaciones podemos darnos por enterados, pero *darse por enterado* no es ningún conocimiento; por ello, concluye, hay que reivindicar la primigenia unión entre el *logos* y el *eros*, que ya estuvo presente en el mundo clásico. Así, puede deducirse de la tesis de Han que hay una diferencia fundamental entre la seducción del dato y la seducción del conocimiento.

Poner en valor el auténtico conocimiento, aquel que trasciende la mera agregación de datos, implica poner en valor la universidad, concebida como una institución que busca crear un espacio para la comprensión de las realidades sociales, al tiempo que proyecta una influencia real en las mismas, todo ello desde el rigor metodológico y con una vocación de integración de disciplinas. La universidad debe, por ende, reivindicar su propio espacio, aunque para ello debe ser consciente de que ese espacio se da en un contexto histórico y social determinado, puesto que, como cualquier institución, no es *ahistórica*^[6].

La persistencia del espacio de la universidad dependerá, a nuestro entender, de que sepa ser intransigente en sus principios fundamentales –búsqueda de la verdad, libertad intelectual, transmisión de conocimiento y humanismo–, para perdurar, pero transigente en sus formas, para seducir, en la acepción positiva del término. En consecuencia, deberá analizar hasta qué punto presentan aptitud para la seducción algunas de sus formas, prácticas y modos de funcionar, tales como, por citar algunos, la clase presencial magistral –en un contexto de digitalización creciente–, la prueba escrita como método de evaluación ordinario –con escasa incidencia en la calificación de la expresión oral del alumnado–, la ausencia de itinerarios curriculares específicos para el alumnado que quiera dedicarse a la función pública –condenándolo a una segunda carrera en forma de oposición– o la vigencia de planes de estudio con décadas de existencia –en los que persisten auténticas reliquias curriculares–. Este análisis debe permitir determinar en qué medida estos modos de funcionar han sido superados por el contexto social, económico y tecnológico, así como por las dinámicas comunicativas de la sociedad de la información, la cual ha derivado en una sociedad de la conexión.

Finalmente, debemos abordar la cuestión de si el pensamiento crítico, aprehendido en base a una estrategia de seducción, puede contribuir a la creación de sentido. Gilles Lipovetsky abordó en su obra *La era del vacío* uno de los males de la sociedad posmoderna: la ausencia de sentido. Afirmó que el agotamiento de los grandes relatos colectivos y el desvanecimiento de la idea de progreso, entendido como un avance lineal ascendente de la humanidad a través de las eras, había dado lugar a un tiempo intransitivo, desustancializado: el tiempo del vacío. El relato postmoderno habita un horizonte de desesperanza, de distopía, de fin de era; en la era del vacío,

mal que les pese a los metafísicos y antimetafísicos, se comprende que es posible vivir con indiferencia, sin objeto ni sentido[7].

En cuanto a la proyección de esta indiferencia en el campo de la enseñanza, según Lipovetsky, esta constituye el ámbito en el que el fenómeno es más visible, en tanto que el discurso del *Maestro* ha sido desacralizado, banalizado, situado en el mismo plano que el de los *mass media*, y la escuela se ha convertido, más que en un cuartel, en un desierto donde los jóvenes vegetan sin grandes motivaciones ni intereses.

A pesar de diagnósticos como el de Lipovetsky, que no se pronuncia acerca de las posibles alternativas a la sociedad del vacío, sostenemos que la universidad puede y debe ejercer de contrapunto a este relato del *(sin)sentido*, esencialmente por dos razones.

En primer lugar, porque la universidad, en tanto que institución transmisora del saber, exige una confianza en el tiempo y en las personas que han de venir, dado que ningún saber es tal si no se transmite a través de un diálogo intergeneracional; hay en este diálogo un trasfondo de progreso y esperanza. En segundo lugar, porque la institución universitaria, en la medida en que adquiere un compromiso radical para con la verdad, puede contribuir a la profundización en una dimensión ética de la existencia, orientando nuestro comportamiento hacia lo que importa *de verdad*.

En suma, y retomado la cuestión inicial planteada en el presente artículo, se puede decir que concurren en la universidad los elementos necesarios para una síntesis adecuada del pensamiento crítico, la seducción y el sentido. El pensamiento crítico puede ser el combustible, la seducción puede ejercer de inyector y el sentido debe ser el trayecto, y, a la vez, el destino de la institución.

Sin embargo, para que esta potencial capacidad sintética de pensamiento crítico, seducción y sentido que atesora la universidad cobre realidad y se proyecte socialmente, es necesaria la confluencia de una tríada de voluntades: la política, la docente y la estudiantil; política, por lo que respecta a la dotación de recursos y a la valorización de la institución; docente, por lo que respecta a la motivación por enseñar y a la innovación metodológica; y estudiantil, en cuanto a la asunción consciente de la responsabilidad de ser, como dice Mujica, *la barra que supera con ventaja* a quienes les preceden.

Notas

1. En algunos países de Latinoamérica, como Uruguay o Argentina, se utiliza la expresión «barra» para denominar a grupos de personas que se reúnen por un interés común. ?
2. Manuel Sacristán Luzón, «Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores», en *Papeles de Filosofía. Panfletos y materiales II*, Icaria, Barcelona, 1984, p. 356. ?
3. El artículo 2.2.f) de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, define como una de las funciones de las universidades *la generación de espacios de creación y difusión de pensamiento crítico*. ?
4. Es también pertinente traer a colación que las primeras escuelas filosóficas griegas, como la escuela de Mileto, tuvieron un origen *excéntrico*, alejado del centro, en tanto que surgieron en las costas jónicas y solo el avance persa las desplazó hacia Atenas; la relación entre *excentricidad* y pensamiento crítico merecería también una reflexión, la cual no es objeto del presente artículo. ?

5. Byung-Chul Han, *La agonía del Eros*, Herder, Barcelona, 2014, pp. 73-79. [?](#)
6. Juan-Ramón Capella Hernández, *El aprendizaje del aprendizaje*, Trotta, Madrid, 2017. [?](#)
7. Gilles Lipovetsky, *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona, 2003, pp. 46-47. [?](#)

Antonio Antón

El continuismo socialista

Se acaba de celebrar el 41 Congreso del Partido Socialista. En sus debates, resoluciones y el discurso de su refrendado secretario general, Pedro Sánchez, no ha habido un gran contenido estratégico e ideológico. Parece que tampoco se pretendía.

La orientación política está presidida por el pragmatismo que, dada la fragilidad de su representatividad parlamentaria, se puede resumir en 'hacer de la necesidad virtud' para garantizar la primacía gubernamental socialista. El cierre de filas en torno a su liderazgo persigue ensanchar su espacio político-electoral para mejorar su poder institucional, con una alusión genérica a algunas preocupaciones ciudadanas y sin mencionar la necesaria colaboración con sus socios actuales.

Por otra parte, es de reseñar la lamentable enmienda aprobada, con gran simbolismo conservador frente al reconocimiento de todo el colectivo LGTBIQ+, que representa una involución reaccionaria respecto de la acordada Ley Trans.

El objetivo inmediato al comienzo de la legislatura era evidente, conseguir su investidura presidencial, con la negociación del apoyo de sus imprescindibles aliados de izquierda y nacionalistas. Para ello era necesario el acuerdo con Junts y, por tanto, aprobar la Ley de amnistía que exigía como condición. Así, con esa necesidad y su justificación comenzaba la primera medida democratizadora y de convivencia plurinacional del nuevo gobierno de coalición progresista. Es el factor que está condicionando toda la legislatura y el posicionamiento de los actores políticos, fácticos y mediáticos, con todas las derechas españolas a la contra. Esa Ley no estaba contemplada en el programa socialista pero enlazaba con la reclamación democrática del resto de grupos nacionalistas periféricos y de izquierdas.

Ahora la prioridad socialista es ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027 y se despliega la retórica de adelantar por la izquierda en confrontación con las derechas. Veamos el alcance de esos objetivos y el sentido de ese discurso, en el actual contexto de ofensiva abierta de las derechas que pretenden alcanzar su hegemonía gubernamental e institucional e imprimir una dinámica reaccionaria.

Las derechas políticas y fácticas —judiciales y mediáticas—, aparte de intentar quitar legitimidad democrática al propio Gobierno, amplían su estrategia de acoso y derribo contra el Ejecutivo y, en particular, al propio presidente del Gobierno y su entorno. Sin suficiente apoyo parlamentario, pretenden apropiarse del Estado y apoyarse en el poder empresarial, y ensayan un golpismo blando. Se refuerza la guerra jurídica y mediática iniciada en la anterior legislatura contra Podemos y los independentistas, cuyo objetivo da un paso cualitativo: terminar con la primacía socialista y la gobernabilidad progresista del país.

Algunos dirigentes del Partido Popular, así como de VOX, lo expresan claramente: hay que echar a este gobierno progresista... como sea. Se produce una profunda degradación democrática y ética en unas derechas que se consideran propietarias del Estado y representantes de la patria —española—, que la conciben desde un nacionalismo españolista excluyente, centralizador y

autoritario.

Son palabras mayores que, junto con los indultos y la amnistía a los independentistas catalanes, sirve para que una parte relevante del poder judicial considere esta legítima gestión una ofensa a su primacía corporativa y contribuya a activar su rechazo al poder legislativo y ejecutivo. Se llega a cuestionar el Estado de derecho y la propia democracia. No importa la crispación política y la desafección ciudadana hacia las élites institucionales, el objetivo es la confusión y la desactivación de las bases sociales progresistas para asaltar el poder gubernamental.

Es el marco de la llamada resistencia socialista a este proceso deslegitimador de las derechas, con métodos antidemocráticos basados en la mentira y la desinformación, con todos los recursos de su poderío institucional y cultural y la búsqueda del aval del poder empresarial y, más allá, de las instituciones europeas y sus aliados internacionales, con Trump a la cabeza.

Queda situado el foco de la pugna democrática, con la interacción de los dos hechos determinantes desde el inicio de esta legislatura, consensuados con los socios de la investidura: la formación y relativa estabilidad de un Gobierno de coalición progresista, a pesar de sus equilibrios precarios, en detrimento de la clase política y fáctica derechista, y el comienzo democrático de la convivencia interterritorial y la reforma plurinacional, frente a una tradición y unos núcleos de poder centralistas y autoritarios.

Han quedado en un segundo plano dos ámbitos que tienen una importancia decisiva para una legislatura de progreso y la legitimidad del propio Ejecutivo. Son fundamentales para las fuerzas de izquierda, para reforzar sus bases sociales y electorales, condicionar las inclinaciones centristas de la dirección socialista y garantizar una gobernabilidad auténticamente progresista, aunque las presiones de las derechas nacionalistas (PNV y Junts) los tienden a rebajar.

Por un lado, la reforma social, incluidas la fiscal, la financiación autonómica y la laboral, con un avance en los derechos sociales, ambientales y feministas, la reducción de la desigualdad—incluidas las de sexo, étnico/nacional y territorial— y el refuerzo de la capacidad adquisitiva y los servicios públicos, especialmente, la sanidad y la educación, así como una vivienda digna. Los resultados son variados, pero, en su conjunto y en el mejor de los casos, son limitados y contrastan con una dinámica social problemática y duradera, que afecta, especialmente a las capas populares y precarias.

Es el campo en el que se ha desarrollado cierta retórica socialdemócrata más o menos genérica frente al riesgo de la falta de credibilidad transformadora generadora de desconfianza y desapego de parte del electorado de las izquierdas. No obstante, es dudoso que esa simple retórica, sin avances relevantes y reformas significativas, pueda ampliar la adhesión popular y asegurar una mayor confianza en su representación política y electoral.

Por otro lado, la democratización institucional, que, más allá de la amnistía y su lenta y sesgada aplicación, enseguida ha aparecido como fundamental, en particular con respecto a los aparatos judiciales y mediáticos, cuya necesidad había constatado el propio Presidente en su reflexión primaveral. Este ámbito de regeneración democrática que, a diferencia de la reforma social, se había señalado como susceptible de mayor apoyo parlamentario de las derechas nacionalistas, ha tenido escasos avances, en particular con el pacto continuista con el Partido Popular para la renovación del poder judicial.

Además, más allá de los bulos derechistas para tapar sus responsabilidades y neutralizar la autoridad moral socialista, han aparecido hechos contraproducentes de corrupción como el caso Koldo-Ábalos que afectan a su credibilidad. El Partido Socialista aparece a la defensiva, para controlar los daños de la ofensiva derechista y sin un plan convincente de regeneración democrática y menos de participación cívica, articulación de la plurinacionalidad —incluida la financiación autonómica y su gestión progresiva— y la regulación del modelo de Estado.

Cabe añadir el continuismo de las políticas de Estado —macroeconómicas, institucionales y de seguridad y defensa— e internacionales, con los compromisos con el consenso liberal-conservador europeo, su retroceso humanitario en materia de inmigración o la subordinación geopolítica y armamentística a EE.UU., en el marco de la OTAN y sin autonomía europea. Es el pragmatismo socialista ante el gran poder establecido mundial. Estos ámbitos siempre han sido competencia del ala socialista del Gobierno, normalmente son compartidas con las derechas europeas —las españolas han extremado su oposición destructiva—, pero aparte de su conservadurismo condicionado todavía más por el ascenso ultra en Europa, arrastran algunas complicidades indignas, como la falta de firmeza contra el genocidio del Gobierno israelí en Palestina.

A pesar de cierto envoltorio retórico, el papel de España está bastante alejado de la prioridad por los derechos humanos, la paz y el derecho internacional. Es un campo en el que se mira más hacia la derecha y los grandes poderes europeos y mundiales, genera una posición incómoda respecto de la ciudadanía progresista y no favorece la legitimación cívica de las izquierdas.

Por tanto, es aceptable cierta retórica genérica contra el autoritarismo y la ofensiva antidemocrática de las derechas extremas, así como la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, con el acento en mejorar la vida de la gente, con más derechos sociolaborales y frente a la emergencia climática. Pero esos discursos, sin pasos operativos sustantivos y reales, más allá de producir una ilusión momentánea pueden acabar generando frustración pública. No constituyen un nuevo contrato social creíble en beneficio de las mayorías ciudadanas. Y pueden ser insuficientes para el objetivo pragmático deseado: activar el voto progresista y de izquierdas y ganar las próximas elecciones de 2027.

En definitiva, el Partido Socialista, como fuerza dominante en el espacio de progreso, no garantiza —por sí solo— el refuerzo de un proyecto igualitario y solidario de país. Su pragmatismo inmediateista de mirar a su izquierda y a su derecha, a la ciudadanía progresista y de izquierdas y al poder establecido, no le permite llevar una estrategia política y de alianzas suficientemente transformadora, persistente y democrática. Más allá de las ilusiones de un ausente hegemonismo centrista y las opiniones demoscópicas en cada momento, este Congreso socialista, en este contexto desfavorable, no asegura un rumbo de consolidación y avance social

y democrático; no es bastante esperanzador.

La excepcionalidad española de freno a las tendencias autoritarias y de precarización y austeridad, así como de su avance sociopolítico de progreso, tiene que ver con tres lustros de activación cívica igualitaria y democratizadora y articulación de unas relevantes izquierdas transformadoras, hoy debilitadas y fragmentadas, incluyendo a las nacionalistas.

La solución frente a la nueva ofensiva de las derechas deriva de esa experiencia histórica: participación ciudadana por la igualdad, firmeza en las políticas democráticas y de izquierda y refuerzo de las izquierdas sociales y políticas alternativas. Es cuando cierta retórica socioliberal o ambigua se puede convertir en compromisos prácticos inequívocos con los intereses de las mayorías sociales y el posibilismo inmediateista en una senda reformadora progresista. El Partido Socialista, en cooperación con el resto de fuerzas nacionalistas y de izquierda, debería ocupar su lugar, con una estrategia colaborativa, y asumir su responsabilidad histórica compartida por el futuro de progreso.

Resistencia y avance social y democrático

Existe una estrategia deliberada de las derechas políticas y fácticas para deslegitimar y derribar el Gobierno de coalición progresista, con una ofensiva política, mediática y judicial. Incluso se habla públicamente de la instrumentalización de la justicia y el acoso judicial para fines políticos. Y aunque se refiera a un pequeño grupo ultraconservador, además de sus implicaciones globales para el Estado de derecho y la democracia, están generando una amplia desconfianza cívica en el propio poder judicial.

Así, según el CIS de junio pasado, no llega al 10% de la población la que cree que los tribunales actúan siempre de forma imparcial, mientras el 40% desconfía de ellos. Hoy, probablemente y a la vista de distintas iniciativas judiciales, se agudizaría esa percepción crítica. Ello se acumula al descrédito de otros instrumentos básicos de intermediación de la ciudadanía con la política y el Estado, como las élites políticas y los grandes medios de comunicación. Son síntoma de los fallos de la democracia existente, que la ultraderecha pretende instrumentalizar a su favor con mayor autoritarismo, cuando se necesita más regeneración democrática.

El presidente Pedro Sánchez ha hablado de connivencia entre dirigentes de la derecha y algunos jueces. Según la vicepresidenta socialista María Jesús Montero, el blanco a batir por este acoso derechista es el propio presidente del Ejecutivo. En el plano más general, ese centralismo reaccionario trataría de terminar con este ciclo de —limitado— progreso y la mayoría democrática y plurinacional que han permitido el soporte de su investidura gubernamental.

En particular, hay un pulso de fondo entre conservadurismo autoritario y progresismo democrático en tres ámbitos fundamentales: la amnistía y el atisbo de reequilibrio del modelo territorial con la regulación de la plurinacionalidad; la superación de la desigualdad y las grandes brechas sociales y de género, junto con los retos medioambientales, con el sentido y la dimensión de una imprescindible reforma social, y una nueva convivencia cívica e intercultural, con la integración de las personas inmigrantes y la defensa de los derechos humanos y la democracia inclusiva.

La amenaza de una involución autoritaria y regresiva está derivada de la actitud destructiva de las dos derechas extremas, aunque su agresividad también esconde su insuficiente apoyo

parlamentario, que les impide una moción de censura exitosa. Por tanto, no tienen una alternativa institucional para ese giro reaccionario, y utilizan todo el resto de recursos de poder para conseguir el desgaste del Gobierno, la ruptura de su mayoría democrática, el bloqueo de las políticas de progreso y su anhelado recambio gubernamental. En ese contexto se enmarca la difícil negociación y aprobación presupuestaria y los emplazamientos de Junts (y PNV), que condicionan la legislatura.

De todo ello, en medio de una gran polarización discursiva, hay una percepción generalizada entre la opinión pública. Se trata de valorar el sentido y el alcance de los dos componentes fundamentales de la estrategia política de las izquierdas: resistencia y avance en condiciones y derechos sociales y democráticos para la ciudadanía. Ambos interactúan, y hay que valorarlos conjuntamente, más en una etapa de fuerte ofensiva de las derechas y los grupos de poder. No vale la dicotomía entre resistir y gobernar. Esta realidad obliga a combinar las dos dinámicas, con una orientación de transformación progresista de fondo y de participación cívica.

Su contenido político es el avance social y democrático, el freno a la involución. Es la condición para legitimar la acción gubernamental y garantizar el suficiente apoyo popular. No se trata solo de retórica sobre el adelantamiento por la izquierda o la política útil. El relato debe acompañar a los hechos, no sustituirlos; por sí solo no genera suficiente convencimiento cívico. Como decía el gran sociólogo alemán Max Weber, hace un siglo, el político debe estar sujeto a la ética de la responsabilidad, a los resultados de su gestión, y estar reforzada por la ética de la convicción, de los principios y objetivos finales.

Por tanto, la valoración de las élites políticas progresistas es sobre el alcance de las políticas públicas ante la gravedad de las condiciones de vida de la mayoría popular, así como frente a las amenazas a las mediaciones institucionales y democráticas que impiden su implementación. Y, en todo caso y dadas las constricciones estructurales, institucionales y socioeconómicas, los distintos sectores sociales evalúan la orientación y el esfuerzo de la representación política y sus vínculos con la sociedad, la credibilidad transformadora de su compromiso sociopolítico y electoral, la generación de nuevas fuerzas sociales y condiciones institucionales para alcanzar esos objetivos de progreso. El incumplimiento por las fuerzas progresistas de ese contrato público es el auténtico hándicap para su consolidación.

Resistencia es un concepto sociopolítico fundamental para las izquierdas. Hace referencia a una situación de conflicto social, con una fuerte presión de los grupos poderosos y las derechas extremas. No es casual que, actualmente, vuelva al debate público, incluso resuene en el ámbito socialista y guíe una parte de su actitud. Son evidentes las estrategias derechistas de acoso político, mediático y judicial contra el Partido Socialista, como ayer lo hicieron contra Podemos y los independentistas. Ante esa ofensiva es necesaria una buena defensiva... pero no solo. Resistencia se opone a pasividad o resignación. Es una actitud activa para impedir un retroceso y, al mismo tiempo, preparar el avance.

Hay un concepto similar, resiliencia, utilizado más en el ámbito económico-productivo y en el vital-familiar, que se ha puesto de moda. Ante situaciones de crisis y adversidades se trata de tener capacidad para remontarlas con los procesos adaptativos necesarios; supone persistir y, al mismo tiempo, considerar los nuevos equilibrios y porfiar en los objetivos emancipadores.

No se trata de justificar el mal menor que, siguiendo a Hanna Arendt, siempre tiene un

componente de mal que se suele esconder y, por tanto, es necesario explicitarlo y revertirlo. Frente al mal mayor, y si no hay otra alternativa, siempre es preferible el mal menor. Como decía Walter Benjamín, se trata de una situación trágica en la que lo sustantivo es no embellecerlo y ampliar el marco de lo posible para poder elegir el bien. Mientras tanto, el bien principal a preservar es el compromiso cívico por el cambio de progreso, no la resignación. Las situaciones trágicas, conflictivas y ambivalentes forman parte de la realidad social; no hay escapismo que valga, hay que darles respuesta concreta.

En las pugnas políticas y sociales pueden generarse, en un lenguaje importado de las guerras, dinámicas defensivas y ofensivas, así como conflictivas y colaborativas o, simplemente, treguas. Pero el horizonte progresista todavía se guía por los grandes valores de libertad, igualdad y solidaridad; podríamos añadir laicidad, democracia e interculturalidad.

Hay grandes experiencias históricas, desde las resistencias antifascistas europeas en la preguerra y la segunda guerra mundial, hasta la propia lucha antifranquista, o en los años ochenta en el activismo contra la OTAN y por la paz o frente a las reconversiones industriales salvajes y la precarización laboral y por el giro social. Eran acciones resistentes contra el autoritarismo regresivo que, además, acumulaban capacidades populares por la democracia y las libertades públicas, así como por los derechos sociales y laborales.

Pero hay que recordar la experiencia masiva, especialmente para las generaciones jóvenes, del comienzo de este ciclo sociopolítico progresista, entre los años 2010/2014, en el llamado movimiento 15-M, en un sentido amplio e incorporando las huelgas generales frente a las contrarreformas sociolaborales, y en las mareas sectoriales, como las de enseñanza y sanidad. Tuvieron ese doble componente, contra los recortes sociales y la prepotencia gubernamental y por la justicia social y mayor democracia real. A lo que habría que añadir la cuarta ola feminista, desde 2018, también con esa doble característica: contra la violencia machista y por la libertad sexual y la igualdad por sexo/género.

Pues bien, estas experiencias a través de las que se ha socializado y vertebrado el llamado espacio del cambio de progreso y el propio giro socialista hacia la izquierda de la anterior legislatura, precisamente se han conformado con la combinación de esa doble dinámica estratégica.

La elección de la resistencia no depende solo del propio actor; deriva de una realidad relacional, de una determinada disposición y relación de fuerzas sociales y políticas. Es lógica la preferencia por una situación de armonía y consenso, de diálogo político y argumentación deliberativa, de ausencia de conflicto y de debate solo de proyectos y horizontes a los que buscar apoyos socioelectorales en una competencia equilibrada.

Pero esa visión idílica de la política hace abstracción de las profundas desigualdades de poder y de la estructura social, así como de la voluntad de las fuerzas conservadoras de utilizar todas sus ventajas para mantener sus privilegios. Y la perspectiva en España, Europa y el mundo es al reforzamiento autoritario y regresivo con la prepotencia postdemocrática de las derechas extremas.

Las fuerzas de derechas juegan con ventaja. Tienen detrás el grueso de los grupos de poder económico, mediático, judicial y burocrático estatal, y de seguridad. Las fuerzas progresistas y de

izquierda, para contrarrestar ese poder establecido, deben contar con las mayorías ciudadanas a través de su articulación sociopolítica y cultural y la democracia política y social. Es la soberanía popular expresada en el Parlamento.

En ese sentido, les es más fundamental su autoridad moral y su talante democrático y participativo. Es necesaria la ética kantiana, con su imperativo del 'deber ser' universalista, aunque se trata, sobre todo, del cambio de comportamientos y relaciones sociales en un sentido igualitario, libre y solidario. Se trata de conectar el presente conflictual con el futuro esperanzador, mediando la combinación de resistencia y progreso. El juicio crítico debe ser sobre la responsabilidad política de la gestión, sobre su trayectoria hacia el bien común.

En definitiva, respecto de la resistencia, el problema que nos encontramos no es su exceso sino su insuficiencia. Adquiere una gran dimensión en los relatos y la polarización discursiva a efectos de legitimación político-electoral frente al bloque de las derechas, confiando que es en ese campo en el que se producen los cambios de mentalidades y actitudes. Pero la propia dirección socialista se va dando cuenta que es insuficiente y debe afrontar lo que viene anunciando y ha rehuido: una completa y profunda regeneración democrática.

La pugna no es solo retórica sino de poder democratizador y transformaciones sustantivas, en particular para el bienestar de las mayorías sociales. Conlleva la confrontación con los resortes de poder fáctico —político, mediático, judicial, económico— que impiden el avance democrático y social, auguran el cierre del ciclo de progreso y la subordinación de las fuerzas de izquierda, así como cuestionan su propia primacía política en un imprescindible bloque progresista, democrático y plurinacional. Resistir para avanzar.

Miguel Candel

Dialéctica sin dogma

Nota de edición (SLA)

El próximo 5 de septiembre de 2025 se cumplirá el primer centenario del nacimiento de Manuel Sacristán Luzón (pocos días antes, 27 de agosto, los 40 años de su prematuro fallecimiento). Serán numerosos, así lo esperamos, los encuentros, conferencias, jornadas y congresos (*) que se celebrarán para recordar y homenajear a uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX, a un verdadero y nunca olvidado maestro de ciudadanos y universitarios, a uno de nuestros pensadores marxistas más sólidos, creativos e interesantes, fuertemente comprometido con una arriesgada praxis comunista democrática de la que fue militante (y durante años dirigente) activo durante unos 30 años. Intentaremos falsar entre todos la brillante (y pesimista) ocurrencia borgiana sobre centenarios: «noventa y nueve años olvidadizos y uno de liviana atención es lo que por centenario se entiende».

Para contribuir al recuerdo y homenaje, el colectivo Espai Marx ha acordado publicar *semanalmente*, todos los viernes, a lo largo de 2025, trabajos del autor de *Panfletos y materiales*, intentando cubrir un amplio arco de reflexión, conocimiento, sugerencias y propuestas que abarcará desde sus primeros textos juveniles publicados en las revistas barceloneses *Qvadrante* y *Laye* hasta sus últimas cartas y su último escrito largo, la presentación del undécimo Cuaderno de Gramsci.

En aras de abrir nuestro apetito lector, para irnos introduciendo en el recuerdo y homenaje a Sacristán, para «dar calor a la llama de siempre», Espai Marx está publicando a lo largo de estas semanas de diciembre artículos de estudiosos y conocedores de su obra. La semana pasada publicamos un artículo de otro gran maestro no olvidado, Francisco Fernández Buey (1943-2012). En esta ocasión, un escrito del helenista Miguel Candel, el autor de *Más allá del ser y el no ser y Metafísica de cercanías*, fechado el 25 de noviembre de 2005, que fue prólogo del ensayo: Manuel Sacristán, *Sobre dialéctica*, Barcelona: El Viejo Topo, 2009 (epílogos de Félix Ovejero y Manuel Monleón Pradas; edición de SLA). Puede (y debe) verse también: Miguel Candel, «Las ideas gnoseológicas de Manuel Sacristán», *mientras tanto*, 30-31, mayo de 1987.

(*) un primer ejemplo de estos encuentros:

«Manuel Sacristán (1925-1985), hoy: aproximaciones a su legado».

Día y hora: lunes, 27 enero 2025, 17 h. Lugar: Salón de actos «Francisco A. Muñoz». Centro de documentación científica. c/ Rector López Argüeta s/n, Granada.

Dentro del ciclo «Miradas al mundo» (Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada), coordinado por Jesús A. Sánchez Cazorla.

Primera parte (17-18:30 h.)

Gonzalo Gallardo Blanco: «La ortodoxia marxista bien entendida: Manuel Sacristán como intelectual comunista». GHECO-UAM, Grupo de investigación en Humanidades Ecológicas.

Jesús Ángel Ruiz Moreno: «El giro aristotélico de Manuel Sacristán». Grupo de Investigación Filosofía Social HUM-1036, Universidad de Granada.

Sebastián Martínez Solás: «Continuidad y discontinuidad en el legado de Manuel Sacristán: Francisco Fernández Buey». Grupo de Investigación Filosofía Social HUM-1036, Universidad de Granada.

18:30-19 h. Pausa.

Segunda parte (19-21 h.)

Violeta I. Garrido Sánchez: ««De nada en demasía»: Manuel Sacristán, el comunismo y el exceso». Dpto. de Filosofía I, Universidad de Granada.

José Luis Moreno Pestaña: «Manuel Sacristán a través de Gramsci». Dpto. de Filosofía I, Universidad de Granada.

Jorge Riechmann: «Estamos a medio hacer. Sobre Manuel Sacristán y la noción gramsciana de ‘centro de anudamiento’». Dpto. de Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid.

Debate final (20:30-21 h.)

Sesión presencial, pero se podrá asistir también por videoconferencia, a través de la aplicación Meet de Google.

En su uso prefilosófico, *dialéctica* parece haber designado una simple técnica de debate o confrontación de tesis opuestas (la tradición doxográfica atribuye la paternidad de la dialéctica a Zenón de Elea, por sus célebres argumentos contra la posibilidad del movimiento). Platón, en cambio, hace de ella la forma suprema del saber humano, caracterizada por su capacidad reductora de las *formas* (no meramente ideales, sino reales) a principios elementales comunes a todas ellas. Aristóteles le restituye su carácter instrumental aun concediendo al uso platónico una parte de verdad, a saber: la función de la dialéctica como examen interdisciplinario o «transversal» de los puntos de partida de las diversas ciencias particulares, pero rebajando sus pretensiones de ciencia suprema al modesto papel de una disciplina auxiliar^[1].

Al final de la Antigüedad la dialéctica había quedado fijada como una de las tres disciplinas que integraban el *trivium*^[2]. De hecho, quedó constituida en precursora directa —o equivalente práctica— de la lógica, cuyo objeto era, en la concepción tradicional de la misma, el arte de la argumentación^[3].

En Kant, el término ‘dialéctica’, gracias al previo desgajamiento escolástico de la lógica como estudio de las «reglas del pensamiento»^[4], había recuperado su carácter de forma discursiva abierta, no constreñida por ningún concepto previo^[5]. Sobre esa base dinámica (y sobre la de una recuperación de la dialéctica metafísica de Platón según la versión del neoplatónico Proclo)

construyó Hegel su peculiar dialéctica como intento de superación, a la vez, de la metafísica dogmática tradicional y del criticismo kantiano o, si se prefiere, de la escisión, no salvada por aquélla ni por éste, entre objeto y sujeto. El recurso para ello utilizado, al modo de los antiguos filósofos griegos que atribuían, frente a Parménides, igual importancia al *no-ser* que al *ser* — identificando el *no-ser*, físicamente, con el vacío (Demócrito y Epicuro), y lógicamente, con el error de Pirrón de Élida y los escépticos en general)— consiste en recuperar la *negatividad* como elemento esencial tanto de lo real (el ámbito del objeto) como de lo ideal (el ámbito del sujeto) tendiendo, de paso, un sólido puente entre ambos. En efecto, lo real se *niega* en la medida en que *cambia*; y de hecho, como ya sostenía Platón, la realidad empírica, la realidad que percibimos, está en cambio incesante: la realidad, por tanto, es *proceso*. Y por otro lado lo ideal o racional, que «en el fondo» coincide con lo real (es «el fondo de lo real»), aun sin cambiar, se articula mediante un juego de contraposiciones o *negaciones* que se manifiesta ya en la simple división de un género en sus especies, cada una de las cuales es negación de las demás; v.g.: en el árbol de Porfirio, *animal* se divide en *racional* (rama de la que supuestamente pende el *hombre*) e *irracional* (rama sin duda mucho más robusta pese a su negativa denominación, pues debe soportar a todos los demás inquilinos del Arca de Noé). Sobre esas vetustísimas observaciones de filósofos precedentes, pero animado por una sublimación laica de su primeriza vocación *teológica* de estudiante del seminario evangélico de Tubinga, construye Hegel su concepción de la dialéctica como movimiento por el cual lo real, a través de su constante autonegación (el cambio interno y el choque externo), acaba recuperando la unidad, entendida no ya como simple afirmación de su ser, ni tampoco, claro está, como simple negación —o, como dice Hegel, negación *determinada*—, sino como *negación de todas sus negaciones*, o identidad que contiene en sí, superándolas, todas las diferencias. Recuérdese la tesis de Spinoza según la cual *omnis determinatio est negatio*: lo indeterminado es también lo infinito, que al determinarse se limita, negando por tanto su infinitud; para recuperarla debe negar esas determinaciones-negaciones, pero no para retroceder al vacío estadio primigenio de indeterminación, sino para avanzar hacia un nuevo estadio de plenitud donde todas las determinaciones se funden sin perder sus contenidos. A lo largo de ese proceso la realidad deviene consciente y dueña de sí, se hace *espíritu*, síntesis de realidad e idealidad: Dios, en una palabra.

Puede decirse con bastante aproximación que es de esa versión hegeliana de la dialéctica de donde procede el actual uso «común» del término. Se considera, pues, dialéctica una noción cuyos perfiles no son fijos, sino que muestra sucesivamente facetas diferentes, pero no de manera aleatoria, sino con arreglo a una pauta consistente en que la consideración de cada una de las facetas lleva necesariamente a considerar su complementaria (es decir, su negación) y, por ello mismo, a situarse en la óptica del universo discursivo que engloba ambas[6]. Dado que esa dinámica entraña sucesividad en el pensamiento, incorporando la temporalidad como rasgo inherente a la representación de lo real, la perspectiva dialéctica parece especialmente idónea para el estudio de los procesos históricos. Hijo, pues, de ese uso de la dialéctica es el *historicismo*, presente ya como rasgo fundamental en la filosofía de Hegel, y consistente en la generalización de la perspectiva histórica para aplicarla a cualesquiera fenómenos.

Marx, en su crítica de las ideas sociales y económicas de la burguesía triunfante, recurre al enfoque historicista hegeliano —si bien depurado del idealismo de su versión original— para negar el carácter «natural», permanente, de las formaciones sociales y los modos de producción. Con ello mantiene dentro de una concepción materialista no dogmática la obvia distinción entre fenómenos históricos y fenómenos naturales. Distinción que luego ciertos seguidores suyos

acabarían difuminando al tratar de aplicar la dialéctica también a los procesos naturales.

Una muestra del abuso de la dialéctica en cierta tradición marxista, incluso en el estudio de fenómenos sociales, es el uso de términos como «contradicción» para referirse, por ejemplo, a los antagonismos de clase. Es éste uno de los aspectos «negativos» (no negado a su vez) de la herencia hegeliana: consiste en asimilar a una contradicción, que es en puridad la afirmación y negación *simultáneas* de un mismo contenido proposicional[7], lo que no es sino una oposición de fuerzas, tan afirmada la una como la otra. En realidad, tampoco atendiendo al plano meramente discursivo tiene sentido hablar de «contradicción» en la dinámica dialéctica de afirmación, negación y negación de la negación, pues éstas corresponden a momentos *sucesivos* de la conciencia y, en último término, se refieren a realidades *complementarias* que integran una unidad de orden superior. Podría incluso decirse que, precisamente porque la contradicción es imposible, es decir, porque no pueden coincidir plenamente algo y su negación, por eso la realidad se dilata en el tiempo: para poder desarrollar todas las potencialidades que, de darse concentradas en un punto, se anularían recíprocamente.

Pero el uso marxista de la dialéctica admite una generalización que, sin entrar —como parece pretender Engels en la *Dialéctica de la naturaleza*— en el detalle de cada uno de los fenómenos físicos, muestre el carácter *global*, es decir, la *unidad* de todos los procesos que tienen lugar en el cosmos, tanto físicos como sociales. Al referirse al cambio de talante intelectual en la Alemania de mediados del XIX, dice Engels en un texto inicialmente concebido como prólogo al *Anti-Dühring* e incluido luego en la mencionada *Dialéctica de la naturaleza*.

Y con el hegelianismo se echó por la borda la dialéctica —precisamente en los momentos en que se imponía con fuerza irresistible el carácter dialéctico de los fenómenos naturales y en que, por tanto, sólo la dialéctica de las ciencias naturales podía ayudar al hombre de ciencia a escalar la montaña teórica—, para entregarse de nuevo, con gesto impotente, en brazos de la vieja metafísica[8].

Es decir: la perspectiva dialéctica de búsqueda de la identidad *a través de* (no *al margen de*) las diferencias es, al menos, útil metodológicamente para superar la unilateralidad de cada una de las diversas disciplinas científicas. En uno de sus textos más brillantes sobre el valor de la dialéctica para el conocimiento, «La tarea de Engels en el Anti-Dühring», Manuel Sacristán sostiene que la perspectiva dialéctica permite reconstruir como totalidad concreta lo que las diversas abstracciones obtenidas por el método científico, forzosamente reductivo, habían previamente escindido (con el riesgo de falsear irremediablemente nuestra visión de la realidad al inducirnos a tomar por reales los simples modelos o constructos elaborados por la razón).

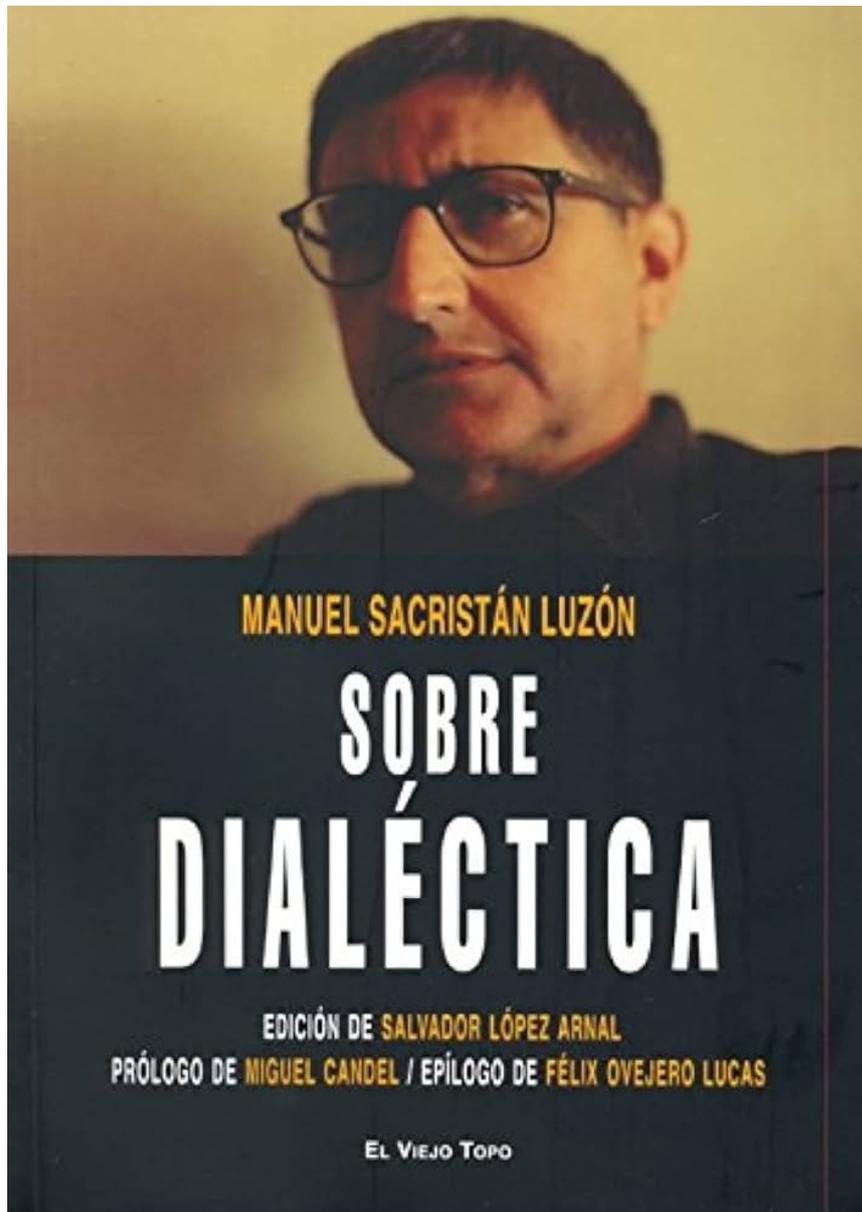
Los «todos» concretos y complejos no aparecen en el universo del discurso de la ciencia positiva, aunque ésta suministra todos los elementos de confianza para una comprensión racional de los mismos. Lo que no suministra es su totalidad, su consistencia concreta. Pues bien: el campo o ámbito de relevancia del pensamiento dialéctico es precisamente el de las totalidades concretas. Hegel ha expresado en su lenguaje poético esta motivación al decir que la verdad es el todo[9].

En efecto, como también señala un autor británico de finales del XIX e impropriamente considerado «idealista», Francis Herbert Bradley[10], todo concepto prescinde de la existencia, es decir, de la individualidad concreta de la cosa. Sólo la recomposición de los diversos predicados (abstractos *per se*) en una totalidad permite superar el carácter relativo[11] de éstos y recuperar la

concreción individual del sujeto, identificado con lo absoluto o, mejor, con un único Absoluto, pues sólo la totalidad de las cosas constituye un auténtico y *real* individuo^[12]: todos los conceptos, tomados aisladamente, no son sino *apariencias*, en el vocabulario de Bradley. Esta argumentación de Bradley encaja perfectamente dentro del patrón *dialéctico* aquí considerado.

La idea de que la realidad no puede consistir en un agregado aleatorio de elementos independientes meramente conectados por relaciones extrínsecas establecidas por nuestra mente es, en el fondo, una idea tan vieja —o más— que la filosofía. Y es probablemente (por encima del juego ideal-discursivo de conversiones de contrarios y negaciones de negaciones) la verdad que sigue vigente tras el término ‘dialéctica’^[13]. De este modo realmente «dialéctico» y no dogmático entiende Sacristán la dialéctica como herramienta de un pensamiento volcado sobre la praxis. Porque es justamente en la praxis, y no en el pensamiento «puro», donde el ser humano realiza de facto la síntesis de los distintos enfoques y perspectivas que una mente como la nuestra sólo sabe separar y contraponer.

Anexo: Índice de *Sobre dialéctica*



Prólogo: «El bucle dialéctico», Miguel Candel Sanmartín.

Presentación: «Claridad entre tinieblas», Salvador López Arnal.

1. Jesuitas y dialéctica.

2. Tres notas sobre la alianza impía.

3. La tarea de Engels en el *Anti-Dühring*.

4. A propósito de un proyecto de constitución de una escuela de sociología dialéctica en Barcelona.

5. De la dialéctica.

6. Sobre economía y dialéctica.

7. Coloquio de la conferencia «El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia».

8. Una aventura reciente de la dialéctica.

9. Metodología de las ciencias sociales.

9.1. La «crítica de la ciencia» en las disciplinas sociales.

9.2. La metodología de Marx.

9.3. ¿Qué es la dialéctica?

10. Sobre la dialéctica de la historia.

11. ANEXOS.

Anexo 1: Aspectos del problema del método en ciencias sociales.

Anexo 2: Sobre *Historia y consciencia de clase*.

Anexo 3: En torno al marxismo de Lucio Colletti.

12. Notas SLA

13. Epílogo. «Manuel Sacristán Luzón», Félix Ovejero Lucas.

14. Nota final. «Totalidades, contradicciones y dialéctica de la naturaleza», Manuel Monleón Pradas.

15. Senderos transitables: repensando la dialéctica.

16. Loa a la dialéctica, Bertolt Brecht (traducción de Antoni Domènech).

Índice nominal y analítico.

Notas

1. Véase la parte final del capítulo 2 del libro I de los *Tópicos* de Aristóteles. ?
2. Junto a la gramática y la retórica, con las que podríamos decir que se repartía el estudio del lenguaje: a riesgo de incurrir en un cierto anacronismo, podríamos decir, empleando conceptos modernos, que la gramática se ocupaba de la sintaxis, la dialéctica de la semántica y la retórica de la pragmática del lenguaje. ?
3. Aristóteles, considerado el padre de la lógica, no utiliza ningún término común para referirse al conjunto de los diferentes temas tratados en el *Órganon*, sino que habla, por ejemplo, de *tópica*

y *analítica* para designar, respectivamente, el estudio de los argumentos en general y de los argumentos de estructura llamada *silogística* en particular. El primer autor que utiliza el término 'lógica' con la acepción general de «estudio de los aspectos puramente formales de la argumentación» es el aristotélico Alejandro de Afrodisia (siglo III d.C.). [?](#)

4. Recuérdese la consagración definitiva de esa concepción de la lógica en la llamada «Lógica de Port-Royal», de Antoine Arnauld y Pierre Nicole, y cuyo título original es *La Logique ou l'Art de penser*. [?](#)
5. Lo que permitía que la razón se aventurase fuera de los límites marcados por las categorías del entendimiento, aunque esa «aventura» acabase de hecho en extravío, al menos en el plano estrictamente teórico. [?](#)
6. Es obviamente dialéctica, por ejemplo, la noción de *patria*, pues es imposible entender su contenido positivo («país que nos pertenece y/o al que pertenecemos») sin trazar, siquiera idealmente, unas fronteras al otro lado de las cuales se halla todo lo excluido de ella. De ahí la facilidad con que los muy patriotas se dedican a establecer exclusiones a diestro y siniestro (sobre todo esto último). Quienes van más allá de esa fase meramente negativa (como el propio Kant, en su momento), acaban reclamando la constitución de un ámbito superior que permita superar el antagonismo y las exclusiones que comportan las patrias: algo así como las hoy —¡ay!— agonizantes Naciones Unidas (?). [?](#)
7. La simultaneidad, obviamente, no puede darse *de facto*, pues el discurso es lineal-sucesivo y no admite la superposición física de segmentos distintos; pero sí se da una simultaneidad *intencional* cuando uno, aun en momentos distintos, *se refiere* a lo mismo y desde el mismo punto de vista. [?](#)
8. F. Engels, *Dialéctica de la naturaleza*, pág. 31. [?](#)
9. Manuel Sacristán, *La tarea de Engels en el «Anti-Dühring»*, en *Panfletos y materiales I*, Barcelona, Icaria, 1983, p. 37. La aportación de Sacristán, como veremos en las páginas que siguen [las de *Sobre dialéctica*], supone una verdadera «superación dialéctica» de la unilateralidad con que el pensamiento marxista español de la época (en la estela de la rudeza intelectual estalinista, sólo comparable a su rudeza policial) utilizaba la llamada «lógica dialéctica» contraponiéndola a la —supuestamente «burguesa»— lógica formal. [?](#)
10. Autor, entre otras obras de notable influencia en su tiempo, de *The Principles of Logic* (1883, 2ª ed. aument. en 1922), *Appearance and Reality* (1893, 2ª ed. en 1897), *Essays on Truth and Reality* (1914). De todas ellas, James W. Allard y Guy Stock editaron una selección comentada de textos en Oxford, Clarendon Press, 1994, bajo el título *Writings on Logic and Metaphysics*. La obra de Bradley inspiró, por acción o reacción, no pocas de las ideas filosóficas de Bertrand Russell, quien sin embargo contribuyó a endosar a Bradley el sambenito de «idealista». [?](#)
11. Bradley es especialmente célebre por su argumento, basado en un regreso al infinito, sobre el carácter contradictorio y, por tanto, no real de las relaciones. [?](#)
12. Esto, más que las tesis de Hegel, no puede dejar de recordar la tesis spinoziana sobre la unicidad de la Substancia. [?](#)
13. Una excelente síntesis de las diversas concepciones de la dialéctica desde una óptica actual de «realismo crítico» puede hallarse en: R. Bhaskar, *Dialectic. The Pulse of Freedom*, Londres, Verso, 1993. [?](#)

[Fuente: [Espai Marx](#)]

Rafael Poch de Feliu

Un genocidio entre dos crisis

Consideraciones sobre el futuro y el pasado del actual mundo peligroso

* El texto sigue las notas de la charla impartida el 13 de diciembre en el Ateneo de Figueres.

Cuando personajes prudentes como el secretario general de la ONU o el ex diplomático español Miguel Ángel Moratinos dicen que «la humanidad ha abierto las puertas del infierno» al ignorar el calentamiento global e incumplir los objetivos impuestos, y que nos encontramos «al borde de la Tercera Guerra Mundial», expresan el mero sentido común de cualquier persona despierta.

Efectivamente, en comparación con situaciones del pasado el mundo de hoy es peligroso por la combinación y correlación de dos crisis, la una dentro de la otra: la crisis del declive Occidental y la crisis del Antropoceno, o mejor dicho del capitalismo antropocénico. Es decir, todo lo vinculado al cambio global y que científicos como [Antonio Turiel han expuesto aquí](#) con gran claridad.

¿Cómo se lee lo de Gaza a la luz de la combinación de estas dos crisis?

Espejo de futuro y retrovisor del pasado

¿Qué mensaje lanza la complicidad occidental con la evidente y criminal negación del principio de igualdad entre seres humanos en el siglo XXI que se observa allá? Sin duda un mensaje y un aviso sobre cómo la parte privilegiada de este mundo pretende «solucionar» el callejón sin salida al que nos ha conducido el sistema capitalista. Es decir: la «solución» de mantener islas de libertad y derecho estrictamente protegidas por ejércitos y armadas para, digamos, el 20% de la población mundial, y excluir, recluir y si es necesario exterminar al resto en zonas, humana y ambientalmente, desastradas. El sociólogo Immanuel Wallerstein decía que esto podía no ser muy diferente del orden pregonado por Hitler y los nazis.

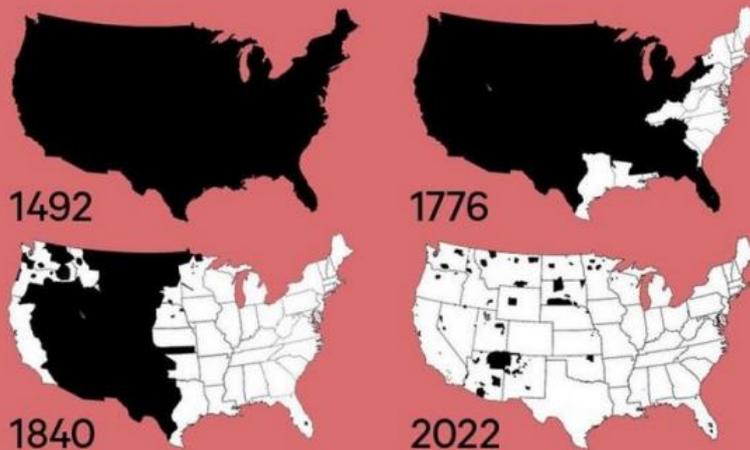
En nuestro futuro inmediato, grandes cantidades de personas van a ser desplazadas por el cambio climático. Así que hay que preguntarse ¿qué pasará con el impulso, la complicidad y el consenso genocida de los gobiernos euroamericanos y sus medios de comunicación que se está viendo en el caso de Gaza, en la perspectiva de una crisis que destruye grandes zonas habitadas del planeta?

En la [cumbre COP 28 de Dubái](#) el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo: «El desencadenamiento del genocidio y la barbarie sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del Sur desatado por la crisis [...] lo que el poder militar bárbaro del norte ha desencadenado sobre el pueblo palestino es la antesala de lo que desencadenará sobre todos los pueblos del sur cuando por la crisis climática quedemos sin agua; la antesala de lo que desencadenará sobre el éxodo de las gentes que por centenares de millones irán del sur al norte».

A juzgar por lo que estamos viendo en Gaza es muy poco probable que la violencia, mucho más prolongada y lenta, que experimenta (y experimentará en una medida mucho mayor en el inmediato futuro) la mayoría mundial como consecuencia del colapso ecológico y el cambio climático, suscite algún tipo de simpatía por parte del *establishment* occidental. Esto no es solo una predicción. Es también un ejercicio de memoria histórica.

Esta brutalidad tiene precedentes en las sociedades europeas más sofisticadas y cultas. Caracterizó la colonización euroamericana del «Nuevo Mundo» en la que los colonos europeos mataron a más de 55 millones de indígenas en América del Norte, Central y del Sur a lo largo de cien años, hasta el «periodo civilizador» de los siglos XIX y XX, durante el cual Occidente llevó a cabo las más brutales y salvajes campañas de violencia y exterminio en todo el mundo bajo la bandera de la modernidad y el desarrollo, particularmente en África y Asia, pero también incluso dentro de las propias fronteras europeas. Hacer en Europa algo que en los territorios coloniales no era nada excepcional, fue lo que convirtió a los nazis en criminales, como observó el fundador de la India moderna Jawaharlal Nehru en un libro escrito en 1942 en una prisión colonial británica.

Native Land Dispossession



■ Land inhabited and stewarded by natives
□ Land controlled by settlers



Evolución de la desposesión de los pueblos nativos en Palestina y en el territorio de los Estados Unidos. / Jewish Voice for Peace

El racismo colonial de Occidente es el nexo cultural e ideológico de las potencias occidentales con Israel, el «valor europeo», si se quiere, que explica la complicidad y la evidente negación del principio de igualdad entre seres humanos en el siglo XXI.

La comprensión ante el «derecho a defenderse» de Israel en países como Alemania, Francia o Inglaterra es resultado directo de la común historia colonial. Al fin y al cabo ¿qué está haciendo Israel en Palestina que no hiciera Francia en Argelia e Indochina cuando los de mi generación éramos niños? ¿O Inglaterra en la India de lo que Mike Davis llama el «holocausto tardovictoriano»? ¿O Alemania con el genocidio herero y namaqua en la actual Namibia a principios de

siglo, cuando nuestros abuelos eran niños?

«Gaza», dice Petro, «es el espejo de nuestro futuro inmediato». Y me permito añadir: también el retrovisor de nuestro pasado.

El día 10 intervino en la Universidad de Gerona Raji Sourani, fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos, y dijo que la lucha contra el genocidio de Gaza es la lucha por el futuro de la humanidad. No sé si Sourani pensaba en el escenario de una Gaza planetaria, pero su afirmación es indiscutible.

Declive y solución militar

Entremos ahora en el segundo aspecto, la mencionada «crisis del declive occidental». ¿Qué contiene ese concepto?

Esa crisis consiste en el intento del Norte Global (categoría que incluye a Rusia) de solventar su pérdida de peso en el mundo por medios militares. Todos sabemos, por ejemplo, que la economía de Estados Unidos, que en 1945 representaba casi la mitad de la economía mundial, hoy solo representa el 15% del PIB mundial. Y que toda una serie de países que entonces no contaban nada, hoy son potencias emergentes que van a más.

En ese contexto veamos la reacción de quienes van a menos.

? *Rusia*. Es obvio que, pese a su recuperación de los últimos años, la tendencia le afecta de pleno, porque todo el mundo entiende que por muy bien que le vayan las cosas nunca volverá a tener la potencia que alcanzó con la URSS, cuando entre los ríos Elba y Mekong había regímenes inspirados en el soviético. En 1991, poco antes de morir, el extraordinario etnógrafo soviético Lev Gumiliov, hijo de dos de los mayores poetas rusos del siglo XX, Nikolái Gumiliov y Anna Ajmátova, expuso la cuestión con gran claridad al anunciar el inicio de «la gradual decadencia de la étnos rusa, y, transcurrido cierto tiempo, su salida de la escena de la historia, pero, afortunadamente, tenemos algunos siglos por delante para construir y moldear». Gumiliov sugería con ello que, en cualquier caso, el futuro de Rusia sería la administración de su ocaso. En la Rusia de hoy creo que eso es algo comúnmente aceptado y, precisamente por eso, se busca administrar el declive reformulando su posición en el mundo.

La elite rusa ya no quiere integrarse en Europa, donde solo le ofrecían un papel subalterno incompatible con su identidad de gran potencia, sino vincularse a la pujante China y al Sur Global emergente. Cree que mediante una alianza con Pekín y potenciando el movimiento de los BRICs y las relaciones con el Sur global que estuvo en buena sintonía con la URSS, logrará mantener mucho mejor su soberanía a medio y largo plazo en un mundo multipolar con varios centros de poder.

La guerra de Ucrania rompe una tendencia de trescientos años en la historia de Rusia, la del enfoque hacia Europa de Pedro el Grande, en el siglo XVIII, y al mismo tiempo otorga a la crisis de su régimen bonapartista una prórroga para transformarse, mediante un nuevo contrato social con su población que está siendo formulado bajo la certeza de un endurecimiento del autoritarismo y la promesa de una mayor nivelación social.

? *La Unión Europea*. Fue una fórmula en la misma lógica de preservación: una serie de antiguas potencias coloniales venidas a menos que se unen para poder seguir siendo dominantes. Pero, de momento, el experimento solo ha logrado situarlas en el papel de «ayudante del sheriff».

La guerra de Ucrania fortalece su dependencia, política, militar y económica, de Estados Unidos, pero las incertidumbres del segundo mandato de Trump siembran el desconcierto entre los vasallos. En el orden interno sus estados miembros pierden nivelación social, soberanía y sustancia representativa por haber delegado competencias a instituciones oligárquicas no electas que gobiernan el conjunto: el Banco Central Europeo, en política económica y monetaria, la OTAN, en política exterior y de defensa, y la Comisión Europea en casi todo lo demás relativo a gobernanza. Lo menciono para comprender de paso que la distancia de todo esto con los regímenes autoritarios, autocráticos, de partido único, o como se quiera definir, es mucho menor de lo que nos explican.

? *Estados Unidos*. Aunque algunos de sus mandatarios digan que quieren «hacer América grande de nuevo», MAGA —lo que sugiere cierto reconocimiento de decadencia—, básicamente no aceptan el propio enunciado del problema —el declive— y quieren mantener mediante la guerra la ilusión de dominio unipolar en solitario soñada tras el fin de la guerra fría. Ven a China como el enemigo principal y el pulso con Rusia y la sumisión de la Unión Europea como parte de ese combate con China. En el orden interno hay división en el *establishment* de Washington sobre la táctica a seguir, pero no en el objetivo estratégico de preservarse como número uno, y continuar sirviendo a los intereses de los más ricos.

Como denominador común a los tres, diremos que el impulso guerrero une todos estos propósitos en los tres escenarios: Europa, Oriente Medio y Asia Oriental.

Si en el caso de Rusia y Estados Unidos, se entiende la lógica de sus respectivos objetivos y ambiciones, en el caso europeo todo parece mucho menos racional. Y eso pese a que es en Europa, de donde partieron dos guerras mundiales, donde el escenario bélico está ahora más candente.

En los tres escenarios las potencias implicadas son potencias nucleares. En Europa: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. En Oriente Medio, Estados Unidos e Israel. En Asia Oriental, Estados Unidos, China, Corea del Norte y Rusia. Eso define un peligro aún mayor que el de aquella época en la que las superpotencias capaces de destruir el mundo solo eran dos.

Como recuerda el *reloj del juicio final*, del *Bulletin* de los físicos nucleares de la Universidad de Chicago, asistimos a las tensiones nucleares más peligrosas desde la crisis de los misiles de Cuba, en 1962. Después de aquella crisis se estableció un cuerpo de normas y acuerdos —firmados o implícitos— sobre conductas y zonas de influencia entre las dos superpotencias nucleares que contribuyeron a evitar el desastre de una guerra nuclear. Hoy todo ese entramado argumental y diplomático, tratados de control de armamentos y desarme, o se ha desmontado en las últimas décadas (siempre a iniciativa de Estados Unidos), o es ignorado con gran ligereza por responsables políticos que ya carecen de experiencia biográfica generacional de guerra. Estamos asistiendo a la ruptura del canon de la guerra fría en materia de relaciones entre superpotencias nucleares, sin que nada lo haya sustituido.

Principios importantes de aquel canon eran no colocar junto a las fronteras del adversario nuclear recursos militares capaces de anular su disuasión y no avanzar alianzas militares hostiles. Ambos se han violado en Europa.

A partir de 1992 los *neocons* proclamaron que habían ganado la guerra fría, pensaron que podían afirmar un poder hegemónico exclusivo y sin cortapisas en el mundo y se lanzaron a reordenarlo. Muchos estrategas de Estados Unidos dijeron que era un error y los hechos demostraron que tenían razón: el resultado fue un gran desorden en Oriente Medio que ahora se extiende como guerra en Europa y gran aumento de las tensiones con China en Asia Oriental. Hablo de «desorden» pero las cifras sugieren que se debe emplear un término más próximo a lo criminal: desde el 11 de septiembre de 2001 neoyorquino, la guerra continua desatada por Estados Unidos y sus aliados —en Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Siria, etc.— ha gastado 8 billones de dólares (dos veces el PIB de Alemania) para ocasionar entre 4,5 y 4,7 millones de muertes (directas e indirectas) y 38 millones de desplazados. En Ucrania tenemos centenares de miles de muertos, en su inmensa mayoría soldados, y en ambos bandos, dos ejércitos de mutilados, viudas y huérfanos. Obviamente en el caso de Ucrania, como en el de Siria, no toda, pero si la principal responsabilidad es de Estados Unidos. Podemos escribir un libro sobre las responsabilidades rusas y ucranianas en el conflicto y discutir el reparto, pero lo que es indiscutible es que la iniciativa, el vector principal, es americano, euroamericano si se considera el seguidismo de la Unión Europea.

Ahora, entre el nerviosismo europeo por la victoria de Trump y ante la posible perspectiva del envío de tropas de la OTAN a Ucrania, asistimos a la reformulación de la política nuclear rusa. Se constata que la condición de Rusia como superpotencia nuclear ya no da miedo, ese miedo que evitó la guerra nuclear en el pasado, y que, por tanto, para Rusia es imperativo recuperar ese miedo para evitar una catástrofe mayor. En ese contexto se sitúa el uso demostrativo de nuevas armas hipersónicas que no pueden ser interceptadas, como el [misil Oreshnik](#). Hay que tener en cuenta, además, que la historia del pulso nuclear entre las superpotencias de la guerra fría estuvo llena de situaciones que escapaban a la voluntad de sus líderes y que se resolvieron por el azar o el sentido común de personajes insignificantes. Por todo ello es imperativo preguntarse hoy por este tipo de peligros.

Guerra, tiempo y estupidez

Con todo este peligro nuclear, al igual que con muchos otros problemas globales, como la desigualdad social y regional, o la superpoblación, se puede convivir. Convivir peligrosamente, podríamos decir. Pero se puede. De hecho, medio siglo de guerra fría bajo la amenaza de la Destrucción Mutua Asegurada (MAD), así lo demuestra. Pero a diferencia de la amenaza que supone el arma nuclear, la crisis del calentamiento global es algo que conforme no haces nada para atajarla, aumenta. No se puede convivir con ella sin entrar en desastres como la hipótesis genocida del presidente Gustavo Petro.

Así que, ahora, cuando los tiempos exigen una estrecha y urgente concertación internacional, en primer lugar entre Estados Unidos y China, para atajar la crisis climática, la guerra, el guion de los *imperios combatientes*, ya no es el desastre criminal que siempre fue, sino que además es una estupidez. Mientras se hace la guerra se pierde un tiempo del que no disponemos como especie. Por eso siempre digo que, si un extraterrestre observara nuestra situación, concluiría que los

dueños de este mundo peligroso han perdido la razón.

[Fuente: [Ctxt](#)]

Rafael Poch de Feliu

La quiebra de Siria aumenta la tragedia palestina

El desmoronamiento del régimen sirio forma parte de una serie histórica titulada «reconfiguración del Oriente Medio». Esa serie la iniciaron los *neocons* norteamericanos tras el fin de la Guerra Fría. Creían haber salido vencedores de aquel pulso y pensaban que podían imponer, por fin, un orden mundial bajo su exclusiva disciplina (el «fin de la historia»), pero resultó que el planeta les venía grande. Olvidaron que el hundimiento de una parte del mundo, la URSS y su bloque, denotaba la enfermedad del resto.

Primero Irak, luego Libia y ahora Siria, todos los regímenes árabes que estaban fuera de la disciplina occidental han ido cayendo uno tras otro. Se cumplió la letra de aquel memorándum del Pentágono que [el general Wesley Clark](#), entonces comandante supremo de las tropas de la OTAN en Europa, formuló así: «Vamos a acabar con siete países en cinco años, empezando por Irak, y luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y, para terminar, Irán». Pero las cosas no salieron como estaba previsto. El resultado del cambio no fue ambiguo sino desastroso para sus propios promotores. El lugar de regímenes hostiles con los que después de todo se podía llegar a acuerdos lo ha ocupado un panorama de sociedades destruidas. Hoy ni Washington ni nadie puede decir que controla el Oriente Medio más que ayer. Al contrario, las antiguas disciplinas se han roto, o se transforman, y el número de actores que desean restablecerlas a su medida se ha incrementado notablemente.

Seis de los siete países mencionados son agujeros negros. Solo falta Irán. Quienes entienden de Oriente Medio dicen que la guerra contra ese país está ahora más cerca que nunca.

En este mal negocio, las sociedades han pagado un extraordinario precio de devastación, colapso social y muerte. La quiebra de Siria no ha sido una victoria popular como sugiere el Telediario, sino que ha sido posible tras más de diez años de sanciones occidentales, guerra civil por procuración con centenares de miles de muertos y varios millones de refugiados y total asfixia económica, agravada en los últimos años por una ocupación militar que restó al régimen sus principales recursos petroleros y alimentarios.

Desde el 11 de septiembre de 2001 neoyorquino, la guerra continua desatada por Estados Unidos en el mundo (Afganistán, Irak, Yemen, Siria, etc.) ha costado ocho billones de dólares (dos veces el PIB de Alemania) para ocasionar [entre 4,5 y 4,7 millones de muertes \(directas e indirectas\) y 38 millones de desplazados](#). Los pueblos de aquellas «dictaduras soberanas» y otros de la región que vivieron las «primaveras árabes» no solo no se han emancipado sino que han ido a peor. Los manifestantes de la plaza Tahrir derribaron a Mubarak y obtuvieron a El Sisi, que gobierna al borde del colapso socioeconómico. Cayó Gadafi, y Libia, el Estado más próspero de África, se convirtió en un arruinado mosaico de milicias con campos de concentración para migrantes financiados por la Unión Europea y una desestabilización y militarización que se extiende por toda la región subsahariana. Irak fue destruido como Estado y se ha convertido en una serie de entidades fallidas, en gran parte en sintonía con Irán, a quien se pretendía debilitar. En todos esos casos, los servicios de propaganda occidental conocidos como «medios de comunicación» nos vendieron el mismo mundo feliz y las mismas imágenes de estatuas

derribadas, palacios del tirano saqueados y cárceles siniestras. ¿Será diferente ahora en el caso de Siria? En todo caso, nuestros dirigentes repiten el discurso sin molestarse en mirar hacia atrás.

La caída del régimen de Damasco y la toma del poder de los islamistas es una «oportunidad», dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente de Francia, la nación que en 2008, tres años antes del inicio de la guerra civil inducida, invitó a Bashar el Asad a la tribuna de honor del desfile del 14 de julio en los Campos Elíseos de París, se felicita por la caída de su «Estado bárbaro». La representante de la política exterior europea, Kaja Kallas, saluda el «positivo y tan esperado suceso que muestra la debilidad de Rusia e Irán». Nadie se acuerda ya de que el nuevo líder salafista de Damasco, Abu Mohamed al Golani, sigue en busca y captura por terrorismo con una ofrecida recompensa de diez millones de dólares en un pasquín del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Autores y padrinos del genocidio palestino como el presidente Joe Biden y el jefe de Gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, no solo se felicitan por la quiebra del régimen sirio, sino que reivindicán su protagonismo en ella. Mientras se hace creer al público que el asunto está relacionado con algún tipo de revuelta popular, Biden explica que la caída de El Asad ha sido posible «directamente» gracias «al apoyo incondicional de Estados Unidos». «Resultado directo de los golpes que hemos infligido a Irán y Hezbolá», ha dicho Netanyahu, que celebra el «histórico día» mientras su tropas se internan en Siria desde los altos del Golán. Hadi al-Bahra, uno de los líderes de la oposición al régimen, confirma la tesis de Netanyahu: los rusos están entretenidos en Ucrania y «por causa de la guerra del Líbano y de la disminución de las fuerzas de Hezbolá, el régimen de El Asad tenía menos apoyos», dice. Otro comandante rebelde citado por la prensa israelí va incluso más lejos y augura una «buena coexistencia y armonía» con el Estado sionista: [«A diferencia de Hezbolá que dice querer liberar Jerusalén y los Altos del Golán, nunca hemos hecho comentarios críticos contra Israel», afirma.](#) Mucho de todo esto es delirio, un delirio que intenta dar forma racional al imperio del caos que todas esas fuerzas animan y para el que solo la loca carrera de Israel parece tener un verdadero guion.

En una observación más concreta, la quiebra de Siria supone una derrota sin paliativos para el llamado «eje de la resistencia» que une a Irán, milicias chitas como Hezbolá, los bravos yemenitas, formaciones de Irak, y Hamás, pero sobre todo supone un revés para la sufrida resistencia palestina. Las rutas de aprovisionamiento de Hezbolá han sido cortadas y el propio Irán deja de tener acceso terrestre al Líbano a través de Siria, con lo que se rompe un vínculo geográfico fundamental para la ayuda a Palestina.

En una lectura más general, la caída del régimen sirio confirma que todos los frentes bélicos están intercomunicados. De repente, los adversarios occidentales demuestran que pueden hacer mucho daño a Moscú y a Teherán en otros frentes. La traición de Erdogan, un socio económico importante para Moscú que incluso pretendió mediar en Ucrania, ha hecho saltar por los aires el frágil entendimiento triangular tejido por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, entre Rusia, Irán y Turquía sobre Siria. [La prensa de Kiev alardea abiertamente de la ayuda prestada a los salafistas sirios.](#) Vistos como el arranque de algo con posible horizonte alternativo en la reciente cumbre de Kazán, los BRICS+ evidencian de repente su incoherencia interna, su debilidad e incapacidad para actuar concertadamente en situaciones concretas.

Aún desconocemos la geografía del desmoronamiento en Damasco y por qué el paupérrimo

ejército no luchó. ¿Qué componendas e intrigas hubo entre los generales de El Asad? «No podemos ser más sirios que los sirios», ha dicho Putin, eludiendo toda responsabilidad de Moscú en lo que ha sido un fenomenal revés para el Kremlin, que ahora intenta salvar los muebles. Los medios rusos intentan disimular el fiasco como pueden y tienden a culpar a El Asad. Pero, al final, todo eso es irrelevante al lado de lo que supone para la masacre de palestinos actualmente en curso.

Adquieren aún mayor viabilidad los planes israelíes para la expulsión del pueblo palestino de su martirizada tierra, como en el pasado ocurrió con las etnias indias del *far west* americano. En un esclarecedor artículo escrito desde Beirut el 6 de diciembre, [el exdiplomático escocés Craig Murray](#) augura un escenario de lo más inquietante: «Las potencias suníes aceptarán la aniquilación de toda la nación palestina y la formación del Gran Israel, [a cambio de la aniquilación de las comunidades chiíes en Siria y Líbano por Israel y las fuerzas respaldadas por la OTAN, incluida Turquía](#)». La guerra contra Irán parece más cerca que nunca. También, lógicamente, el fin de los escrúpulos de los clérigos iraníes para hacerse con el arma nuclear.

[Fuente: [Ctxt](#)]

Médicos Sin Fronteras

Gaza: la vida en una trampa mortal

La guerra de Israel contra Gaza ha matado hasta ahora a más de 44.000 palestinos, herido a más de 105.000 y desplazado a aproximadamente 1,9 millones de personas, el 90% de la población, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. En respuesta a los terribles ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, las fuerzas israelíes [están aplastando a toda una población](#) bajo las bombas y los escombros.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido testigo de 14 meses de repetidos ataques contra civiles, del desmantelamiento de infraestructuras civiles esenciales, incluidas instalaciones sanitarias, y de la denegación sistemática de asistencia humanitaria, lo que parece apuntalar la campaña de Israel para deshacer el tejido social de Gaza. En los 12 primeros meses de hostilidades, el propio personal de MSF ha sufrido 41 ataques e incidentes violentos, incluidos ataques aéreos, bombardeos e incursiones violentas en instalaciones sanitarias, fuego directo contra sus refugios y convoyes y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas israelíes. Ocho colegas de MSF y muchos de sus familiares han muerto, y muchos más han resultado heridos. Tanto el personal médico como los pacientes se han visto obligados a evacuar urgentemente las instalaciones sanitarias en 17 ocasiones distintas, a menudo corriendo literalmente por sus vidas. MSF sólo ha podido reanudar las actividades en tres instalaciones.

A lo largo de la ofensiva, las fuerzas israelíes han bloqueado la entrada en la Franja de artículos esenciales como alimentos, agua y suministros médicos. Han denegado, retrasado o instrumentalizado la ayuda humanitaria, permitiendo la entrada en Gaza de cantidades insignificantes de ayuda con total desprecio por las necesidades reales y el nivel de sufrimiento de la población. El último hospital oncológico que quedaba en Gaza tuvo que cerrar al quedarse sin combustible el 1 de noviembre de 2023. Los equipos de MSF tuvieron que realizar intervenciones quirúrgicas sin anestesia suficiente. Las consecuencias de estos impedimentos se hacen aún más perjudiciales debido a la singularidad de una guerra que se libra en una zona asediada de la que nadie puede escapar.

La violencia desatada por las fuerzas israelíes ha causado daños físicos y psíquicos a una escala que desbordaría cualquier sistema sanitario en funcionamiento, por no hablar de uno ya diezmado por una ofensiva aplastante y un bloqueo que dura ya 17 años. Desde mediados de octubre, sólo 17 de los 36 hospitales de Gaza funcionan parcialmente, aunque los incesantes combates a menudo los ponen fuera del alcance de quienes los necesitan. Los otros 19 hospitales están fuera de servicio. Las autoridades israelíes dificultan enormemente la búsqueda de asistencia fuera de la Franja. Entre el cierre del paso fronterizo de Rafah, a principios de mayo de 2024, y septiembre de 2024, sólo se autorizó la evacuación de 229 pacientes, lo que equivale al 1,6% de quienes lo necesitaban en ese momento.

El desplazamiento forzoso ha empujado a las personas a unas condiciones de vida insostenibles: se hacían en tiendas de campaña improvisadas hechas con retales y sufren privación de agua y alimentos. Las principales morbilidades observadas por los equipos de MSF que apoyan la

atención primaria, como enfermedades de la piel, infecciones de las vías respiratorias superiores y diarrea, son indicativas de las pésimas condiciones higiénicas. Los planes de vacunación se han interrumpido y el riesgo de brotes es real. La situación no ha hecho más que empeorar con la llegada del invierno.

Incluso si la ofensiva terminara hoy, su impacto a largo plazo no tendría precedentes, dada la magnitud de la destrucción y los retos únicos que plantea la organización de la asistencia sanitaria en Gaza. Hay que reconstruir toda una sociedad y, al mismo tiempo, hacer frente a un asombroso número de heridos de guerra que pueden necesitar años de rehabilitación y correr el riesgo de infecciones, amputaciones y discapacidad permanente. Los traumas mentales causados por la violencia, la pérdida de familiares y hogares, las penosas condiciones de vida y los repetidos desplazamientos, representan un problema masivo y urgente, que abarcará generaciones.

El impacto medioambiental de la guerra agravará aún más los riesgos sanitarios a largo plazo. Según *The Lancet*, el número de muertes excesivas debidas a la guerra, incluidas las debidas al colapso de la asistencia sanitaria, la desnutrición y los brotes de enfermedades, puede estimarse, de forma conservadora, en 186.000 (incluidas 148.000 muertes indirectas). Luchando por sobrevivir, atrapados en una zona de guerra sin espacio seguro ni salida a la vista, los habitantes de Gaza viven en una trampa mortal.

En el norte de la Franja en particular, la reciente ofensiva militar es una clara ilustración de la brutal guerra que las fuerzas israelíes están librando en Gaza, y estamos siendo testigos de claros signos de limpieza étnica a medida que la vida palestina es arrasada de la zona. Nuestras observaciones de primera mano de la catástrofe médica y humanitaria infligida a Gaza coinciden con las descripciones proporcionadas por un número cada vez mayor de expertos jurídicos y organizaciones que concluyen que en Gaza se está produciendo un genocidio. Aunque no tenemos autoridad legal para establecer la intencionalidad, los signos de limpieza étnica y la devastación en curso –incluidos los asesinatos en masa, las graves lesiones físicas y mentales, los desplazamientos forzados y las condiciones de vida imposibles para los palestinos bajo el asedio y los bombardeos– son innegables.

Los ataques contra civiles, el desmantelamiento del sistema sanitario, [la privación de alimentos](#), agua y suministros son una forma de castigo colectivo infligido por las autoridades israelíes a la población de Gaza. Esto debe terminar ya.

? Debe aplicarse un alto el fuego inmediato y duradero. Debe cesar la destrucción total de la vida palestina en Gaza y de todas las cosas que conforman el tejido mismo de la sociedad.

? Debe cesar el vergonzoso y extremo racionamiento de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Israel debe poner fin a su asedio a Gaza y abrir las fronteras terrestres críticas, incluido el paso fronterizo de Rafah, para garantizar el suministro de ayuda humanitaria y médica a gran escala. Israel debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la ayuda que se necesita urgentemente llega a quienes la necesitan, lo que incluye poner fin a las acciones que merman la capacidad de hacer cumplir la ley en la Franja de Gaza.

? Israel debe revocar su reciente ley que prohíbe la UNRWA y garantizar que la agencia pueda continuar con su papel vital de apoyo a la población. Deben reconstruirse y ampliarse las

capacidades locales restantes en Gaza.

? Debe ponerse fin al desplazamiento forzoso. Debe permitirse a la población de Gaza desplazarse libremente, incluso regresar a sus lugares de origen, y restablecer sus capacidades de subsistencia. Las autoridades israelíes deben facilitar la evacuación de quienes necesiten atención especializada o de quienes busquen refugio fuera de Gaza para marcharse, garantizando al mismo tiempo su derecho a un retorno seguro, voluntario y digno.

? En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel que aplicara medidas provisionales para [impedir actos genocidas en Gaza](#). A pesar de ello, no se ha adoptado ninguna medida al respecto. Las observaciones de primera mano de MSF coinciden con las de un número cada vez mayor de expertos jurídicos y organizaciones, que concluyen que en Gaza se están produciendo actos de limpieza étnica y genocidio. MSF pide a los Estados, en particular a los aliados más cercanos de Israel, que pongan fin a su apoyo incondicional a Israel y cumplan con su obligación de prevenir el genocidio en Gaza. Los Estados deben aprovechar su influencia para aliviar el sufrimiento de la población y permitir un aumento masivo de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

? MSF renueva su llamamiento para que se lleve a cabo una investigación independiente que determine los hechos y las responsabilidades detrás de los repetidos ataques contra los equipos e instalaciones de MSF, en los que murieron ocho compañeros de MSF y muchos de sus familiares. Este llamamiento se extiende también a la investigación de otros ataques contra trabajadores humanitarios y personal médico.

[Resumen ejecutivo del informe *Gaza: la vida en una trampa mortal*, publicado por Médicos Sin Fronteras, que puede leerse [aquí](#). Fuente: [Ctxt](#)]

Illy Pe'ery

«La mayor cantidad y lo más rápido posible»: colonos israelíes buscan tierras en Siria y Líbano

Pocas horas después de la caída del régimen de Bashar el Asad, las fuerzas israelíes ya estaban entrando en territorio sirio para conquistar esa vertiente del monte Hermón/Jabal A-Shaykh y la zona de contención entre Siria y los Altos del Golán, ocupados por Israel desde hace más de medio siglo. Pero el ejército no fue el único que reaccionó con rapidez; también lo hizo el movimiento de colonos israelíes.

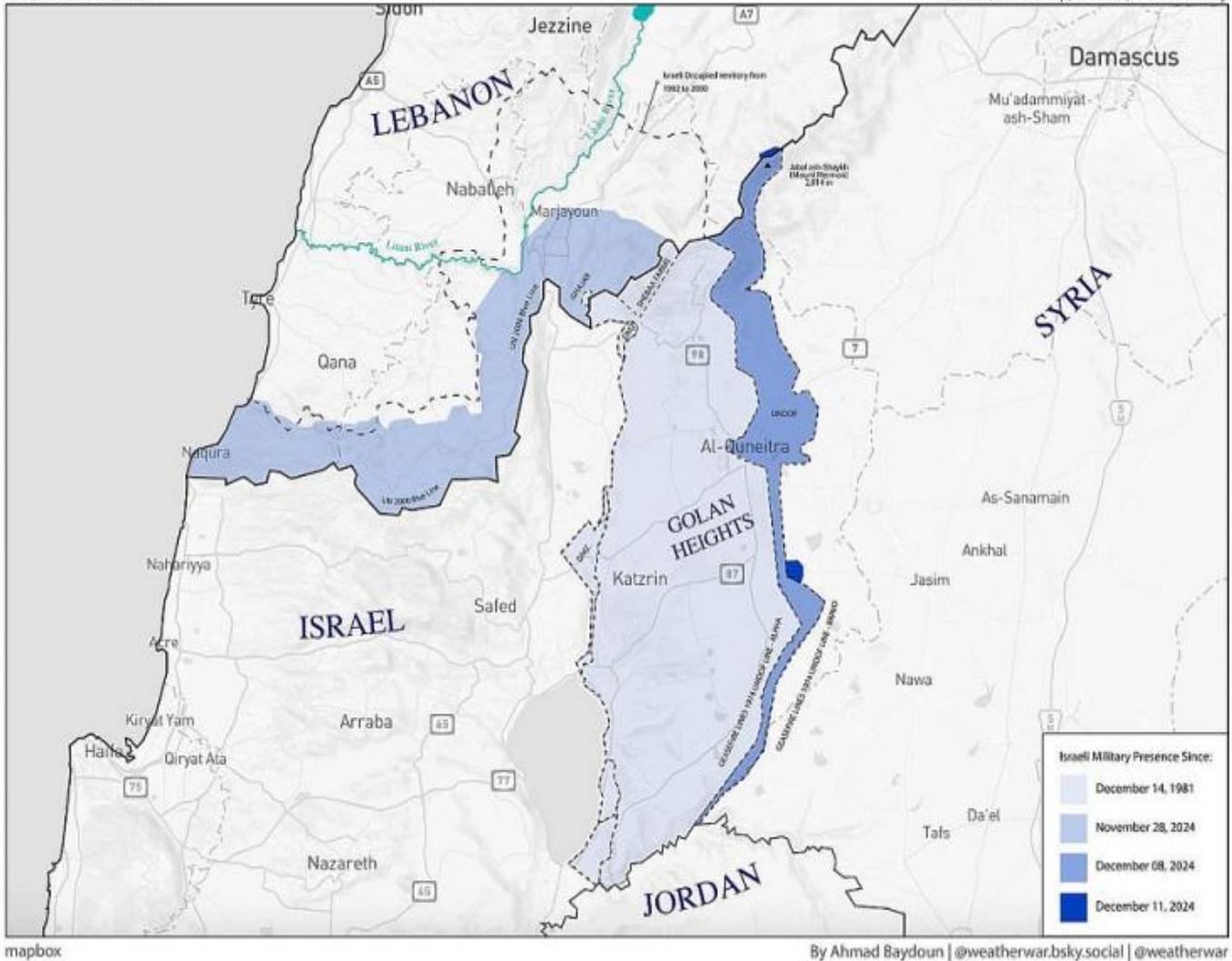
«Tenemos que conquistar y destruir. Tanto como sea posible y lo más rápido posible», escribió un miembro de Uri Tsafon –grupo fundado a principios de este año para promover la colonización israelí del sur de Líbano– en el grupo de WhatsApp de la organización. «Tenemos que comprobar si, de acuerdo con las nuevas leyes sirias, se permite a los israelíes invertir en bienes raíces y empezar a comprar tierras allí», escribió otro miembro. En otro grupo de WhatsApp de colonos, los miembros compartían mapas de Siria e intentaban identificar posibles zonas de asentamiento.

El movimiento Nachala –dirigido por Daniella Weiss, que en los últimos meses ha encabezado los esfuerzos para reasentar Gaza– expresó una opinión similar en un post de Facebook: «¡Quien siga pensando que es posible dejar nuestro destino en manos de un agente extranjero, renuncia a la seguridad de Israel! El asentamiento judío es lo único que aportará estabilidad regional y seguridad al Estado de Israel, junto con una economía estable, resistencia nacional y disuasión». «En Gaza, en Líbano, en la totalidad de los Altos del Golán, incluida la ‘meseta Siria’, y en todo el monte Hermón», añadía, y adjuntaba un mapa bíblico titulado «Las fronteras de Abraham», en el que el territorio de Israel incluye la totalidad de Líbano, así como la mayor parte de Siria e Irak.

No se trata de mera palabrería; estos grupos van muy en serio. Nachala ya ha [trazado los lugares](#) donde planea construir nuevos asentamientos judíos en la Franja de Gaza, y afirma que más de setecientas familias se han comprometido a trasladarse cuando surja la oportunidad (la propia Daniella Weiss [ya ha estado en Gaza](#) con escolta militar para explorar posibles ubicaciones). Y la semana pasada, Uri Tsafon, que lleva un año esperando su momento, hizo [su primer intento](#) de apropiación de tierras en el sur de Líbano –donde todavía hay soldados israelíes tras el acuerdo de alto el fuego–.

December 12th, 2024

Source: liveuamap, AJ Labs, Israeli Military



Mapa que muestra las ubicaciones aproximadas de la expansión militar de Israel en Líbano y Siria, donde el azul más oscuro indica los avances más recientes, creado utilizando datos de imágenes por satélite, geolocalización y declaraciones de militares israelíes (Ahmad Baydoun)

El 5 de diciembre, el fundador del grupo, Amos Azaria, profesor de informática en la Universidad Ariel de la Cisjordania ocupada, cruzó la frontera con Líbano junto con seis familias en un intento de establecer un puesto avanzado. Llegaron a la zona de Maroun A-Ras, adentrándose unos dos kilómetros en territorio libanés, y plantaron unos cedros en memoria de un soldado israelí caído en combate en Líbano hace dos meses. Pasaron varias horas antes de que el ejército israelí los desalojara y los obligara a regresar a Israel. (En respuesta a la petición de la revista *The Hottest Place in Hell* de comentar este incidente, la policía israelí dijo que, según el ejército, ningún civil israelí había cruzado al Líbano).

Incluso en junio, en la «Primera Conferencia sobre Líbano» de Uri Tsafon, celebrada por Zoom, los miembros ya hablaban de la colonización de Siria. El Dr. Hagi Ben Artzi, cuñado de Benjamin Netanyahu y miembro del grupo, dijo a los asistentes que al pueblo judío le prometieron las fronteras de Israel en tiempos bíblicos: «No queremos ni un metro más allá del río Éufrates.

Somos humildes. [Pero] lo que se nos prometió, debemos conquistarlo».

Y con la caída del régimen de El Asad y el avance de las tropas israelíes en territorio sirio, estaban deseosos de aprovechar la oportunidad. «Pedimos al gobierno que capture la mayor cantidad posible de lo que era territorio sirio», dijo Azaria a la revista israelí *The Hottest Place in Hell*. «Los rebeldes son exactamente [lo mismo que] Hamás. Puede que ahora parezcan amigables, pero en definitiva son suníes que encontrarán al enemigo común, que somos nosotros. Tenemos que hacer todo lo que podamos ahora, mientras sea posible».

El 11 de diciembre, un pequeño grupo de colonos israelíes afirmó haber cruzado a una zona de territorio sirio ahora bajo control militar israelí, donde se grabaron rezando. Preguntado por el incidente, el ejército israelí dijo que «no se tiene constancia de que las personas en cuestión hayan cruzado la frontera», y que el vídeo «está siendo examinado por las autoridades competentes».

«Lo más importante es estar al otro lado de la valla»

[Uri Tsafon](#) toma su nombre de un versículo bíblico que llama a «Despertar, oh norte». Su sitio web describe el Líbano como «un Estado que en realidad no existe ni funciona», y afirma que la verdadera extensión de la Galilea septentrional de Israel llega hasta el río Litani, en el Líbano, al que las fuerzas israelíes habían llegado justo cuando entró en vigor el reciente acuerdo de alto el fuego, y durante cuyo proceso desplazaron por la fuerza a decenas de miles de residentes de aldeas del sur del Líbano.

«Empezamos con actividades más tranquilas», declaró Azaria a *The Hottest Place in Hell*. «Hicimos un llamamiento al gobierno y al ejército para ir a la guerra en el norte... [y] nos dirigimos al monte Meron, bajo la base de la fuerza aérea, e hicimos reconocimientos hacia el Líbano».

Sin embargo, el intento de la semana pasada de establecer un puesto avanzado en el sur del Líbano marcó la entrada del grupo en una nueva fase de actividad que pretende forzar la mano del gobierno. «El objetivo era y sigue siendo establecer un asentamiento en Líbano», declaró Azaria. «No estamos esperando a que el Estado nos diga: 'Venid'. Estamos trabajando para conseguirlo».

Según Azaria, el movimiento cuenta ya con miles de miembros «que están muy entusiasmados e interesados» en sus actividades. La acción de la semana pasada no se anunció con antelación, porque «[el ejército] nos habría bloqueado y no nos habría dejado entrar». Y lo cierto es que no encontraron mucha resistencia:

«La puerta estaba abierta y entramos sin más», dijo.

A Azaria no le preocupa que no lo consiguieran; de hecho, considera su desalojo como el primer paso de un plan de acción a más largo plazo que ha caracterizado al movimiento de colonos desde su creación hace más de medio siglo.

«La primera vez que nos desalojan, nos vamos», explica. «La segunda vez, nos quedamos más tiempo. La [tercera] vez, nos quedamos toda la noche. Así seguiremos hasta que haya un asentamiento. Al principio, [el ejército] lo derriba y luego llegan a un acuerdo de que habrá un

asentamiento y ya está. Mientras tanto, empezamos a trabajar en el siguiente asentamiento. Puede que no sea realista que el Estado construya un asentamiento [por decisión propia], pero eso no significa que el Estado tenga que demoler una comunidad que hemos construido nosotros».

«En la primera fase nos asentaremos donde podamos», continuó. «No hay interés en una ubicación concreta; lo más importante es estar al otro lado de la valla. Tenemos que luchar contra el tabú de la frontera que establecieron Francia e Inglaterra hace cien años. Viviremos en la frontera libanesa, si Dios quiere, y si estamos allí, la frontera se desplazará hacia el norte y el ejército la vigilará». «Igual que el ejército lucha tanto en Gaza como en el norte, ocurre lo mismo con los asentamientos: tenemos que asentarnos en todas partes», prosiguió Azaria. «En Gaza, está Nachala y varios organismos [que promueven los asentamientos]. En el norte, somos el único movimiento que realmente se ocupa de esto ahora mismo. Nachala lo hace más con permisos. Nosotros operamos más como ‘punta de lanza’».

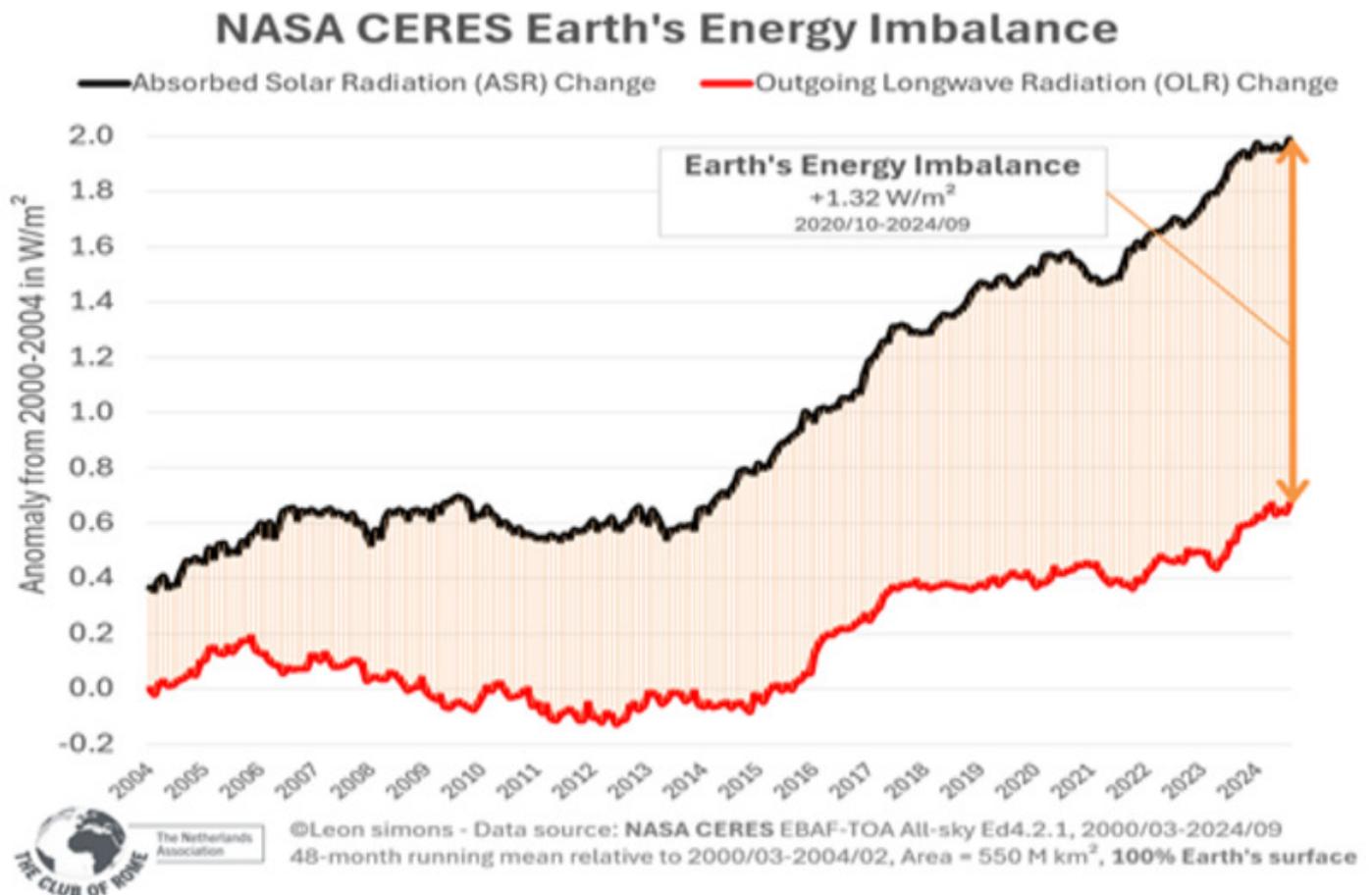
Y Azaria confía en que el apoyo llegue de la clase política. «Cuando fundé [Uri Tsafon], la gente no hablaba en absoluto de colonizar el sur del Líbano», explicó. «Estamos cambiando el discurso. Estamos en contacto con miembros de la Knéset. Supongo que, al igual que les llevó tiempo aceptar hablar de asentamientos en Gaza, también les llevará tiempo empezar a hablar de asentamientos en Líbano. Ariel Kallner [diputado del Likud] mencionó algo. También lo hizo [el diputado de Otzma Yehudit] Limor Son Har-Melech. Poco a poco, cada vez más gente se atreve a hablar de ello».

[Fuente: [Ctxt](#), original de [+972 Magazine](#), fruto de una colaboración con *The Hottest Place in Hell*. Trad. de Paloma Farré]

Juan Bordera, Antonio Turiel, Fernando Valladares y Alejandro Pedregal

El peligroso y conveniente optimismo de las élites

Las personas que seguimos con desasosiego la situación climática del planeta Tierra sabemos que, en el mejor de los casos, el punto de no retorno está muy cerca. Es física básica, en realidad. [El balance radiativo de la Tierra está aumentando exponencialmente por las emisiones de gases de efecto invernadero y por el deshielo creciente](#), dos fenómenos que se realimentan.



Se acaba de registrar el récord de extensión mínima de hielo tanto en el Ártico como en el hielo marino global para estas fechas. Mientras, James Hansen, uno de los científicos del clima más respetados por su trabajo, [advierte de que los modelos han estado infraestimando la situación](#) por no tener en cuenta el efecto de los aerosoles –que estamos retirando– en la temperatura oceánica. Pero saber todo esto no nos desanima; al contrario, nos empuja para actuar aún con más convicción. Quizá porque sabemos que esto no va de ganar o perder, sino de cuánto de lo uno y de lo otro. De qué porcentaje podemos salvar. No es una disyuntiva binaria *made in Hollywood* en la que, o salvamos todo lo construido, o lo perdemos todo al final de la película. Lo que nos desanima es más bien el exceso de optimismo que se desprende de la mayoría de las propuestas y análisis de la situación, que convenientemente omiten los detalles anteriores, generando una parálisis tranquilizante que lo acaba inundando todo y a (casi) todos.

Decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que la humanidad estaba abriendo las

puertas del infierno con la dejadez respecto al caos climático. Y [en la periferia de la ciudad de Valencia](#) acabamos de comprobar cuánta razón tenía. Sintiéndonlo mucho, las posibilidades de más eventos catastróficos van a aumentar en los próximos años, especialmente en lugares como [el mar Mediterráneo](#), que está 4 °C por encima de la temperatura esperable para esta época del año.

Los patrones de estaciones, de corrientes atmosféricas y marinas, se están desestabilizando, y seguirán haciéndolo mientras nos mintamos sobre las dos cosas más cruciales de este reto planetario: la dimensión del problema y las “soluciones” que hemos ingeniado para frenarlo. Con esas mentiras nos medicamos la ansiedad creciente y, sobre todo, toleramos mejor el no estar actuando en consecuencia.

Además de enfrentar a negacionistas de la realidad y de la ciencia más elemental, también tenemos que enfrentar que una buena parte de la gente, que comprende el caos climático que ya hemos generado, prefiere mentirse antes de asumir que muy probablemente no haya solución de tipo técnico. Y es que eso les deja desnudos ante una realidad dura de tragar: [no hay solución dentro de la búsqueda de crecimiento](#) perpetuo del mismo sistema capitalista que generó el problema.

Cuando la élite empieza a venderte optimismo, tiembla

Un caso flagrante de “optimismo de la conveniencia” nos lo ofrece Hannah Ritchie, autora de *Not the End of the World* y divulgadora de referencia de Bill Gates y Elon Musk, que la financian abiertamente, como [ella misma reconoce](#) en esta entrevista en la que la periodista Rachel Donald la desmonta punto por punto. Su trabajo ofrece todo un despliegue de “soluciones” que, según ella, ya existen, como contrapeso al paradigma emergente del Decrecimiento, que cuestiona insistentemente calificándolo de [“innecesario: no solucionará nuestros problemas”](#).

Recientemente se ha viralizado [un vídeo breve](#) en el que Ritchie condensa parte de su conveniente discurso: como ha habido soluciones técnicas en el pasado a problemas graves, afirma, seguro que las habrá por siempre jamás. Añádanle unas cuantas tergiversaciones aderezadas con medias verdades sobre logros en descarbonización y desacoplamiento entre emisiones y crecimiento económico, sin mencionar que los pocos países que algo han logrado lo han hecho deslocalizando sus industrias mientras las emisiones globales siguen creciendo, y ya está. Ya tienen su receta optimista para todos los públicos que puede venderse en cualquier medio respetable sin ser cuestionada.

Sus estadísticas son toda una fantasía: se apoyan sobre períodos muy extensos sin tener en cuenta que ha sido precisamente en los últimos 20 años cuando las cosas han empezado a torcerse más seriamente.

Lo más tramposo del discurso de Ritchie es que, si se critica su sesgo en la presentación de los datos, siempre responde igual: ¿pero no has visto el progreso que ha habido en el siglo XX? ¿Progreso? Será para unos pocos... entre los que están aquellos que la financian. Progreso alimentado por un consumo acelerado de recursos, con los combustibles fósiles en el centro, y gestionado desde la extrema desigualdad sobre el trabajo barato y el expolio material de las periferias geográficas y sociales. Seguramente sin la avaricia desmedida de unos pocos, ese “progreso” habría sido otra cosa, bastante mejor.

Otra de las características de su discurso es compartida con los negacionistas climáticos: el *cherry picking*, o escoger los datos que favorecen su posición mientras ignora aquellos que la cuestionan y hasta la desmontan por completo. Algunos de ellos con implicaciones muy graves. Por ejemplo, muestra lo ventajoso en ocupación del territorio y bajas emisiones de la energía nuclear, pero olvida el problema de gestionar miles de toneladas de residuos radiactivos de alta actividad durante miles de años o que la extracción de uranio está cayendo a un ritmo acelerado por agotamiento geológico (un 23% desde 2016).

En realidad, el vídeo entero está plagado de puntos ciegos deliberados: los impactos ambientales del coche eléctrico van más allá de las emisiones de CO₂; los recursos que hay en el subsuelo de materiales críticos para la transición no son las reservas (lo verdaderamente extraíble), y estas no equivalen a la producción que, por limitaciones técnicas y físicas, se puede extraer cada año; y así podríamos seguir y seguir, pero un texto como este tiene que tener límites también.

Lo verdaderamente peligroso del discurso de Ritchie es que es una banalización de una discusión técnica compleja, seria e intensa que desde hace años mantienen académicos de especializaciones muy diversas, desde la geología, la física o la química, hasta la economía o la sociología. Un debate con muchas aristas que, hasta ahora, lo único que ha dejado claro es que no hay ni se va a dar ninguna transición rápida y económicamente viable. Todo apunta que lo que va a suceder es más bien todo lo contrario: un cúmulo de dificultades y desastres de todo orden que nos exponen ante el mayor reto de nuestra historia, en el que, literalmente, nos va la vida. Ante una situación así, más peligrosa aún que la inacción es la creencia de que se va en la dirección correcta cuando se va en la contraria.

En realidad, el discurso de Ritchie –y de tantos otros– quiere proyectar la imagen de un control ficticio, una fantasía de datos que, puestos en línea, demostrarían que todo va bien bajo el capitalismo global, con el fin último de no cuestionar el mismo sistema que nos está llevando al matadero. Aún hay vidas que se pueden sacrificar antes de aceptar que este orden debe acabarse con una transición planificada y lo más democrática posible.

Una última pista definitiva para los que aún queden algo despistados por su ilusionante discurso: la plataforma que difunde su vídeo esta vez es Big Think, un canal de difusión de contenidos financiado nada más y nada menos que por [Peter Thiel](#), uno de los seres más peligrosos que pueblan este planeta que se desangra, aquí tienen un perfil más amplio de este [capitalista militante](#). Pero da igual que sea evidente su *sesgo de élite*. Mucha gente está viralizando su vídeo. El virus del optimismo bien financiado es lo que tiene: hasta a nosotros nos encantaría creer que Hannah Ritchie y sus seguidores tienen razón.

El problema es que, si no tienen razón –que no la tienen–, seguir ese camino asfaltado por los

futuristas, que hace un siglo creerían en el progreso sin fin y en este siglo creen en la transición sin fisuras, nos aparta la mirada de soluciones más simples, pero más difíciles de ver y de asumir porque no tienen apenas luces de neón que las anuncien. Soluciones que van, además, en contra de lo que mucha gente quiere creer para poder dormir mejor por las noches. Temporalmente, eso sí. Hasta que llegue el siguiente desastre climático, o el siguiente conflicto bélico en busca de esos recursos que, para los optimistas, nos siguen sobrando, aunque por lo que sea los países nos seguimos pegando por ellos sin cuartel. Una transición es posible e imprescindible, pero dentro de unos límites materiales reales que necesitamos definir con precisión para no equivocarnos el rumbo.

[Fuente: [Ctxt](#)]

Rebecca John

Las grandes petroleras dijeron hace setenta años que las emisiones de combustibles fósiles podrían afectar a la «civilización»

El 6 de abril de 1955 era un perfecto día de primavera en Los Ángeles. En el centro, los cielos estaban inusualmente libres de esmog cuando Lauren B. Hitchcock, presidente de la Air Pollution Foundation, subía las escaleras de mármol del exclusivo California Club para reunirse con algunos de los hombres de negocios más poderosos de la costa oeste. En los salones con paneles de roble del club le esperaban altos ejecutivos de las principales compañías petroleras de California. Eran los principales financiadores de la Fundación contra la Contaminación Atmosférica, y no estaban contentos.

Como presidente de la fundación, el trabajo de Hitchcock consistía en supervisar un programa de investigación destinado a resolver la creciente crisis de contaminación atmosférica del sur de California, una crisis que había provocado protestas masivas en todo el condado de Los Ángeles sólo unos meses antes. Decidido a abordar todas las posibles fuentes de esmog, Hitchcock estaba investigando las numerosas refinerías de petróleo y gas de la región. Además, [exigía públicamente medidas](#) para reducir la contaminación atmosférica en todo el estado, lo que enfureció a los miembros del grupo de presión más antiguo de la industria, la [Western States Petroleum Association \(WSPA\)](#), entonces conocida como Western Oil and Gas Association (WOGA). Varias semanas antes, la fundación también había publicado un informe que contenía la advertencia bomba de que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de los combustibles fósiles podrían tener consecuencias considerables a largo plazo para la «[civilización](#)». Disgustados, los altos dirigentes de la WSPA convocaron a Hitchcock al California Club, donde le reprendieron, explicándole en términos inequívocos lo que esperaban exactamente a cambio de sus cuantiosas contribuciones financieras.

Durante el almuerzo, los petroleros de la WSPA criticaron a Hitchcock por apoyar los controles de contaminación en toda California, por llamar la «[atención](#)» sobre la contaminación de las refinerías y por llevar a cabo «un programa de investigación [demasiado amplio](#)». En su lugar, le dijeron que habían creado la Fundación contra la Contaminación Atmosférica para que fuera «[protectora](#)», que Hitchcock debía actuar como «[director de investigación de la industria petrolera](#)» y que la fundación debía publicar «[conclusiones que fueran aceptadas como imparciales](#)» cuando las conclusiones de la industria petrolera no se consideraran dignas de confianza.

Este franco intercambio, relatado en detalle por Hitchcock en un memorándum nunca antes visto, desenmascara las motivaciones estratégicas que subyacen al patrocinio de la investigación sobre la contaminación atmosférica por parte de las Big Oil. Junto con docenas de otros documentos obtenidos recientemente, el memorando muestra que la década de 1950 en Los Ángeles fue el punto de partida de una táctica que desde entonces se ha convertido en un elemento clave del manual de relaciones públicas de la industria petrolera: la financiación de un grupo de fachada de [la comunidad](#) para patrocinar y dar publicidad a la investigación destinada a minimizar o negar los efectos nocivos de la quema de combustibles fósiles.

Tras la intervención de Big Oil, los informes de la Air Pollution Foundation se referían al CO2 como «inocuo». Desde la década de 1950, las empresas petroleras y de gas han utilizado repetidamente [grupos de fachada](#) para influir en la opinión pública, bloquear la regulación del aire limpio y paralizar la acción climática. Esta táctica engañosa, arraigada en la historia de California, es uno de los principales focos de [los litigios climáticos](#) que actualmente avanzan por los tribunales del estado.

Irónicamente, esta estrategia, diseñada para proteger a los productores de petróleo y gas de los controles locales de contaminación atmosférica, llevó a los miembros de la WSPA a ser informados en 1954 de un peligro potencial mucho mayor derivado de sus operaciones: el cambio climático global.

Este mes, cuando se cumplen setenta años desde que los investigadores advirtieron a las grandes petroleras de los riesgos del cambio climático, el dióxido de carbono atmosférico es un 50% más alto que antes de la Revolución Industrial. Las olas de calor que baten récords, las tormentas violentamente destructivas, los incendios forestales, las sequías y las inundaciones están aumentando debido a los efectos del cambio climático inducido por los gases de efecto invernadero. Sin embargo, en reuniones celebradas a puerta cerrada a lo largo de varias décadas, los ejecutivos del sector del petróleo y el gas han decidido sistemáticamente negar, descartar o restar importancia al riesgo de quemar combustibles fósiles para proteger su negocio, al igual que los petroleros de la WSPA en la década de 1950. Nuevas y convincentes pruebas demuestran que este patrón de comportamiento ya estaba grabado en el ADN de la industria en 1955 y persiste en la actualidad.

Un «asedio a la contaminación atmosférica»

«Los indignados ciudadanos de Los Ángeles siguen sufriendo por el smog», clamaba un titular de *Los Angeles Times* en diciembre de 1952. Ese otoño el sur de California había experimentado su [«asedio más prolongado a la contaminación atmosférica»](#), sufriendo cinco semanas seguidas de smog que llevaron la ira pública al [«punto de ebullición»](#). Espeso, acre e irritante para los ojos y los pulmones, el smog había asolado el antaño idílico rincón de Los Ángeles en el suroeste de EE.UU. desde 1943, cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, la repentina llegada de un manto de humos nocivos se había confundido con [un ataque de gas enemigo](#). Al ocultar el sol, [el smog](#) reducía la visibilidad a menos de unas manzanas, provocaba accidentes de tráfico mortales, paralizaba producciones cinematográficas, confinaba a los niños en casa y cancelaba acontecimientos deportivos. En los días de niebla tóxica, las salas de urgencias registraron un mayor número de muertes por enfermedades cardíacas o pulmonares, y aumentaron las tasas de asma y bronquitis. El smog también dañó propiedades y arruinó

cosechas.

Los airados ciudadanos no tardaron en exigir que se tomaran medidas, señalando los gases de chimenea muy visibles que emitían a diario las numerosas [refinerías](#) de petróleo del condado de Los Ángeles. Para no culpar a la industria, la WSPA creó en 1947 un [Comité de Humos](#) presidido por William L. Stewart, Jr. vicepresidente de Union Oil (ahora Chevron). A través del comité, la WSPA patrocinó estudios sobre el esmog en el Stanford Research Institute (SRI), restando importancia al papel de la industria.

Sin embargo, en 1950, el químico de Caltech Arie Haagen-Smit había identificado la [contaminación por hidrocarburos](#) procedente de «[campos petrolíferos, refinerías, gasolineras, automóviles, etc.](#)» como las principales fuentes de esmog. Basándose en esta nueva ciencia, las autoridades del condado elaboraron planes para imponer controles de la contaminación. En respuesta, los líderes de la industria petrolera intensificaron su contraofensiva antirreglamentaria, tachando las conclusiones de Haagen-Smit de «[especulación no demostrada](#)» y citando su propia investigación del SRI para afirmar que las sustancias responsables del esmog «no habían sido identificadas positivamente». [WSPA](#), ahora con la ayuda de la asociación nacional de la industria petrolera, el Instituto Americano del Petróleo (API), [abogó](#) por retrasar la acción reguladora, y recomendó en su lugar ampliar la investigación sobre las causas del esmog.

Mientras tanto, la crisis del esmog se intensificaba. Tomando cartas en el asunto, un grupo de ciudadanos independientes de Los Ángeles crearon el [Comité del Aire Puro](#), que celebraba reuniones públicas para buscar «[soluciones legales](#)» a la contaminación atmosférica. La estrategia de las grandes petroleras de confiar en la investigación financiada por la industria del SRI para frenar la marea de mala publicidad y evitar la regulación estaba fracasando. «[¡Viene el policía!](#)», advirtió un ejecutivo de Union Oil al API en la reunión de mediados de año del grupo.

Los cimientos de la guerra contra el esmog

A partir de este campo de batalla, la WSPA creó la Fundación contra la Contaminación Atmosférica (APF). En septiembre de 1953, un relato oficial de los orígenes de la fundación afirmaba que un grupo de «[líderes cívicos](#)» anónimos se reunieron para discutir qué podían hacer para eliminar el esmog. Según esta versión oficial de los hechos, «era obvio que [se necesitaban más datos sobre la naturaleza y el origen del esmog](#) antes de poder recurrir a controles adecuados.»

Sin embargo, [el memorándum confidencial de Hitchcock](#), escrito tras la reunión del California Club de 1955, revela que altos cargos de la WSPA y ejecutivos de la industria petrolera formaban parte de este grupo de «líderes cívicos» y que, de hecho, el APF pretendía ser un vehículo para publicar conclusiones supuestamente «[imparciales](#)».

Al filtrar la información «[relativa a la naturaleza y el origen de la](#) niebla tóxica» a través de una fundación formada por científicos reputados y por sus propios representantes, la WSPA esperaba ganarse la credibilidad pública de los enfadados residentes de Los Ángeles, paralizar la regulación y proteger los beneficios de la industria. Se trataba de una táctica que las [industrias pesadas](#) de Estados Unidos habían utilizado desde los años treinta para luchar contra las reformas de la salud y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, la industria del petróleo y el gas, al encontrarse directamente en la línea de fuego de la regulación, reutilizó la misma técnica

para sus propios fines. Al principio, todo parecía ir según lo previsto.

«Fundación para la lucha contra el esmog», titulaba el 7 de noviembre de 1953 el *L.A. Times*, anunciando el [lanzamiento oficial](#) de la APF. El periódico informaba de que más de «75 empresarios, industriales, líderes cívicos, eclesiásticos y funcionarios del gobierno» habían anunciado un programa [«comunitario de largo alcance»](#) para hacer frente a la crisis del esmog. Una lista de los fideicomisarios del APF revelaba una muestra representativa de las figuras más influyentes de la ciudad, incluidos los directores de las instituciones académicas más prestigiosas del sur de California, magnates del comercio minorista, fundadores de los principales bancos del estado y los presidentes de [SoCalGas](#), [Southern California Edison](#) y [Union Oil](#) (adquirida por Chevron en 2005).

Según la «Declaración de Política» de la fundación, estos miembros del patronato que representaban a «industrias contaminantes» tenían la responsabilidad particular de asegurarse de que serían [«partes de todos los hechos y pruebas»](#) que salieran a la luz sobre el problema» para que ellos y sus colegas de la industria de los combustibles fósiles pudieran «continuar con sus mejores esfuerzos hacia la [reducción de la contaminación atmosférica.](#)» En realidad, estos esfuerzos se quedarían cortos pero, por el momento, el prototipo de grupo de fachada de la WSPA recibió una calurosa bienvenida en la prensa, que anunció el APF como un [«Grupo de Ciudadanos.»](#)

Seguir el dinero

Entre bastidores, los documentos muestran que la industria del petróleo y el gas era con diferencia el [mayor financiador](#) del APF, con aportaciones anuales de unos [200.000 dólares](#) (equivalentes a 2,4 millones de dólares actuales). En 1955, [las «compañías petroleras»](#) aportaron 200.000 dólares de los ingresos totales de la fundación, que ascendían a 348.000 dólares. A lo largo de los seis años de existencia de la fundación, los miembros de la WSPA aportaron más de un tercio de los ingresos totales de la APF, por un total de [1,3 millones de dólares](#) (unos 14 millones de dólares actuales).

Pero ¿qué empresas estaban detrás de la financiación de la APF por parte de la WSPA? Un comunicado de prensa del APF de noviembre de 1954 es el único documento conservado que revela la identidad de estas [empresas petroleras y gasistas](#). La lista incluye a [General Petroleum](#) y [Humble Oil](#) (ExxonMobil); [Richfield Oil](#) (BP); Shell; Southern California Edison; Southern California Gas Company (SoCalGas); [Sunray Oil](#) (Sunoco); [Tidewater](#) (ConocoPhillips); y [Standard Oil of California](#), the [Texas Company](#), [Union Oil](#) y [Western Gulf](#) (todas ellas ahora Chevron).

Con el dinero llegó la influencia, empezando por la elección del presidente del APF. El presidente de [Standard Oil of Indiana \(ahora BP\)](#) buscó recomendaciones en las universidades, pero fue un [fideicomisario de la APF](#) vinculado a [Standard Oil of California](#) (Chevron) quien finalmente reclutó a [Lauren B. Hitchcock](#), ingeniero químico de la Costa Este y veterano del Cuerpo de Aviación Naval de la Primera Guerra Mundial, para ocupar el cargo de presidente de la APF.

Con su historial de trabajo para la [industria química](#), Hitchcock parecía una persona segura para dirigir un grupo de fachada de las grandes petroleras. [Aprobado](#) por unanimidad por los fideicomisarios del APF, trasladó a su familia de Nueva York a Los Ángeles, donde empezó a

formular el programa de investigación del APF. Desde el inicio del mandato de Hitchcock, los representantes de la industria del petróleo y el gas estuvieron [omnipresentes](#) en [las operaciones de la fundación](#), como asesores o miembros de importantes comités de la APF. Sin embargo, a pesar de estas barreras, Hitchcock resultó ser más independiente de lo que esperaba la industria petrolera.

Mientras tanto, a medida que pasaban los meses, la crisis de contaminación atmosférica en el sur de California se agravaba. «Una multitud desborda la reunión sobre el esmog», advertía un titular del *L.A. Times* de octubre de 1954. Diez días consecutivos de esmog habían provocado protestas cívicas masivas en la región y el 20 de octubre, una multitud de 4.500 «ciudadanos cansados del esmog» asistieron a una reunión en el Auditorio Cívico de Pasadena, donde los oradores esbozaron planes para un movimiento ciudadano.

Unas semanas más tarde, el 16 de noviembre de 1954, Hitchcock dio a conocer el ambicioso [«Programa de Investigación de Doce Meses»](#) de la fundación. Presentado como [«de un alcance sin precedentes»](#), el programa se centraba en la investigación de las causas fundamentales del esmog y en el desarrollo de tecnología para reducir la contaminación procedente de los automóviles. Entre las docenas de proyectos de investigación enumerados, sólo uno se refería específicamente al estudio de las emisiones de las refinerías, a pesar de que se calcula que éstas contribuyen en [un 33%](#) a la contaminación atmosférica total de Los Ángeles.

CO2 y cambio climático

Escondido al final del «Programa de Investigación de Doce Meses», en la categoría de «Investigación Fundamental en Física, Meteorología y Química», el APF enumeraba discretamente un proyecto que conduciría a uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX: [«Estudio de los isótopos de carbono»](#).

Unos meses antes, en septiembre de 1954, el Comité de Investigación de la APF había pedido [al Caltech](#) que presentara una propuesta para estudiar el origen de los compuestos de carbono aéreos, con la esperanza de que determinara si [«los productos de la combustión de la gasolina»](#) o [«la quema de basura»](#) eran los responsables de la contaminación por carbono de Los Ángeles. Si la quema de basura resultara ser la principal fuente de contaminación por carbono de la ciudad, no se podría culpar a la industria de los combustibles fósiles del problema de la niebla tóxica.

En respuesta a la petición de la APF, el 15 de noviembre de 1954, [Samuel Epstein](#), profesor asociado de geoquímica del Caltech, presentó una propuesta de investigación en la que explicaba cómo los recientes avances científicos, aplicados a muestras de dióxido de carbono, podrían aportar más información a los investigadores sobre las fuentes de contaminación atmosférica.

Pero lo que la APF obtuvo de Epstein puede haber sido más de lo que esperaba. Además de ofrecer una posible «contribución a la solución del problema de la niebla tóxica», [la propuesta de Epstein](#) esbozaba cómo podría utilizarse el estudio de Caltech para predecir el futuro. El aumento de las concentraciones de CO2 atmosférico por la quema de combustibles fósiles podría afectar al clima de la Tierra, escribió Epstein, describiendo la [«concentración de CO2 en la atmósfera»](#) como una cuestión «de reconocida importancia para nuestra civilización». Hizo hincapié en que

«las posibles consecuencias de una concentración cambiante de CO2 en la atmósfera con referencia [al clima](#)» puede «en última instancia resultar de [considerable importancia para la civilización](#).»

Epstein propuso «una investigación exhaustiva». Para ello, un investigador del Caltech recogería [muestras atmosféricas](#) de CO2 «sobre el océano, sobre zonas montañosas y de localidades industriales similares a la cuenca de Los Ángeles».

Como ya [reveló DeSmog](#), la financiación de este proyecto por parte de la APF garantizó los primeros estudios sobre el CO2 realizados en 1955 y 1956 por Charles David Keeling, entonces un joven investigador postdoctoral en Caltech. Esta investigación allanó el camino para los reveladores hallazgos posteriores de Keeling sobre el CO2 atmosférico global, y la publicación de la icónica «Curva de Keeling», que traza cómo aumenta el nivel de CO2 atmosférico debido a los efectos de la quema de combustibles fósiles. El trabajo de Keeling, que ha sido utilizado por investigadores del clima desde [James Hansen](#), que testificó ante el Congreso en la década de 1980 sobre el calentamiento global, hasta [Michael Mann](#), creador del famoso gráfico [del «Palo de Hockey»](#) que muestra el aumento de la temperatura debido a la quema de combustibles fósiles durante la era industrial, sustenta nuestra comprensión del cambio climático provocado por el hombre.

La WSPA lo sabía

A finales de 1954, la propuesta de investigación de Caltech ascendió rápidamente por la cadena de mando de la fundación, informando a los representantes de la industria del petróleo y el gas del peligro climático potencial del CO2 en cada etapa del proceso de aprobación.

En primer lugar, el [Comité de Investigación de](#) la APF, del que formaba parte el presidente de SoCalGas, F. M. Banks, [respaldó](#) el estudio. A continuación, el [Consejo de Administración de](#) la APF, con sus representantes de [Union Oil \(Chevron\) y Southern California Edison](#), [aprobó](#) la financiación de la propuesta.

Unos meses más tarde, en marzo de 1955, la APF difundió ampliamente entre sus partidarios [la advertencia de Caltech sobre el CO2](#) en un [Primer Informe Técnico de Progreso](#), repitiendo el mensaje de que las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles podían afectar gravemente a la atmósfera. Según la declaración oficial anual del presidente Hitchcock de ese mismo año, se habían enviado a sus «[fideicomisarios](#) y [contribuyentes](#)» copias de [todos los informes de la Fundación](#) impresos hasta la fecha, que también estaban a disposición del público .»

Esto demuestra que [la WSPA y sus principales miembros](#), entre ellos Shell, SOCAL Gas y Southern California Edison, así como las empresas propiedad de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y BP, o adquiridas posteriormente por éstas, fueron advertidos hace 70 años de que el producto del que se beneficiaban podía suponer una amenaza para la estabilidad del clima de la Tierra.

A mediados de la década de 1950, la comprensión científica del «[efecto invernadero](#)» iba en aumento entre los investigadores del clima, que publicaron sus hallazgos fuera del ámbito académico en publicaciones como [The New York Times](#) y la revista [Time](#). Sin embargo, estos

documentos de la APF son los primeros que demuestran que la industria petrolera fue informada directamente del vínculo durante este periodo. No obstante, parece que esta información era algo que la industria habría preferido mantener en secreto.

Enfrentamiento en el California Club

En los meses anteriores a su convocatoria del California Club, Hitchcock había estado muy ocupado. En febrero de 1955, había instado a los dirigentes estatales a tomar [medidas contra la contaminación de las refinerías](#), animando a la zona de la bahía a «iniciar un programa de control de la contaminación atmosférica» basado en los conocimientos adquiridos con el problema de la niebla tóxica de Los Ángeles.

Posteriormente, en marzo de 1955, el *Primer Informe Técnico de Progreso* del APF esbozaba el posible riesgo climático causado por la quema de combustibles fósiles y presentaba una auditoría de las emisiones de las refinerías del APF que mostraba unos niveles de contaminación superiores a los comunicados anteriormente por el SRI patrocinado por la WSPA. Y, a principios de abril, durante una audiencia del Senado del Estado de California en Sacramento, Hitchcock [testificó](#) públicamente a favor de «esfuerzos de investigación sobre la contaminación atmosférica» financiados por el Estado.

Dos días después, los frustrados dirigentes de la WSPA le citaron en el California Club. En la reunión, [Philip S. Magruder](#), presidente del Comité de Humos y Gases de la WSPA y vicepresidente ejecutivo de General Petroleum ([ExxonMobil](#)), dijo a Hitchcock que el comité estaba «[cuestionando la conveniencia](#)» de que la fundación «llamara la atención» sobre los gases de las chimeneas de las refinerías «o les diera publicidad.»

A continuación, George Davidson, vicepresidente de la Standard Oil Company de California (Chevron), declaró que tenía entendido que el dióxido de azufre (SO₂) de las refinerías era «[realmente beneficioso para las plantas y las personas](#)» en las cantidades que se emitían en la actualidad. Esto a pesar de que en 1955 los científicos ya habían identificado el SO₂ como [perjudicial para las plantas y la salud humana](#), a veces incluso letal. Davidson respaldó la opinión de Magruder de que la fundación no debía investigar esas emisiones de las refinerías y [criticó](#) el discurso de Hitchcock en San Francisco por llamar «la atención sobre un creciente problema de contaminación atmosférica en la zona de la bahía.»

En un memorándum del 7 de abril de 1955 a la Junta Directiva de la APF, el presidente de la APF, Hitchcock, citó al vicepresidente de Standard Oil diciendo que pensaba que el dióxido de azufre era bueno para los seres humanos. En el memorándum Hitchcock también informó de que William Stewart, de Standard Oil, dijo que el APF debía tener un carácter «protector» para la industria petrolera.

Por último, la WSPA sacó a relucir su gran arma, [William L. Stewart Jr.](#), vicepresidente de Union Oil (Chevron), ahora presidente del Comité Nacional de Humos del API, quien reveló algunas verdades importantes sobre el patrocinio de la fundación por parte de la industria petrolera.

En primer lugar, Stewart se quejó de que la APF intentaba abarcar «[un programa demasiado amplio](#)» de investigación antes de divulgar que «él y otros presentes habían formado parte del grupo que constituyó la Fundación». Como presidente del Comité de Humos y Gases de la

WSPA en el momento en que se creó la APF, Stewart dijo a Hitchcock que la WSPA «[entendía que, al desviar fondos sustanciales a la Fundación](#)», la APF «serviría como departamento de investigación de la industria petrolera», que «[tendría un carácter “protector”](#)», publicando «[resultados que se aceptarían como imparciales](#)», mientras que los propios resultados de la industria se consideraban favorables a sus intereses. En resumen, transmitió que la WSPA no quería que el FAP se ocupara de las emisiones de las refinerías, sino que debía «limitarse a investigar». En cuanto al propio papel de Hitchcock, Stewart le dijo que la WSPA esperaba que el presidente de la APF actuara como «director de investigación de la industria petrolera».

Sorprendido y decepcionado, Hitchcock remitió el asunto al Comité Ejecutivo de la Fundación, pidiéndole que estudiara la forma de resolver el «malentendido básico de la WSPA sobre los fines de la Fundación».

La resolución llegó pronto, pero no como Hitchcock esperaba. Otro conjunto de documentos recuperados recientemente, escritos menos de una semana después de la reunión, muestra al ejecutivo [de Union Oil](#), Vance N. Jenkins, condenando todo el programa de investigación de la APF. En un memorándum enviado a Stewart, Jenkins denigraba todos y cada uno de los proyectos del APF excepto uno: su propuesta de establecer una «[oficina de información pública de primera clase](#)» para dar al público los llamados «[hechos definitivos](#)» (aprobados por los ejecutivos de la industria petrolera) sobre el problema del smog. Según Jenkins, éste era el «[propósito para el que se creó la Fundación](#)» y el único aspecto de su actividad que podía «recomendar plenamente». Al día siguiente, el presidente de Union Oil y fideicomisario de la APF, Reese H. Taylor, presentó el memo condenatorio de Jenkins al Comité Ejecutivo de la fundación.

Los registros muestran que los esfuerzos de la WSPA dieron en el blanco. A partir de ese momento, la industria petrolera ejerció un control más estricto sobre las actividades de la APF. En una reunión especial del Comité Ejecutivo celebrada el 13 de abril de 1955, unos participantes anónimos propusieron la creación de un nuevo «[subcomité científico](#)» para asesorar sobre «asuntos técnicos», cuyos miembros debían seleccionarse entre «organizaciones como el [American Petroleum Institute, la Western Oil and Gas Association...](#)». En julio, el APF había instalado debidamente este nuevo [Comité Asesor Técnico](#), que incluía a representantes del [API](#) y de [Richfield Oil](#) (BP).

En consonancia con las sugerencias de Union Oil, los proyectos de investigación del APF se [redujeron](#), centrándose exclusivamente en las emisiones de los automóviles, a menudo realizados [conjuntamente](#) con el [API](#). A partir de 1955, la [investigación patrocinada por la APF](#) se utilizó cada vez más para presionar a las autoridades del condado en contra de la normativa sobre aire limpio o para [mejorar la imagen pública de la industria del petróleo y el gas](#). Los boletines e informes de la APF también hacían hincapié en el [elevado coste](#) del control de la contaminación, argumentando que la regulación tendría [repercusiones económicas negativas](#), y repetían el mantra de que era [necesaria más investigación](#) antes de adoptar medidas reguladoras. Además, a partir de marzo de 1956, los registros muestran que la WSPA emitió una serie de [peticiones directas](#) para que la APF se centrara exclusivamente en [las relaciones públicas](#) en lugar de en la investigación sobre la contaminación atmosférica.

Al verse cada vez más relegado a una función de [recaudación de fondos](#) y [en desacuerdo](#) con las intenciones de la WSPA, Hitchcock [dimitió](#) como presidente y director general en septiembre de 1956. Su sucesor, W. L. Faith, tenía vínculos con [el API](#) y dirigiría la fundación de acuerdo con las exigencias de la WSPA. Tras dimitir, Hitchcock regresó al este, donde se incorporó a la facultad de ingeniería de la Universidad de Buffalo y fundó su propia empresa de consultoría sobre contaminación atmosférica.

Dióxido de carbono «inofensivo»

Tras la intervención del Club California de la WSPA, [las publicaciones](#) del APF revisadas por *DeSmog* no volvieron a hacer referencia al impacto potencial del CO2 sobre el clima de la Tierra. Estos informes posteriores del APF tampoco explicaban las implicaciones de los hallazgos de Keeling en Caltech para el avance de la comprensión científica de los cambios atmosféricos causados por la quema de combustibles fósiles, a pesar de que se había advertido explícitamente a los miembros del APF de que estos cambios podrían «resultar en última instancia de [considerable importancia para la civilización](#).» Aunque las publicaciones del APF informaban de algunas de las conclusiones de Keeling —principalmente que el CO2 en la atmósfera de Los Ángeles «[aumentaba principalmente como resultado directo de la combustión](#)» y que aproximadamente dos tercios de este CO2 global era «[atribuible a la combustión de productos petrolíferos](#)»—, estos informes del APF no mencionaban los posibles impactos a largo plazo de las emisiones de CO2 generadas por los combustibles fósiles.

Además, en lo que podrían ser algunos de los primeros ejemplos conocidos de negación del clima, los informes de la APF que siguieron declararon que [el CO2](#) era «[inocuo](#)». Además, algunos representantes de la industria afiliados a la WSPA también negaron la posible nocividad del CO2, sentando un precedente para una práctica de la industria petrolera que se repetiría en las décadas siguientes.

En la [Conferencia Nacional sobre Contaminación Atmosférica](#) del Servicio de Salud Pública de EE.UU., celebrada en noviembre de 1958 en Washington D.C., el ejecutivo de [Shell](#) Charles A. Jones, experto en contaminación atmosférica de la [WSPA](#) y [la API](#), que había formado parte del [Subcomité de Asesoramiento Técnico](#) del APF, calificó públicamente el CO2 de «[inocuo](#)». En marcado contraste, uno de los oradores principales de la conferencia había discutido ese mismo día las posibles [consecuencias climáticas](#) de las emisiones de CO2, como el calentamiento global, el derretimiento de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar. Preguntada por la declaración de Jones, Shell dijo a *DeSmog* que la empresa no tenía «nada que añadir».

Legado

La APF [se disolvió](#) a finales de 1960 sin hacer ruido. Según su historia oficial, la fundación había «[cumplido su misión](#)», a pesar de su fracaso en resolver el problema del smog en California. En realidad, en 1961, la regulación de la contaminación atmosférica se estaba extendiendo por todo Estados Unidos, convirtiendo el problema del control de la contaminación de la industria del petróleo y el gas en un problema nacional. En consecuencia, la asociación nacional del sector, API, se mostró cada vez más activa en la investigación de la contaminación atmosférica y en la lucha contra la regulación de las emisiones de la industria petrolera.

Desde la década de 1950 hasta hoy, la industria del petróleo y el gas ha utilizado [el libro de jugadas](#) que desplegó por primera vez a través de la APF, financiando investigaciones aparentemente «independientes» a través de grupos comunitarios de terceros para luchar contra la legislación sobre contaminación atmosférica y la acción climática. Estos esfuerzos han paralizado repetidamente las normativas sobre aire limpio y clima. Al mismo tiempo, las empresas petroleras y de gas han aprovechado este gasto en investigación para mejorar su imagen pública como socio responsable en la búsqueda de soluciones climáticas o de aire limpio, y para promover medidas voluntarias o soluciones tecnológicas en lugar de controles de contaminación obligatorios por ley.

[Las empresas miembros de la WSPA](#), como [BP, Chevron, ExxonMobil y Shell](#), financiaron el negacionismo climático a través de su participación en la [Coalición Mundial sobre el Clima \(GCC\)](#), que funcionó entre 1989 y 2001. La [GCC](#) se basó en el legado de la APF patrocinando su propia «[investigación independiente](#)» y utilizando estudios [financiados por la industria](#) para promover la negación del clima, presionando al organismo oficial de asesoramiento científico de la ONU, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Esto desbarató los esfuerzos internacionales para prevenir los impactos catastróficos del cambio climático.

En 1998, un «[Plan de Acción de Comunicación sobre la Ciencia del Clima Global](#)» aprobado por API, Exxon y Chevron incluía la creación de un Centro de Datos sobre la Ciencia del Clima Global, que se parecía aún más al APF. Según el plan, el Centro funcionaría como «[una fundación educativa sin ánimo de lucro](#) con un consejo asesor de respetados científicos del clima... dotado inicialmente de profesionales cedidos por diversas empresas y asociaciones con un gran interés en la cuestión climática», que financiarían investigaciones destinadas a «[colmar las lagunas de la ciencia climática...](#)».

«La victoria se logrará [cuando los ciudadanos medios ‘entiendan’ \(reconozcan\) las incertidumbres](#) de la ciencia climática», anunciaba el “Plan de Acción”, haciéndose eco de la declaración de 1954 de la APF de que «aunque hay mucho que no sabemos sobre el esmog, hay algunos hechos definitivos que no han quedado claros para el público. [Debemos informarles plenamente](#) de todo lo que realmente se sabe».

Incluso en el siglo XXI, la WSPA y sus empresas miembros siguen influyendo en la opinión pública y bloqueando las normativas sobre aire limpio y las iniciativas climáticas estatales a través de grupos de fachada de terceros como [Californians for Energy Independence](#) y [Californians Against Higher Taxes](#), que han utilizado investigaciones patrocinadas por la industria para combatir incluso reformas modestas. En 2014, una [presentación de PowerPoint filtrada](#) reveló el apoyo de la WSPA a más de una docena de grupos de fachada, muchos de los cuales siguen oponiéndose activamente a la política climática una década después. El mes pasado, la WSPA fue nombrada acusada en una demanda climática de Oregón por su apoyo a los grupos de fachada enumerados en la presentación filtrada. La demanda alega que la WSPA financió a los grupos de fachada como parte de una «[multimillonaria campaña de relaciones públicas para fomentar la maquinaria propagandística de la industria petrolera.](#)»

Hoy, unos 70 años después de la creación de la Air Pollution Foundation, las comunidades que rodean las refinerías de Los Ángeles siguen sufriendo graves consecuencias para la salud

pública derivadas de las emisiones de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, la región sigue registrando una de las peores calidades del aire del país. Como estado, California es también el [segundo mayor emisor de CO2](#) de Estados Unidos.

A escala nacional, grupos financiados por la industria petrolera como [Natural Allies for a Clean Energy Future](#) o [Partnership to Address Global Emissions](#) abogan por el uso de gas «natural» (metano) patrocinando y publicitando investigaciones favorables a la industria que impulsan el gas como solución climática.

Estos nuevos documentos de la Air Pollution Foundation muestran cómo la WSPA y sus empresas miembros desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento de la tradición de las tácticas engañosas de la industria petrolera. Ahora, cinco grandes petroleras (Chevron, ExxonMobil, BP, ConocoPhillips y Shell), así como la API, están siendo demandadas por el uso de esas tácticas en el histórico pleito [California contra las grandes petroleras](#), que forma parte del panorama de litigios iniciado por la ex candidata presidencial Kamala Harris. A pesar de haber sido pionera en la evolución de estas tácticas, la WSPA no ha sido citada como demandada en el pleito de California.

En relación con la demanda, un portavoz de Shell declaró a *DeSmog* que la empresa «no cree que la sala del tribunal sea el lugar adecuado para abordar el cambio climático, sino que una política inteligente por parte del gobierno y la acción de todos los sectores es la forma adecuada de alcanzar soluciones e impulsar el progreso». Ni WSPA ni API respondieron a la solicitud de comentarios de *DeSmog*.

[Fuentes: [DeSmog](#), 12-11-2024; [Counterpunch](#), 6-12-2024; [Sin Permiso](#). Trad. de Antoni Soy Casals]

Isabel Otxoa

Registrar la jornada laboral en el empleo de hogar

El 19 de diciembre, en el procedimiento C.531/2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ([TJUE](#)) ha declarado que de acuerdo a las normas comunitarias la obligación de registro de la jornada laboral también se aplica al empleo de hogar. En el procedimiento ante el Tribunal, el Gobierno de España sostuvo que la exclusión no existía legalmente, sino que eran los órganos judiciales y administrativos (españoles) quienes interpretaban mal el [Estatuto](#) de los Trabajadores. No sigo con esto porque la explicación puede resultar farragosa, pero invito a quienes se sientan con ganas a leer los apartados 42 a 44, 50 y 51 de la sentencia.

Lo cierto es que hasta ahora mismo los Tribunales y la Inspección de Trabajo (Criterio técnico 101/2019) han venido interpretando que las trabajadoras de hogar y cuidados estaban excluidas en todos los casos de cualquier sistema de registro de su jornada. En la misma línea, la actual [Guía sobre el Registro de Jornada](#) del Ministerio de Trabajo, publicada en 2019, al detallar la manera de cumplir con la obligación por parte de toda clase de empresas y situaciones, no menciona ni una sola vez al empleo de hogar.

Esto es así porque la cuestión de la jornada en el sector está deliberadamente desregulada en las leyes y descontrolada por la Inspección de Trabajo, que no examina la legalidad de los contratos. El RD 1620/2011, sobre la relación especial, establece una jornada semanal de 40 horas que llama de trabajo efectivo, y otras 20 que llama de tiempo de presencia, que no define y se da sobre todo en el empleo interno.

Sabido es que los periodos de estancia de bomberos, doctoras, guardas forestales, y demás personas en su puesto de trabajo a la expectativa de que su intervención sea necesaria, son tiempo de trabajo. Los tribunales han declarado también que para considerar un tiempo como jornada de trabajo no es necesario que la empresa obligue a permanecer de guardia en un lugar determinado, es suficiente con que exista la obligación de acudir a la llamada en un plazo muy breve, de tal manera que la libertad de la persona para utilizar su tiempo según sus propios intereses quede seriamente limitada.

Mientras tanto, el trabajo de hogar interno no está definido en el [RD 1620/2011](#), que solo hable de la pernocta y deje libertad a las partes para establecer su régimen. No sabemos cuál es el horario posible de la pernocta. Cuando, por ejemplo, se obliga a una interna a regresar a la casa a las 20h. el domingo después de su descanso de 36 horas del fin de semana, ¿dónde acaba el tiempo de presencia y empieza el de la pernocta? O ¿cuál es el tiempo de trabajo de quien entra a las 20 horas y sale a las 10 de la mañana, habiendo dormido en la casa sin interrupciones? En la pernocta, con la fórmula de enmascarar el lugar de trabajo con el domicilio de la trabajadora, no se reconoce la función de cuidado nocturno que tiene el contrato de trabajo interno. Como en los contratos se pacta la pernocta sin aclarar explícitamente su objeto ni su horario, solo habría que retribuirlo cuando hubiese trabajo efectivo, que consistiría en que la trabajadora tuviese que interrumpir su descanso para atender a la persona durante un tiempo, cambiando un pañal, acompañando al baño, tranquilizando... ¿Cuánto vale, por ejemplo, ser despertada tres veces cada noche si la intervención es cada vez de un cuarto de hora?

Los contratos de trabajo de hogar interno que realizan agencias de colocación y gestorías establecen 40 horas de trabajo, y muy raramente fijan un horario de tiempos de presencia, que según la ley tendrían que aparecer detallados por escrito y pagarse al precio de la hora ordinaria. De acuerdo con las [estadísticas](#) de ATH-ELE de 2023, casi el 70% de las internas trabajan más de 60 horas semanales. La pernocta se interrumpe en el 45% de los casos dos o más veces cada noche, cinco o más noches a la semana. Son trabajadoras que atienden día y noche a personas en situación de dependencia, normalmente ancianas, que en un 86% viven solas. Pero cuando en un juicio se reclama el pago de horas de presencia y extraordinarias, a falta de pruebas hay jueces que dan por bueno que una persona con Alzheimer avanzado puede ser atendida en una jornada de 40 horas semanales.

El RD 1620/2011, reconoce el derecho de las internas a interrumpir su jornada durante dos horas diarias, no remuneradas, para las comidas principales. Pero no dice si se puede o no salir de la casa para esas comidas. En algunos juzgados, las dos horas diarias se les reducen al computar la jornada del trabajo interno. ¿Iremos a Europa para que nos aclaren si es o no tiempo de presencia remunerado el que se usa para comer en la vivienda si no se puede salir a tomar un bocadillo en el bar de abajo? Lo peor es que el Gobierno español sostendría que no hay norma que impida salir esas dos horas. Se trata de la indefinición como estrategia, si cuela, cuela.

¿Qué va a suceder en adelante? Podría pasar lo mismo que está ocurriendo con el incumplimiento de la [sentencia](#) del TJUE C.389/20 de 24 de febrero de 2022, que obligaba a España a terminar con la exclusión de la prestación de paro en hogar. La ley discriminatoria se corrigió ocho meses después, pero el SEPE sólo está reconociendo las prestaciones correspondientes al tiempo posterior a 1/10/2022, que es cuando se empezó a poder cotizar para el desempleo. Las trabajadoras con acceso a información y servicios jurídicos, que son una minoría, van a juicio reclamando una prestación de acuerdo con el tiempo cotizado desde antes del 1/10/2022, y ganan. En respuesta de octubre de 2024 a una interpelación parlamentaria de EH Bildu sobre esta cuestión, en la que se le planteaba que tomase medidas para que dejase de ser necesaria la judicialización del tema, la Ministra de Trabajo sostuvo en el Senado que el recorte de derechos se debe a la interpretación que el SEPE hace de la sentencia europea, como si el remedio (¡otra vez la culpa es de la interpretación errónea de normas irreprochables!) no estuviese en sus manos. Mientras, los juicios tardan una barbaridad en salir, y las trabajadoras no

avisadas admiten prestaciones muy inferiores a las que les corresponden.

El tema del registro de la jornada laboral, que es muy deseable y que intentaremos que sea una realidad, suscita algunas otras cuestiones. Si se pone en práctica sería un cambio positivo, vista la incomodidad de quienes se preguntan hasta dónde se puede llegar implantando esa clase de obligaciones en la intimidad del hogar; la respuesta es que el llamado servicio doméstico está formado por trabajadoras con derechos laborales. En el trabajo externo, me parece que sería posible si el gobierno estuviese dispuesto a tomar medidas impopulares.

Pero en el trabajo interno hay un salto galáctico entre lo que teóricamente se podría reclamar y aquello a lo que se puede aspirar, dada la situación. La población anciana en situación de dependencia que se mantiene en su casa, lo hace a costa de contratar con una sola persona el cuidado que debería realizarse con dos, tres o cuatro turnos de trabajo y cuyo pago no está al alcance de la gran mayoría. Las trabajadoras de países empobrecidos que se ofertan para el trabajo interno no suelen estar en condiciones de presionar por el cumplimiento cabal de derechos laborales. La nueva obligación de registro de la jornada laboral en hogar no se va a cumplir sin otras medidas que la hagan posible, y no me refiero solo al control de la Inspección o a poner al alcance de los empleadores la manera de hacerlo. El tiempo de trabajo sumergido no va a aflorar si no hay un gran incremento de los servicios de cuidado y una regularización de las personas migradas que no las someta al sistema actual que amordaza cualquier exigencia frente a la parte empleadora.

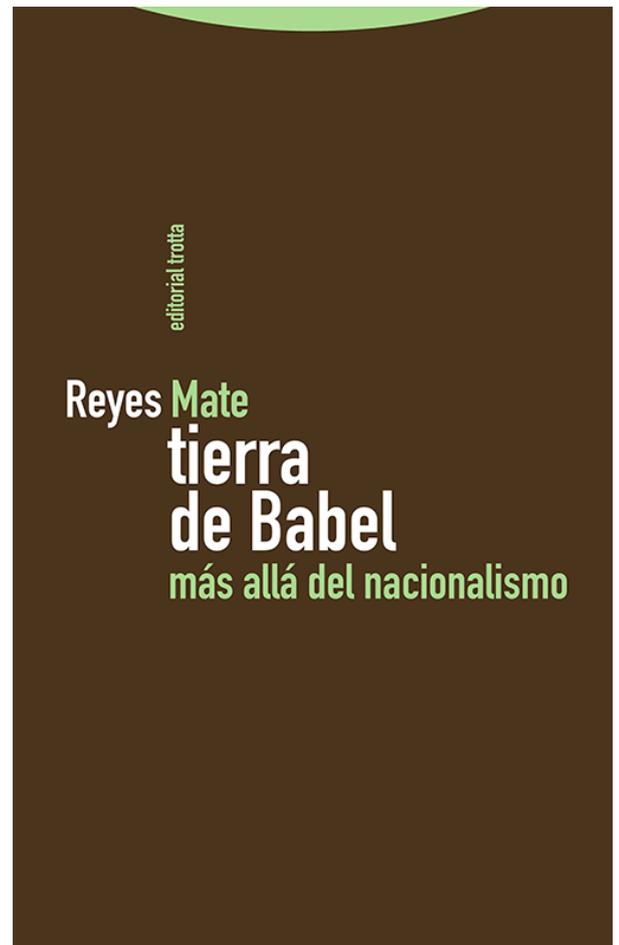
[Fuente: [El Salto](#)]

Tierra de Babel

Más allá del nacionalismo

Trotta Madrid 2024 205

Antonio Giménez Merino



Como señala el propio autor en el prólogo de este ensayo, bello y cargado de profundidad, «este texto no es una historia del nacionalismo, sino una reflexión filosófica que lanza una ráfaga de luz sobre asuntos históricos ciertamente complejos».

Por tomar uno de ellos, acuciante, el continuo aumento del éxodo migratorio y su choque con políticas hostiles de acogida, alimentadas por el miedo y el antagonismo (la «negación del ajeno»), exige preguntarse por el sentido, hoy, de hacer depender el reconocimiento de las personas a la pertenencia a una comunidad organizada en el interior de unas fronteras. Esta obra lo hace adentrándose históricamente en el núcleo de ideas, sean racionales o míticas, que soportan el sentido de una comunidad nacional incluyente y que a la vez excluye, adentrándose en su trasfondo político, cultural y religioso. Emergen así todas las limitaciones de la lógica nacionalista en sus distintas manifestaciones históricas —deteniéndose en las singularidades de la alemana, la francesa y la española—, con su punto culminante (Auschwitz, «la Torre de Babel consumada») que obliga a reconsiderarlo todo: «No es lo mismo que te marginen a que te eliminen, pero debido a la lógica de la secuencia [exclusión, persecución y exterminio], habría que estar muy atento a los primeros brotes excluyentes porque estos, si encuentran las condiciones adecuadas, pueden llegar hasta el final de la lógica».

Mate reivindica un reconocimiento del diferente más allá del derecho —un «principio de hospitalidad incondicional» hacia los demás que encuentra un buen acomodo en las ideas de Simone Weil—, lo que explica que el libro adopte la figura de la diáspora y el exilio como punto de

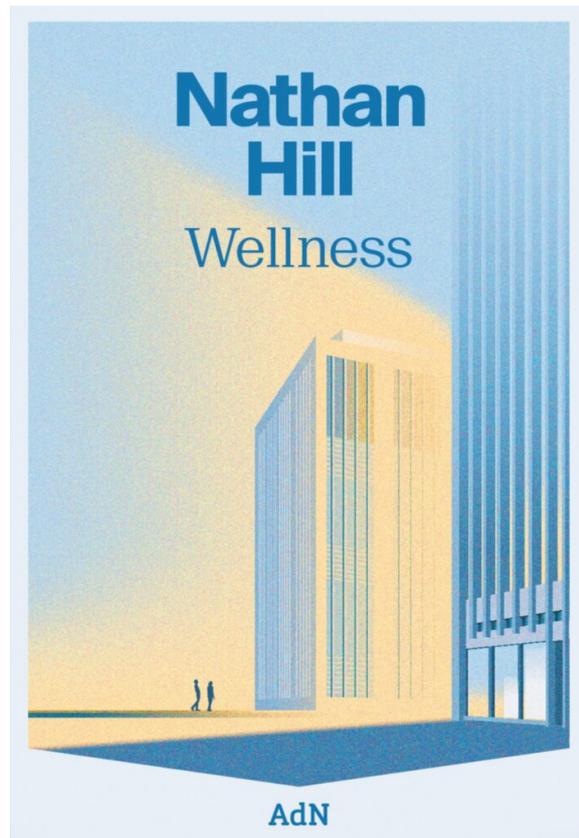
vista abierto y como germen de una «democracia por venir» desacralizadora de la tierra, la lengua y la historia *propias*, es decir, capaz de ir más allá de la estigmatizante «política de la nación».

30 12 2024

Wellness

AdN Madrid 2024 696

A. R. A.



No suelo recomendar novelas porque no soy un experto en literatura. En mis lecturas me oriento por referencias, por autores que me han gustado y por las recomendaciones de mi librería habitual. En este caso utilicé este último recurso. Entre las recomendaciones elegí la que me pareció más interesante por el tema sugerido en la solapa y porque era una novela larga (681 páginas), adecuada para un viaje de varios días. En un texto tan largo trata de muchos temas, aunque el núcleo esencial tiene que ver con el título: parte de la ficción ocurre en un centro (Wellness) dedicado a estudiar el efecto placebo. Aunque es una novela, el autor incluye bastante información científica sobre psicología, mostrando tanto sus logros como sus carencias. Hay también muy buena reflexión sobre las redes sociales, incluido un capítulo («Usuarios faltos de atención. Una obra en siete algoritmos») que es la explicación más comprensible de cómo funcionan los algoritmos de las grandes redes y cómo, sin necesidad de otra voluntad que la de obtener el máximo de beneficios, pueden acabar conduciendo a un individuo común hacia espacios negacionistas y ultras. Una novela tan larga contiene muchas más cosas: relatos de una saga de capitalistas depredadores, reflexiones sobre el amor y la familia, sobre los prejuicios sociales, etc. Una lectura interesante.

Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción rechaza la firma del tratado entre la UE y Mercosur

El acuerdo EU-Mercosur acaba de firmarse tras años de negociaciones a puerta cerrada a pesar del rechazo recientemente expresado por [más de 400 organizaciones](#) de todo el mundo en una declaración conjunta contra la firma del tratado.

El acuerdo comportará grandes beneficios para las multinacionales a un gran coste humano y ambiental. Como ya mostró un [informe realizado por Ecologistas en Acción y Entrepobles](#) en 2022, se trata de un acuerdo neocolonial que supone acentuar el papel de los países del Mercosur como exportadores de materias primas de todo tipo, especialmente las agropecuarias, lo que aleja aún más cualquier esperanza de Soberanía Alimentaria a ambos lados del Atlántico y dificulta posibles estrategias futuras para el desarrollo de un comercio justo entre ambas regiones.

Por su parte, Europa aumentaría la exportación de productos industriales, incluyendo pesticidas peligrosos cuya utilización está prohibida en la UE y otros bienes de consumo como coches o maquinaria agrícola, desarticulando el tejido industrial interno de esa región sudamericana.

El acuerdo viene a reforzar una relación comercial colonial y extractivista que agravará las desigualdades sociales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y aumentará el riesgo de desplazamiento de pueblos y violaciones de derechos humanos.

En este contexto, la UE, que dice defender la transición verde, está dispuesta a hacer negocios con Argentina, con un presidente como Milei de extrema derecha negacionista de toda la problemática ecológica y social. La firma del acuerdo comercial UE–Mercosur que ya de por sí perjudica el medio ambiente y las condiciones sociales en ambos bloques signatarios es directamente dar otro impulso hacia el abismo.

El acuerdo deberá ser ratificado en Europa y en los países del Mercosur. En la UE, el acuerdo debería, en teoría, ser acordado por unanimidad por todos los gobiernos de la UE y luego ser examinado y votado por los parlamentos nacionales y algunos regionales.

Sin embargo, la Comisión Europea podría dividir el acuerdo UE-Mercosur en instrumentos separados para eludir el derecho de veto de los gobiernos nacionales de la UE e impedir el control democrático de los parlamentos nacionales y regionales.

Ecologistas en Acción lleva más de 20 años haciendo frente a los mal llamados tratados de «libre comercio», que solo dan libertad a las transnacionales, aceleran e incrementan el saqueo de los bienes naturales, mientras consolidan aún más y prolongan las relaciones neocoloniales, mediante un intercambio desigual entre países del Norte y el Sur global.

A pesar de este revés, la organización ecologista seguirá trabajando con organizaciones aliadas y afines en la UE y en Mercosur para tratar de impedir la ratificación del acuerdo.

[Fuente: [Ecologistas en Acción](#)]

II Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación: Conclusiones

Entre el 14 y 16 de noviembre de 2024, más de cuatrocientos docentes y estudiantes de todas las etapas educativas, desde la educación infantil y primaria a la universitaria, pasando por la formación profesional y la educación no formal nos hemos reunido en Pamplona/Iruña para dar continuidad a la exitosa convocatoria de 2022. Como entonces, procedemos de ámbitos administrativos diferentes (10 países y 15 comunidades autónomas, en el caso del estado español), y nos une una común preocupación por desarrollar proyectos y estrategias educativas que pongan a la memoria de nuestros pasados en el centro de nuestra acción.

Ya en el I Congreso pudimos constatar que éramos muchas las personas que podíamos compartir nuestras experiencias, y que hemos continuado haciéndolo en RedMemoria, creada gracias a aquel impulso. Comprobado que, contrariamente a lo que manifestaba una opinión bastante extendida, una parte relevante del mundo educativo sí estaba ocupándose y preocupándose por introducir a las generaciones más jóvenes en el pensamiento crítico, la problematización del presente, el aprender a pensar históricamente, la incorporación de sujetos históricos y temáticas postergadas e invisibilizadas, con la renovación metodológica y conceptual que necesariamente conllevan, a partir del concepto clave de la Historia con Memoria. Las conclusiones del anterior congreso dejaron meridianamente claros tanto el camino ya recorrido como los retos que era preciso abordar.

Durante estos dos años, empero, la realidad social sigue dándonos sobrados motivos para la preocupación. No podíamos imaginar hace dos años que asistiríamos a una estrategia genocida como la que está ocurriendo diariamente en Gaza desde hace más de un año, violando todas las barreras legales y morales que la humanidad se impuso tras la II Guerra Mundial. La utilización sistemática de ataques contra la población civil palestina, en especial los grupos más vulnerables, horroriza nuestras conciencias y nos interroga por lo que creíamos haber aprendido de los pasados traumáticos del siglo XX. Asimismo, el cuestionamiento de la legalidad internacional y sus mecanismos, precarios y poco efectivos pero los únicos disponibles hoy en día, nos sitúa ante un futuro incierto. Otro motivo de preocupación es el trato inhumano a los y las migrantes, no por cotidiano menos indignante. En este tiempo se ha extendido también la amenaza de una ultraderecha con cada vez más parcelas de poder en todo el mundo, atacando postulados básicos y derechos fundamentales, y con una capacidad enorme de difundir noticias falsas, discursos de odio, racistas, xenófobos y antifeministas, además de expandir el negacionismo y el revisionismo sobre los genocidios fascistas del pasado.

Un panorama complejo, sin lugar a duda, que nos ratifica en la necesidad de continuar dando pasos. Entre las cuestiones que se apuntaban en el I Congreso se encontraba, en primer lugar, la necesidad de un mayor rigor en la utilización de los conceptos relacionados con la memoria y, por tanto, de clarificar de qué hablamos cuando hablamos de historia con memoria. Es indudable que el llamado giro memorialista ha tenido unos efectos positivos en la opinión pública, pero la difusión no implica necesariamente éxito en la recepción social ni responder a los desafíos del siglo XXI. Por ello, la clave estriba en recuperar el acervo cultural de la memoria y, sobre todo, la idea de una memoria de la construcción, una memoria de los sueños: qué hemos aprendido de los pasados traumáticos, para también sacarlo de la «caja de los traumas» y reformular las

expectativas según lo que hemos visto en la última década. Se debería aprovechar la función profiláctica de la memoria para recuperar una identidad colectiva en torno a los grandes proyectos que unieron las ilusiones previas a aquellos procesos traumáticos: la verdadera democracia, el antifascismo, los valores del Estado del Bienestar, la reforma agraria hoy entendida como respuesta al cambio climático, soberanía alimentaria y distribución sobre el territorio.

A partir de la concepción de la historia como choque de relatos en los que las personas buscan reconocerse, nos preguntamos cómo nos sitúan nuestras elecciones sobre la narrativa del pasado; cómo nos construyen y nos orientan hacia el presente, y cómo nos invitan a laborar por un futuro más justo y un planeta más habitable. Hacer historia con memoria implica tomar en consideración un vasto paisaje de voces olvidadas y relatos silenciados en el que, lo que parecen pequeñas islas, constituye un archipiélago de grupos humanos interconectados. Un olvido y una ausencia tanto más vastas e infames, si tenemos en cuenta que no estamos hablando únicamente de colectivos o sectores sociales, sino que tal silenciamiento ha operado (y opera) con extraordinaria eficacia sobre el 51% de la humanidad, las mujeres. ¿Por qué esto es así?, ¿desde dónde se mira y cómo se reconstruye el pasado?

Se han presentado comunicaciones que refieren la compleja interconexión entre tres formas de dominación social —sexo, clase y etnia— que con frecuencia han disuelto sus fronteras multiplicando así los efectos de la sumisión y la opresión. Desde el patriarcado, que se confunde con la propia historia, hasta los efectos de la emergencia del capitalismo, el nacimiento del Estado moderno y el colonialismo, hasta las movilizaciones populares en la España de los 70, pasando por la II República, la represión franquista, la persecución nazi y diversas luchas obreras, vecinales y políticas durante la dictadura y la transición. Acontecimientos que, de la mano de las propuestas presentadas, dan voz a mujeres que sufrieron la “caza de brujas”, a personas esclavizadas, a gitanos y gitanas perseguidos y exterminados por el fascismo, a mujeres que contribuyeron al asentamiento de la II República y a aquellas que sufrieron el exilio, la clandestinidad y la represión franquista, a mujeres que abanderaron las huelgas mineras de los 60 o a los colectivos políticos, vecinales y obreros que protagonizaron las movilizaciones en los años 70.

En sociedades que se sustentan en “pactos sociales” y que se postulan igualitarias (todos los seres humanos nacen libres e iguales), los sujetos de derecho están legitimados y emplazados a señalar la desigualdad social que les afecta, así como los discursos que puedan incidir en la reproducción y perpetuación de aquella sea en razón de su sexo, pertenencia a clase o etnia. La memoria es un derecho civil que se ejerce, superando una vertiente meramente compasiva; no puede haber igualdad, ciudadanía plena ni, por tanto, democracia en un sentido completo sobre el silencio y el menosprecio de quienes han sido desposeídos de voz. Saber acerca del origen y genealogía de esa desposesión es tarea clave y en buena medida pendiente de la educación histórica deseable para una ciudadanía democrática: ello supone indagar, conocer y definir las circunstancias históricas —políticas, sociales, teóricas— que han privado a las mujeres y a amplias mayorías sociales de recursos, voz propia y autonomía para formar parte de la res pública. Implica poner nombre a los sistemas de poder y dominio, comprender su lógica, su operatividad, así como las claves de su permanencia en el momento presente, e implica también repensar e impulsar una escuela realmente coeducativa y en su seno una educación igualitaria. Y ello requiere un profesorado que haya sido formado para ello.

Por ello, la discusión sobre la deshumanización del otro debe llevarnos también a reflexionar sobre las estrategias para salir del olvido, para recuperar la dignidad y la evidencia de que nadie es prescindible. Varias aportaciones a este congreso sugieren que la respuesta a esta violencia comienza por identificarla para construir contrarrelatos desde abajo que desafíen el relato hegemónico. La práctica de una historia con memoria, como venimos defendiendo, acaso permita avanzar en esa dirección. La disciplina histórica debe ser objeto de un profundo análisis crítico desde los problemas del presente; debe ser reescrita dando voz a los sectores de la sociedad que han sido sistemáticamente preteridos y ninguneados; ello pasa por revisar el uso de fuentes, métodos o periodizaciones, dando voz a otros problemas y, sobre todo, a otros sujetos históricos. No basta con «añadir» ingredientes al «guiso» —mujeres, obreros, campesinos o gitanos...—, es menester cambiar y reconsiderar la «receta» en su conjunto. Es necesario construir un nuevo relato que incorpore a todas las perspectivas, a todas las personas y grupos, a todas las identidades.

Para ello, es importante impulsar (y se están dando pasos en ese sentido) la historia desde abajo, la vida cotidiana, los testimonios, la oralidad. Comprobamos que el alumnado se siente más cerca de la microhistoria, mucho más capaz de generar empatía y reelaborar una memoria colectiva que permita a las sociedades avanzar hacia la reparación, dignificación y sobre todo la no repetición. En este sentido, coincidimos en que el acercamiento desde la antropología puede ser una forma muy útil de construir una “topografía de la memoria” que profundice en las construcciones sociales. Se observa como forma de estimular una “curiosidad problematizada”, un enfoque que puede ser muy interesante siempre y cuando seamos capaces de generarla y motivarla.

Junto a ello, es también necesario trasladar a los estudiantes la reflexión sobre la naturaleza conflictiva de las memorias y de las interpretaciones del pasado, invitándoles a dialogar con y sobre ellas, a detectar y problematizar los mitos sobre las que se sustentan, a preguntarse sobre supuestos como la imparcialidad o la objetividad, así como a reconocer y someter a análisis crítico los usos (y abusos) públicos y políticos del pasado. Ello conlleva un abordaje adecuado del análisis de fuentes en un contexto en que no han dejado de crecer las incertidumbres que

generan la manipulación en redes sociales, las *fakes news* con clara intencionalidad política y los retos planteados por la inteligencia artificial. Un número importante de comunicaciones se han preocupado sobre este particular. De ellas se desprende que los archivos de patrimonio memorialístico y las webs que difunden sus recursos y materiales (en formatos audiovisuales muy diversos) son una herramienta valiosa y clave para acceder a las fuentes históricas y poder trabajar con el alumnado con un método histórico riguroso e iniciarles en la investigación histórica. Estos recursos, a su vez, respaldan y apoyan el trabajo realizado por profesorado con propuestas didácticas elaboradas exprofeso para trabajar en las aulas una historia con memoria. Y todo ello debe ser planteado con la implicación activa de los propios jóvenes en la recuperación de un pasado que nos pertenece a todos y todas, escuchando las voces también de los protagonistas directos del mismo o elaborando sus propios materiales de forma participativa (audiovisuales, libros, fotonovelas gráficas, etc.), ayudándoles simultáneamente a interpelar de forma crítica nuestro presente desde esa historia con memoria, con un interés emancipatorio y crítico.

Se postula asimismo la necesidad de repensar la enseñanza a partir del conocimiento de las experiencias sociales de cooperación. Experiencias que la disciplina escolar ha postergado o silenciado de forma sistemática, que nos ayuden a problematizar nuestro presente y a comprender el pasado desde el reconocimiento de lo que de común existe entre las sociedades humanas: todos somos extranjeros. Experiencias que han luchado por superar las desigualdades, por combatir identidades esencialistas, cerradas y excluyentes, y por cuestionar la justificación de la violencia (de todo tipo y sesgo ideológico o religioso) como instrumento legítimo para resolver conflictos o como herramienta de construcción social. En este sentido, se comprueba que el terrorismo y las diferentes violencias de la transición se van incorporando también con normalidad a las aulas, con testimonios y fuentes primarias que son muy útiles para abordar estos temas. Aquí también se propone la formación del profesorado como vehículo de transmisión, pero se recuerda la necesidad de visiones contextualizadas e inclusivas con las víctimas. Sigue siendo muy útil la comparación con otros casos, como se hace con la memoria de la resistencia italiana y la de la Transición española a la democracia, una muestra de cómo el triunfo de mensajes banales genera un reduccionismo que no permite ver ni los matices de los procesos y mucho menos el de los comportamientos sociales. En esta dimensión de historia comparada, siguen teniendo gran importancia como herramienta educativa los formatos que cuentan con una parte del alumnado muy receptiva —como el cómic para el caso japonés—; la narración oral —como los cuentos o la música en Colombia— o las performances —como la sugerente “antivisita” que aborda “formas de entrar y salir de la ESMA”— como medio de interpelar sobre la violencia represiva de la dictadura argentina. Sobre la cuestión de los diversos lenguajes educativos de la memoria volveremos más adelante.

Comprobamos con satisfacción que en esta edición hay nuevas y más variadas experiencias, que ya se han puesto en práctica y que siguen en marcha en los centros, con temáticas diversas, como ha quedado de manifiesto en las diversas mesas del congreso. Mostramos nuestra convicción de que la memoria debe estar presente en todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta la educación postobligatoria y la universidad.

Para ello, la formación del profesorado en memoria democrática es imprescindible, y debe ser garantizada en los centros públicos. En este sentido es preocupante la falta de oferta pública en el máster profesionalizante del profesorado de secundaria, que ha contribuido a la proliferación

de nuevas universidades privadas y ha convertido en negocio lo que debe ser un servicio público. Esta situación no se da en la mayoría de los países europeos, donde la formación universitaria pública es ciertamente predominante. La formación del profesorado en una historia con memoria es fundamental para hacer realidad una formación de la ciudadanía democrática y crítica. Se debe desarrollar una conciencia histórica en el futuro profesorado de cualquier etapa educativa. Y se debe formar en competencias profesionales al profesorado para capacitarlo en la enseñanza de la memoria histórica según cada etapa educativa.

Además, la formación en memoria debería ser transversal en cualquier estudio universitario y debería incluir la propia historia de la profesión, que en un momento de su desarrollo en el pasado se cruza con la guerra, la represión o la dictadura. No podemos entender la formación en economía, ciencia jurídica, sociología, periodismo, etc., sin una formación sólida en memoria democrática, pero la memoria histórica no solo debe relacionarse con el campo de las humanidades, sino que también debe estar presente en los estudios de las ciencias experimentales, tecnológicas o en cualquier estudio universitario.

El profesorado en formación tiene que partir de la propia historia familiar, de la interpretación de las fuentes de esa memoria y del contacto con testimonios de la memoria traumática. Debe comprenderse, así, como sujeto histórico, como parte y protagonista de la historia. Desde la problematización del presente y del pasado, la formulación de preguntas y problemas históricos le capacitarán para plantear un trabajo de aula donde predomine la indagación, la interacción, el debate y la argumentación en un contexto democrático; también la formación del pensamiento y la conciencia histórica, una formación que no se limite a la reivindicación de la memoria, sino que enseñe a analizar el pasado para comprender el presente y construir un futuro alternativo.

Por su parte, la educación no formal cumple una función esencial para ofrecer a toda la ciudadanía una formación en memoria como uso público de la historia. Por ello, es necesario desarrollar más y mejores proyectos y acciones de memoria en estos contextos, trabajando la memoria vinculada al territorio, recorriéndolo, caminando, preguntando a los lugares por sus huellas y cicatrices. En este sentido parece muy recomendable combinar la transmisión de la memoria con actividades en la naturaleza, con una tarea práctica grupal, en un contexto de convivencia y fraternidad/sororidad. La clave no estriba en abordar únicamente momentos históricos delimitados o temas específicos, sino en introducir la perspectiva histórica como un elemento permanente en las propuestas socioeducativas. Para ello, lo más interesante es transitar de lo particular y local a lo colectivo; de las historias “pequeñas” sobre biografías precisas, abriendo estrategias de promoción de vínculos intergeneracionales que refuerzan la trama social de quienes participan, su vinculación con el entorno social y la sensación de pertenencia. Desde ahí puede abrirse y enfocarse a procesos sociohistóricos más amplios, incluyendo aquellas memorias situadas en lugares subalternos e invisibilizadas hasta ahora (memorias feministas, lgtbi+, antirracistas, libertarias, de los movimientos sociales y vecinales, etc.). De esta manera se generan actuaciones enfocadas a la producción de la propia memoria, individual y colectiva, enmarcada en un contexto determinado, complejo, diverso y cambiante. Para ello, los lenguajes artísticos tienen un gran potencial para “hablar de lo que es difícil hablar”, de una forma sostenible emocionalmente, y creadora de nuevos significados en relación a los hechos. Todo ello buscando enfoques serenos, sensibles, sin inflamación emocional, sino desde las evidencias científicas y dentro del marco de los derechos humanos y los valores democráticos.

Creemos que se está dando un proceso de introducción progresiva de la memoria histórica en la educación formal como un contenido normalizado, aunque en las primeras etapas educativas todavía es muy incipiente, a través de proyectos intergeneracionales o de memoria oral. Faltan más proyectos arraigados en el medio social que impliquen una educación a través de la indagación en el medio familiar y local, para después buscar las interrelaciones con el medio nacional y global. Compartir experiencias personales y familiares ayuda a que desarrollen una conciencia más clara y comprometida, y permite establecer una continuidad del trabajo de memoria entre la escuela y el ámbito familiar, para que no se superpongan e incluso se contradigan.

En este sentido, lo que se ha venido en llamar las “comunidades de aprendizaje”, es decir, la participación de otras asociaciones, instituciones, familiares... en la escuela, está dando frutos fértiles en experiencias de las que todas las partes —alumnado y resto de participantes— comparten valores y conocimientos históricos. Destacamos, así, las que se han hecho desde la Xarxa Educació y Memoria del País Valencià con apoyo institucional del anterior gobierno autonómico pero que continúa trabajando ahora sin él. El programa Escuelas con Memoria del Gobierno de Navarra sigue mostrándose como un referente, y otras instituciones, como la Generalitat de Catalunya, están haciendo esfuerzos renovados por seguir trabajando en memoria.

Llegados a este punto, hay que subrayar el papel desempeñado por las asociaciones memorialistas, que en buen número manifiestan una gran preocupación por la transmisión de la memoria a las generaciones más jóvenes, como forma fundamental de garantizar el mantenimiento de esta memoria y para que contribuya seriamente al interés de la juventud por conocer la verdad, a la reparación pública de las víctimas y, muy especialmente, como garantía de no repetición. Esto se manifiesta en el diseño de propuestas educativas a los centros de enseñanza y el desarrollo de proyectos conjuntos, como se ha comprobado en este encuentro. El ámbito educativo, como lugar cardinal en el que la juventud se forma para el futuro, debe garantizar la transmisión de la memoria y de la verdad histórica referida al exilio, la lucha antifranquista y la brutal represión que ejercieron las dictaduras y es también el lugar donde se puede propiciar el encuentro entre el estudiantado y las asociaciones memorialistas a través de testimonios de la lucha antifranquista y de la represión que sufrieron las personas, bien directamente o sobre sus familiares.

Cuando se produce la intersección de intereses y acciones entre las instituciones de gobierno responsables del mantenimiento de la memoria, las instituciones educativas y las asociaciones memorialistas, los resultados alcanzan un volumen e interés muy importante. Los casos de Navarra y Cataluña son buen ejemplo de ello.

Las experiencias educativas que en la actualidad se están realizando abarcan todo tipo de proyectos, desde la memoria local, la reivindicación de la memoria de los barrios obreros, el contacto del alumnado con las voces de las víctimas, con la memoria silenciada o la búsqueda de relaciones con otras memorias más globales. Hay propuestas de gran valor que muestran las relaciones entre la educación en memoria histórica y la formación del pensamiento crítico, entre memoria e invisibilización de personas o identidades, relaciones entre memoria y presente o indagan en la memoria del presente-reciente. La memoria se expresa también a través de una gran diversidad de lenguajes literarios o artísticos.

A este respecto, uno de los ejes de diálogo y discusión se ha establecido en torno a los numerosos proyectos que pretenden generar espacios de debate, de discusión y de concienciación social a través de los lenguajes artísticos, en los que el aprendizaje se da a partir de las conexiones emocionales y corporales, y los espacios de memoria con una finalidad que se basa en la idea de transformación social. Estos proyectos son ejercicios que facilitan la empatía histórica y la identificación con la víctima debido a que convierten la memoria en una realidad cercana. Por su parte, las visitas a espacios de memoria humanizan el conflicto, que permite vincularlos con la vulneración sistemática de derechos humanos y trabajar lo que habitualmente es una realidad invisible en las aulas. La experiencia dice que, tras la visita, el alumnado no permanece insensible al tema o problema presentado, adquiere mejor los conocimientos y se implica más, al generarse espacios de debate y reflexión.

En definitiva, utilizar el arte o desplazarse a lugares de memoria supone una ruptura o un hito dentro de lo cotidiano que invita al alumnado a reflexionar sobre la memoria y desarrollar cuestionamientos éticos de una manera distinta. Se propone en ellos conseguir una participación activa del alumnado interpelándolo para que desarrollen un sentido crítico. Las aproximaciones previas ayudan a que los estudiantes realicen sus propios ordenamientos temporales y espaciales respecto a los hechos históricos que se abordan, así como a crear un ambiente propicio para la experiencia. Buscan tejer una memoria colectiva, es decir, un relato común que trascienda la individualidad. Hablar de nuestra identidad y reconocernos como sociedad respecto a nuestro entorno y a diferentes niveles. E intentan, asimismo, acompañar y contribuir al proceso de reparación rescatando esta memoria, en especial la de nuestros mayores. Es recurrente la interacción con personas de la tercera edad que vivieron los hechos, a veces a través del contacto directo u en otras, poniéndose en su situación, ya que son una descarga de emociones.

Con todo, somos conscientes de que hay problemas, dificultades y retos a los que atender. Hemos de avanzar más en propiciar visiones no androcéntricas de la realidad puesto que la especie humana está compuesta por hombres y mujeres, y en la reactivación de la coeducación como elemento transversal. También es importante abordar la renovación metodológica necesaria para abordar estas cuestiones en las clases. Deben surgir más proyectos que problematicen, desde el presente, el pasado y la memoria, que planteen preguntas y problemas históricos, a partir de los cuales el alumnado inicie un trabajo de indagación y de interacción entre iguales, que le ayude a formar su pensamiento histórico y a construir una conciencia histórica que relacione pasado, presente y futuro. Hemos de ayudar a las nuevas generaciones a reescribir la historia. También hay que abordar las dificultades prácticas de hacerse eco de los “sin voz”, cuyas identidades no han trascendido históricamente; esto merma las posibilidades de investigación del alumnado por el acceso más complicado a las fuentes.

Por otra parte, en no pocas ocasiones el alumnado se siente alejado de las memorias que se recuperan, no ya de los contextos históricos más lejanos (golpe estado del 36, guerra civil, franquismo), sino también de otros más recientes. Por ello, la construcción de una memoria democrática y su enseñanza no tiene por qué agotarse en el pasado traumático reciente, sino que puede también nutrirse de otros pasados y experiencias, de otras dimensiones de la realidad social propias de una historia global. Además, la aproximación del alumnado ha sido muchas veces a través de productos de ficción o noticias puntuales en los medios de comunicación. Falta en ocasiones una reflexión sobre el alcance real de las consecuencias de estos procesos históricos y la importancia de mantener su memoria. Incluso, aunque afortunadamente no es algo generalizado, se han escuchado voces que advierten de dificultades en el abordaje de estas cuestiones, con interrupciones e incluso el boicot, como parte del eco de los discursos negacionistas y de ultraderecha cada vez más presentes en nuestra sociedad. Se aboga por una falsa neutralidad, pero el profesorado es muy consciente que no existe la neutralidad cuando tratamos en clase la guerra civil o el franquismo, la dictadura o la represión, sino que hemos de tomar partido de manera clara por una democracia radical, por los derechos humanos y la justicia social.

En cualquier caso, pese a los nubarrones y dificultades, pretendemos continuar trabajando colectivamente, promoviendo nuevas experiencias y proyectos, abordando debates y nuevas perspectivas y evaluando lo ya realizado. Nos comprometemos a seguir fortaleciendo la Red Memoria, lugar de encuentro horizontal abierta a quien quiera compartir y colaborar, y a reunirnos nuevamente en el III Congreso Internacional Historia con Memoria en la Educación en 2026, aquí en Pamplona.

[Fuente: <https://congresohistoriaconmemoriaenlaeducacion.org>]

Eugenio Montale

Fin del 68

He contemplado desde la luna, o casi,
el modesto planeta que contiene
filosofía, teología, política,
pornografía, literatura, ciencias
exactas u ocultas. Dentro está también el hombre
y yo entre ellos. Y todo es muy extraño.

En pocas horas será de noche y el año
acabará entre explosiones de espumantes
y petardos. Tal vez de bombas o peor,
pero no aquí donde estoy. Si uno muere
a nadie le importa con tal que sea
desconocido y esté lejos.

De: *Satura. 1962-1970* (Mondadori, 1971)

[Eugenio Montale fue un poeta, ensayista y crítico de música italiano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1975.]